

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

WT/CTE/M/17

9 de abril de 1998

(98-1467)

Comité de Comercio y Medio Ambiente

INFORME DE LA REUNIÓN CELEBRADA LOS DÍAS 19 Y 20 DE MARZO DE 1998

Nota de la Secretaría

1. El Comité de Comercio y Medio Ambiente (CCMA) se reunió los días 19 y 20 de marzo de 1998 bajo la presidencia del Embajador C.M. See, de Singapur. En la reunión se aprobó el orden del día reproducido en el aerograma WTO/AIR/790.

Condición de observador para las organizaciones internacionales intergubernamentales

2. El CCMA acordó otorgar la condición de observador a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Programa de trabajo y calendario de reuniones para 1998

3. El CCMA adoptó su programa de trabajo y calendario de reuniones para 1998 (véase el anexo).

4. El Presidente afirmó que sus objetivos generales para el presente año serían promover el análisis de todos los puntos del programa de trabajo en el Comité y mejorar el entendimiento de los problemas que el CCMA trata de resolver. El Presidente consideró también importante seguir ampliando la colaboración en el análisis del Comité mediante la invitación a los representantes de las secretarías de los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMUMA) relacionados con el trabajo del CCMA para que informasen a éste acerca de las novedades de interés relativas a sus respectivos acuerdos. Por último, el CCMA presentaría un informe al Consejo General a finales de año. Para preparar la sesión de información con determinadas secretarías de los AMUMA que tendría lugar en el marco de la reunión de los días 23 y 24 de julio, el Presidente invitó a los Miembros a que comunicasen a la Secretaría qué AMUMA, a su entender, resultaría más útil invitar a que participasen.

5. El Presidente, en nombre del CCMA, felicitó a la Secretaría de la OMC por su eficaz organización del Simposio de ONG sobre comercio, medio ambiente y desarrollo sostenible, celebrado los días 17 y 18 de marzo.

6. El Director General Adjunto de la OMC se refirió al Simposio de ONG sobre comercio, medio ambiente y desarrollo sostenible, al que asistieron aproximadamente 150 organizaciones no gubernamentales (ONG) y en cuya sesión inaugural participaron el Director General de la OMC, el Secretario General de la UNCTAD, el Secretario Ejecutivo del PNUMA y el Administrador Adjunto del PNUD. El Simposio constituyó una oportunidad excepcional para que las ONG y los representantes de las organizaciones internacionales expusiesen informalmente sus puntos de vista en presencia de los Miembros de la OMC. En él, se formularon varias propuestas útiles para cualquier actividad futura, en particular respecto de la naturaleza de la participación, las cuestiones que se examinarán, la estructura de los debates y los posibles resultados. El Director General clausuró la

reunión expresando su satisfacción por los debates celebrados, la participación de ONG y, particularmente, la presencia de un número tan elevado de gobiernos en las deliberaciones. El Director General Adjunto expresó su agradecimiento a los gobiernos de los Miembros cuyas aportaciones financieras hicieron posible el Simposio y afirmó que la Secretaría seguiría reforzando su cooperación con los representantes de la comunidad de ONG.

7. El representante de las Comunidades Europeas recordó que las CE fueron uno de los promotores del establecimiento del CCMA. La trayectoria del Comité era bien conocida, aunque aún bastante breve si se comparaba con la de su organización patrocinadora, que cumpliría pronto 50 años. Desde la Conferencia Ministerial de 1996, la labor del Comité había seguido una pauta más analítica. Al igual que muchos Miembros, las CE pensaban que la labor del Comité al analizar los puntos de su orden del día había sido constructiva, pero que la Conferencia Ministerial de mayo constituiría una buena ocasión para reflexionar sobre la situación del CCMA y el rumbo a seguir. Tal reflexión era aún más necesaria tras las declaraciones realizadas en el Simposio de ONG de los días 17 y 18 de marzo. Las CE y sus Estados miembros habían participado con gran interés y escuchado atentamente las observaciones formuladas por los oradores, en particular de las ONG participantes. Las CE quedaron impresionadas por el sentimiento generalizado entre los oradores de que, hasta ahora, el CCMA no había satisfecho las expectativas creadas. A ese respecto, hubo numerosas peticiones de que se revitalizara el Comité, y se insistió en que el Director General de la OMC no había ocultado su valoración crítica y decepción por la falta de resultados concretos hasta la fecha. Las CE estaban dispuestas a colaborar sin reservas en un ejercicio tan importante y habían apuntado alguna idea sobre la forma de llevarlo a cabo.

8. Las CE opinaron que el eje formado por el comercio y el medio ambiente debía ocupar un lugar central en la labor de la OMC en todos sus aspectos y que el debate sobre esos temas debía estar más presente en las actividades básicas de la Organización. En realidad, desde que finalizó la Ronda Uruguay, la experiencia y los estudios teóricos seguían avalando la tesis de que el comercio y el medio ambiente podían complementarse mutuamente para alcanzar el objetivo del desarrollo sostenible, en particular mediante la sinergia adecuada y orientada de la liberalización mundial y un alto nivel de protección ambiental. Las CE opinaron que había importantes plazos que cumplir en el futuro, incluidos los de las dos próximas conferencias ministeriales, y que el interfaz de comercio y medio ambiente recibiría cada vez más atención. No sólo era mucho el trabajo que esperaba a la OMC en materia de medio ambiente, sino que, probablemente, para que en los próximos decenios se adoptase y aplicase cualquier nuevo e importante conjunto de acuerdos de la OMC, sería indispensable contar con el apoyo de las comunidades interesadas en el medio ambiente y el desarrollo sostenible, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados.

9. Hasta la fecha, un elemento significativo de los debates del Comité habían sido los beneficios resultantes para el medio ambiente de la supresión de restricciones al comercio. Ese tema era un punto importante en el programa de trabajo del CCMA, pero, en opinión de las CE, era indispensable dedicar un nivel similar de atención a los grupos de AMUMA y las relaciones entre grupos. Todos los sectores económicos examinados en el documento WT/CTE/W/67 y su addendum revestían interés, no sólo para la labor del CCMA, sino también para la OMC en general. Cualquier programa mundial futuro comprendería todos esos sectores, pero las CE estaban decididas a velar por que las cuestiones relacionadas con el medio ambiente ocupasen el lugar que les correspondía como elemento horizontal digno de atención en todos los sectores. Por lo tanto, el CCMA podría identificar y estudiar fórmulas prácticas en que el interfaz de comercio y medio ambiente se plasmase en situaciones beneficiosas para todos. Esos análisis serían de gran ayuda para cumplir las disposiciones y expectativas respecto al aumento de la capacidad en los países en desarrollo y la transferencia de tecnologías a esos países, objetivo previsto en numerosos AMUMA. Según las CE, era necesario prestar la debida atención a los problemas ambientales en todas las actividades de la OMC; a su debido tiempo, y en todo caso antes de la Conferencia Ministerial de 1999, convendría reforzar, bajo los auspicios de la OMC y, posiblemente, en cooperación con otras organizaciones internacionales, el

diálogo entre los formuladores de políticas de comercio y medio ambiente de alto nivel, con objeto de impulsar el proceso por el que los debates del CCMA cobrarían importancia en el proceso decisorio más general de la OMC. Para ello, todas las partes interesadas deberían estar dispuestas a centrar el diálogo en los temas de interés, a fin de que los debates y análisis pudiesen progresar.

10. El representante de la India aseguró al Presidente el apoyo de su país en la importante tarea que aguardaba al CCMA en 1998. Cada uno de los 10 puntos del programa de trabajo era igualmente importante y pertinente respecto del mandato del Comité. La India expresó su agradecimiento al Embajador Ekblom, de Finlandia, por la notable labor llevada a cabo en el CCMA bajo su presidencia en 1997. Desde que se creara en 1995, el CCMA había desempeñado una importante tarea, y su informe de 1996, adoptado por los Ministros en Singapur, era ejemplo de su vitalidad. Según la India, la labor del CCMA y las expectativas depositadas en él habían sido acordadas por unanimidad en 1996, cuando el Comité se convirtió en órgano permanente de la OMC; su labor, objeto de las expectativas de los Miembros, había de ser congruente con la de otros órganos permanentes de la OMC. Las complejas cuestiones de que se ocupaba el CCMA habían de examinarse a la luz de su función primordial como órgano permanente de la OMC, que consistía en preservar la integridad del sistema multilateral de comercio.

11. El representante del Japón pidió que se organizaran reuniones informales del CCMA para enriquecer los debates. Al igual que las CE, el Japón consideraba que los AMUMA eran importantes y que el equilibrio entre esos acuerdos y el acceso a los mercados debía mantenerse. También era importante el diálogo especial con las ONG.

12. El representante de la Argentina expresó la satisfacción de su delegación por la organización del Simposio de ONG.

13. El representante de Noruega afirmó que el Simposio de ONG había puesto de relieve la necesidad de profundizar en el diálogo con las organizaciones no gubernamentales. Como señalaron las CE, el tema del comercio y del medio ambiente recibiría más atención a causa de las próximas conferencias ministeriales. En ese contexto, tal vez fuese necesario redefinir la función del CCMA. Los aspectos relativos al medio ambiente deberían tenerse en cuenta siempre que fuera necesario, no sólo en el CCMA, sino también en otros órganos de la OMC y en futuras negociaciones emprendidas en el marco de la Organización.

14. El CCMA expresó su reconocimiento por el liderazgo desempeñado por el Embajador B. Ekblom, de Finlandia, mientras ocupó el cargo de Presidente del Comité en 1997.

Punto 6 El efecto de las medidas ambientales en el acceso a los mercados, especialmente en lo relativo a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, y los beneficios resultantes para el medio ambiente de la eliminación de las restricciones y distorsiones del comercio

Análisis sectorial

15. El Presidente recordó que la reunión giraba en torno al grupo de puntos del programa de trabajo relativo al acceso a los mercados y que se había llegado al acuerdo de emprender el examen sectorial del punto 6 sobre la base de las comunicaciones nacionales pertinentes y la documentación de la Secretaría. Cada sector se examinaría en el orden presentado en el documento WT/CTE/W/67 y su addendum, es decir, agricultura, energía, pesca, silvicultura, metales no ferrosos, textiles y vestido, cuero y servicios relacionados con el medio ambiente.

Agricultura

16. El representante de la Argentina afirmó que, según el Banco Mundial, entre las políticas más eficaces para mejorar la ordenación del medio ambiente figuraban las que utilizaban las señales emitidas por el mercado y por los precios para realizar la correspondiente asignación de recursos. Normalmente, a los recursos ambientales (por ejemplo, la tierra, el agua, la biodiversidad y la pesca) se les asignaban precios demasiado bajos de dos formas: a) mediante las subvenciones que reducían efectivamente el costo de la explotación excesiva o la contaminación del medio ambiente; b) a causa del mal funcionamiento de los mercados, que normalmente tendían a reflejar sólo los costos privados de la producción, dejando de lado los perjuicios causados a terceros por la contaminación y el agotamiento de los recursos naturales. En consecuencia, para lograr que el crecimiento y el desarrollo sostenible fuesen compatibles se requería una reforma en dos fases: a) un desplazamiento hacia precios de mercado libre, es decir, precios que reflejasen íntegramente los costos marginales privados de producción; y b) un desplazamiento más allá de los precios de mercado libre para permitir que los precios reflejasen los costes totales de producción. En consecuencia, la supresión de subvenciones era sólo un primer paso hacia el desarrollo sostenible, pero un paso indispensable. Dada la existencia de un mercado mundial, debería haber una política coordinada al respecto. Los mercados aislados eran modelos teóricos. Los países desarrollados, en particular los más ricos de ellos, eran los únicos que podían subvencionar fuertemente la producción y las exportaciones. Al hacerlo, no sólo estaban asignando recursos presupuestarios internos y obligando a sus consumidores a pagar un impuesto oculto, sino que distorsionaban también los precios internacionales.

17. El representante de la Argentina manifestó que, según la OCDE, el nivel de ayuda a la agricultura en los países de esa Organización se situó en torno a 280.000 millones de dólares EE.UU. en 1987. Ese nivel de ayuda se concentró principalmente en un reducido número de países de la OCDE y consistió en una de las formas de ayuda más distorsionadoras e ineficaces y menos transparentes: el sostenimiento de los precios del mercado. De acuerdo con la OCDE, sólo el 20 por ciento de los 280.000 millones de dólares gastados durante 1987 fue percibido por los agricultores, mientras que el resto se capitalizó en valores agrarios y fue captado por los proveedores de insumos. Lo que, en un contexto de prácticas agrícolas muy intensivas, significaba más fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, consumo energético, riego y, en consecuencia, mayor degradación del medio ambiente. El representante preguntó qué suponía eso para el medio ambiente mundial y para la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de los países no pertenecientes a la OCDE. Siempre que un gobierno rico decidía subvencionar la producción y las exportaciones agropecuarias, estaba fomentando nuevas inversiones en ese sector y, en consecuencia, impidiendo que esas inversiones se dirigiesen a otra parte, como por ejemplo a países en desarrollo en que la producción agropecuaria era menos intensiva y donde la pobreza, en particular la de tipo rural, era responsable de la degradación del medio ambiente. Por otra parte, los países en desarrollo no podían introducir reformas ambientales sólidas mientras continuase esa política irresponsable. El orador preguntó cómo podría exigirse a un productor agropecuario que detuviese la degradación del suelo y adoptase formas de cultivo inocuas para el medio ambiente, cuando sobreexplotar y reducir realmente las reservas de su capital natural podía ser la única alternativa a la quiebra.

18. En opinión de la Argentina, los precios deberían reflejar los costos ambientales de la producción, como habían acordado todos los países en la Cumbre para la Tierra de Río. Ello era imposible si los precios no reflejaban siquiera los costos de producción privados. Anteriormente, las intervenciones gubernamentales afectaban a la eficiencia nacional y daban origen a daños ambientales locales; esa situación había cambiado. Las mercancías (excepción hecha de los productos agropecuarios), el capital y la tecnología podían circular casi libremente por todo el mercado mundial. En la actualidad, los países eran más interdependientes y las subvenciones agropecuarias, al igual que otras, tenían efectos nocivos de alcance mundial. El representante preguntó cómo podrían coordinarse los esfuerzos para resolver esa situación. Las futuras negociaciones del sector agropecuario que se celebrasen a partir de 1999 constituirían una oportunidad de asegurar la cooperación y obtener

beneficios tanto en términos de eficiencia económica como ambiental. Ello representaría una situación realmente beneficiosa en todos los aspectos para el medio ambiente local y mundial. Cuando un agricultor decidía la cantidad de insumos necesarios, tales como fertilizantes, plaguicidas, herbicidas o agua de riego, tenía en cuenta tanto los beneficios previstos como los costos de esos insumos. Puesto que en la mayoría de los países de la OCDE las subvenciones agrícolas se concedían mediante políticas de sostenimiento de los precios, los agricultores utilizaban los insumos hasta que el rendimiento marginal obtenido por la utilización de una unidad adicional del insumo fuese igual a su costo. Si se sustentaban los precios, el rendimiento aumentaba, lo que a su vez incrementaba la utilización de insumos. Así pues, la supresión de las subvenciones era una primera medida para lograr que los insumos perjudiciales para el medio ambiente se utilizasen de forma socialmente óptima, como se establecía en una publicación del Banco Mundial.

19. Según la Argentina, la supresión de las subvenciones era también necesaria para regularizar los precios. Unos precios equilibrados debían reflejar los costos de producción privados y sociales. Los precios transmitían un mensaje que hacía referencia a la escasez de los recursos naturales utilizados en la producción y determinaban las decisiones adoptadas por los inversores, los productores y los consumidores. Algunas políticas gubernamentales, por ejemplo las relativas a subvenciones, distorsionaban los precios y condicionaban negativamente las decisiones en materia de inversión, métodos de producción, comercio internacional y hábitos de consumo. Los efectos adversos se dejaban sentir en la eficiencia económica, el comercio internacional y el medio ambiente. La Argentina no trataba de sugerir que bastaría con que los países responsables de esas prácticas suprimiesen las subvenciones que fomentaban la producción y las exportaciones para obtener por fuerza resultados socialmente óptimos. También sería necesario que esos países rebasaran los límites del mercado, es decir, subsanasen las disfunciones del mercado y creasen incentivos para compensar las externalidades ambientales. El proceso tenía que comenzar en alguna parte y el mejor punto de arranque consistía en eliminar las subvenciones que impedían que los precios reflejasen los costos de producción privados.

20. El representante del Japón afirmó que un análisis exhaustivo debería comprender tanto los efectos ambientales positivos como los negativos y mencionar el hecho de que la extensión y naturaleza del impacto de las medidas comerciales en el medio ambiente variaba en función de las condiciones naturales, tales como el clima, el suelo, los métodos de producción y otras condiciones económicas y sociales de los diferentes países y zonas. Era impropio sacar la conclusión simplificada de que deberían suprimirse todas las medidas comerciales contrarias a la liberalización del comercio y prestarse sólo atención a los beneficios resultantes para el medio ambiente. En el documento WT/CTE/W/67 se hacían numerosas referencias a los efectos positivos de la liberalización del comercio para el medio ambiente, pero escaseaban las descripciones de los negativos. Con ello se daba una impresión poco equilibrada, como se había indicado en el Simposio de ONG. Así pues, se necesitaba un análisis más empírico de los posibles efectos negativos de la liberalización del comercio en las externalidades ambientales positivas asociadas a la agricultura, como se indicaba en la nota de pie de página número 38. Como las actividades agrícolas se basaban en diversas condiciones naturales, el análisis de los efectos ambientales de la liberalización agrícola no debería simplificarse. Por ejemplo, en las zonas monzónicas asiáticas, los arrozales desempeñaban una función múltiple en la protección del medio ambiente, en particular al evitar la erosión del suelo y las inundaciones.

21. En opinión del Japón, era necesario el análisis empírico de los efectos resultantes para el medio ambiente de la reorientación de la producción causada por la liberalización del comercio. Las consecuencias a largo plazo que esa reorientación tendría sobre el medio ambiente eran difíciles de determinar, dada la diversidad de condiciones agrícolas en cada país y región. La reorientación de la producción de los cereales a las hortalizas y las frutas, determinada por los mecanismos del mercado, podía requerir una mayor utilización de fertilizantes y plaguicidas. En tales casos, la liberalización del comercio no siempre tenía efectos automáticos positivos para el medio ambiente. El Japón compartía el temor a los efectos negativos de la liberalización del comercio que muchas

organizaciones no gubernamentales habían expresado en el Simposio de ONG. Habrían de examinarse con detenimiento las experiencias empíricas relacionadas con los efectos negativos de la liberalización del comercio agropecuario para que el CCMA pudiese llevar a cabo un análisis exhaustivo de los efectos de la liberalización del comercio en el medio ambiente.

22. El representante de Australia manifestó que, en términos absolutos, la agricultura era, con mucho, el sector más subvencionado, y que existían pocas dudas sobre las repercusiones negativas que ello tenía en el medio ambiente debido a la concentración de la producción a nivel regional y la promoción de métodos productivos menos sostenibles, en particular la utilización excesiva de fertilizantes y plaguicidas y la poca rotación de los cultivos. En el documento WT/CTE/W/67 se indicaba que las políticas económicas causantes de distorsión del comercio estaban evolucionando para dar cumplimiento a los compromisos contraídos en la Ronda Uruguay, y eran importantes, junto con las consideraciones de política nacional. Asimismo, se indicaba que, a pesar de la importancia creciente de los pagos directos, la mayor parte de la asistencia seguía tomando la forma de sostenimiento de los precios del mercado basado en los productos, lo que aumentaba directamente los precios y la producción en los países correspondientes. Con frecuencia, ese efecto se veía reforzado por derechos arancelarios y subvenciones a la exportación que venían a sumarse a la tendencia mediante sus repercusiones en los mercados internacionales. Los efectos de esas políticas de apoyo para el medio ambiente eran claros, ya que los niveles y la intensidad de la producción agropecuaria aumentaban a causa de ellas. Ese aspecto guardaba especial relación con el uso de productos químicos agrícolas, fertilizantes, agua, sistemas de gestión agropecuaria y métodos intensivos de ganadería, y era generalmente aceptada su vinculación con los problemas ambientales, como por ejemplo el deterioro de la calidad de aguas y suelos y la contaminación atmosférica local.

23. Según Australia, en el documento WT/CTE/W/67 se evaluaban convenientemente los probables efectos resultantes para el medio ambiente de la liberalización del comercio agropecuario, y se hacía referencia a la aplicación de modelos económicos que preveían algún tipo de trasvase de la producción de los países que concedían subvenciones a los que no las concedían, en particular a países en desarrollo. Muchos de los efectos adversos para el medio ambiente asociados a las actuales ayudas a la agricultura deberían reducirse a medida que se reducían los niveles de ayuda. Sin embargo, era posible que las externalidades ambientales asociadas al transporte de carga cobraran importancia, que la reorientación hacia cultivos de exportación aumentase la especialización agrícola, con efectos negativos para el medio ambiente en algunos países, o que el incremento de la producción en determinados países resultase particularmente nocivo a causa de las políticas o las condiciones ambientales predominantes en ellos. Aunque eran válidas, esas observaciones subrayaban la importancia de la política de medio ambiente, más que constituir un motivo para suspender esa política ante la necesidad apremiante de liberalizar el comercio. Otro postulado del documento WT/CTE/W/67 era que la liberalización del comercio aportaría ventajas económicas al aumentar la eficiencia y el crecimiento económico, y que ello podría redundar en una mejor ordenación del medio ambiente. Asimismo, se mencionaban los posibles aspectos negativos para el medio ambiente resultantes de los efectos de escala económica (es decir, la relación del PIB con el cambio climático), pero el mensaje global era que esos efectos consistían más en una ramificación del desarrollo económico general que en la contribución que la liberalización del comercio pudiese hacer al crecimiento. Ese efecto de escala se trataría más adecuadamente mediante políticas de medio ambiente, tales como la iniciativa "Factor 10" de la OCDE, que preconizaba mejoras en el rendimiento de los insumos, especialmente respecto de las sustancias tóxicas.

24. En opinión de Australia, en debates futuros debían identificarse las principales reformas de la política comercial agrícola que pudiesen plasmarse en mejoras del medio ambiente. Una prioridad era el abandono más decidido de las medidas de sostenimiento de los precios del mercado. Se debía prestar atención al hecho de que los pagos directos a los agricultores seguían constituyendo un incentivo para mantener niveles excesivos de producción y utilización de insumos. Un aspecto fundamental de las futuras actividades de reforma sería imponer una mayor disciplina a los pagos

directos, que habían aumentado notablemente durante los últimos años y velar por que esa disciplina fuese compatible con el objetivo de promover el desarrollo sostenible, particularmente en relación con las prácticas agrícolas sostenibles. Para ello, serían necesarias nuevas reducciones sustanciales de los niveles de ayuda y la reestructuración del tipo de asistencia prestada, con objeto de reducir al mínimo su relación con los niveles de utilización de insumos y de producción. Asimismo, otro sector fundamental de reformas debía ser la reducción de la progresividad arancelaria y de las crestas arancelarias, en particular respecto de los productos agropecuarios elaborados. La mejora de las oportunidades de acceso a los mercados era una cuestión decisiva del programa de reformas del comercio agropecuario. Un criterio para evaluar el éxito de las negociaciones futuras debía ser si brindaban o no a los países exportadores de productos agropecuarios más oportunidades para aumentar los beneficios de sus exportaciones y a la vez adoptar políticas sostenibles de gestión de los recursos, y en particular más ocasiones para diversificar las actividades económicas. Una mayor elaboración de los productos agropecuarios en los países de producción primaria podría reducir la necesidad apremiante de obtener divisas mediante una explotación más intensa de la base de recursos naturales. Esa diversificación de la estructura económica planteaba sus propios problemas ambientales y ponía de manifiesto la importancia de adoptar políticas adecuadas y bien orientadas para asegurar que el mayor crecimiento económico fuese compatible con el desarrollo sostenible.

25. El representante de Filipinas, en nombre de la ASEAN, se mostró de acuerdo con gran parte del contenido del documento WT/CTE/W/67, en particular en lo tocante a la agricultura. En ese documento se adoptaba un enfoque equilibrado de los beneficios resultantes para el medio ambiente de la supresión de las restricciones y distorsiones del comercio y se exponían las externalidades ambientales positivas y negativas asociadas a la liberalización del comercio, tanto relativas al suelo como a las aguas subterráneas o efluentes, o al aire. La eliminación de las restricciones y distorsiones del comercio agropecuario podría contribuir sustancialmente al logro de beneficios ambientales. El documento WT/CTE/W/67 contenía un análisis empírico y teórico que brindaba buenos argumentos a quienes participaban en la labor de la OMC en materia de agricultura. El impacto ambiental de las distorsiones originadas por las políticas de ayuda a la agricultura era importante, y no se percibía únicamente en el medio ambiente de quienes podían permitirse prácticas de subvención, sino también en el de quienes carecían de oportunidades para competir en los mercados mundiales o incluso en su propio mercado. Ejemplo de ese impacto era el caso de los cereales y productos lácteos, sectores en que los países desarrollados tendían a mezclar un cóctel de políticas altamente perturbadoras de sostenimiento de los precios del mercado, pagos de complementos, contingentes de producción y ayuda directa a los ingresos. El recurso a prácticas de subvención a la exportación cuando los contingentes de producción no bastaban para impedir los excedentes internos hacían patente la absurdidad imperante en el comercio agropecuario mundial. Ese ejemplo podía extrapolarse a productos tales como la carne, los granos y los aceites vegetales. La ASEAN compartía el criterio de que, si las externalidades de la producción y del consumo se integraban adecuadamente en los procesos decisorios, los objetivos comerciales y ambientales serían mutuamente complementarios. Sin embargo, la realidad enseñaba que esa integración sería difícil de llevar a cabo si los países, especialmente los países en desarrollo, carecían de capacidad inicial para incluir en sus proyectos la protección del medio ambiente. Aunque los beneficios ambientales de la liberalización del comercio eran manifiestos, la ASEAN opinaba que la eliminación de las distorsiones en el sector agropecuario debería comenzar en los países que tenían recursos para sostener y alterar los precios agrícolas.

26. El representante de las Comunidades Europeas afirmó que la sección dedicada a la agricultura en el documento WT/CTE/W/67 se prestaba al debate, y que en ella se habían tenido en cuenta las observaciones de las CE. El análisis habría resultado fructífero si se hubiese dado cabida a los diferentes sectores agropecuarios, ya que los efectos ambientales variaban notablemente de unos sectores a otros. Asimismo, habría sido útil examinar los diferentes programas de introducción de cambios en la producción, ya que la relación entre la liberalización del sector agropecuario y los beneficios resultantes para el medio ambiente no era automática. El nivel de los precios y la intensidad de la producción agropecuaria dependían no sólo de la liberalización, sino también, y en

gran medida, del desarrollo de los mercados, del crecimiento demográfico y de las innovaciones tecnológicas. Mientras que los precios no reflejasen las externalidades ambientales, ya fuesen relativas a los costos o a los beneficios, los mecanismos del mercado no darían lugar automáticamente a una asignación óptima de los recursos. Las políticas de medio ambiente trataban, en su calidad de tales, de corregir esas imperfecciones del mercado. Con frecuencia, la liberalización del comercio requería políticas complementarias de gestión de recursos y de medio ambiente, aspecto que podría haberse subrayado en el documento. En los países en desarrollo, la liberalización del comercio y los cambios resultantes en la estructura de los precios podían, en determinadas condiciones, dar lugar a una intensificación de la producción y a la degradación del suelo, en particular si la producción se orientaba hacia cultivos de exportación. La intensificación de la producción agropecuaria podía verse afectada por la mayor necesidad de productos alimenticios en esos países. El documento podría haber prestado más atención a las externalidades positivas asociadas a las prácticas agropecuarias, tales como la preservación de la biodiversidad, la regulación de los microclimas, la prevención de la erosión del suelo y de las inundaciones y la preservación de comunidades y cultivos locales.

27. El representante de Corea dijo que en el Simposio de ONG se había abordado una gran diversidad de cuestiones relacionadas con el medio ambiente, el comercio y el desarrollo sostenible. En él se había puesto de manifiesto que el desarrollo sostenible era un concepto que comprendía no sólo la protección del medio ambiente, sino también el crecimiento económico y el desarrollo social. Los vínculos entre el medio ambiente, el comercio y el desarrollo sostenible podían estudiarse mejor mediante la cooperación y la compartición de responsabilidades entre la OMC, la UNCTAD, el PNUMA, el PNUD y las ONG. También se había indicado durante el Simposio que la liberalización del comercio propiamente dicha no constituía un fin en sí misma. Aunque generalmente se reconocía que la eliminación de las restricciones y distorsiones del comercio era potencialmente beneficiosa para el medio ambiente, los beneficios no se obtendrían simplemente mediante la liberalización del comercio, sino que deberían acompañarse de una política ambiental adecuada.

28. Corea insistió en que las ventajas de la liberalización del comercio agropecuario deberían considerarse desde la perspectiva más amplia del desarrollo sostenible. Corea había expuesto ya con detalle los efectos ambientales positivos de la agricultura, y el documento WT/CTE/W/67 arrojaba alguna luz sobre las externalidades ambientales positivas asociadas a la agricultura, pero el análisis se centraba en los beneficios resultantes para el medio ambiente de la liberalización del sector agropecuario. La agricultura contribuía a impedir la erosión del suelo y las inundaciones, regular los microclimas, preservar la biodiversidad, proporcionar zonas de esparcimiento y mantener las culturas y comunidades locales. Cuando el análisis se actualizase, deberían reflejarse de forma equilibrada las diferentes perspectivas relativas al impacto de la liberalización del comercio agropecuario. Como se indicaba en el documento WT/CTE/W/67, determinar los resultados de la liberalización del sector agropecuario era difícil, ya que existían elementos aleatorios y situaciones específicas de cada país. Asimismo, se necesitaban más datos empíricos para establecer el impacto ambiental definitivo de la liberalización del comercio. En ausencia de un análisis preciso, deberían estudiarse otras formas objetivas de evaluar los beneficios resultantes para el medio ambiente. La CDS estaba elaborando indicadores del desarrollo sostenible para medir con objetividad los logros alcanzados al respecto en todos los sectores de interés, y la OCDE estaba preparando indicadores similares, en número de ocho, centrados en el medio ambiente y la agricultura, con inclusión del paisaje y la biodiversidad. Esos métodos podrían utilizarse también en la OMC. La Secretaría debería examinar la posibilidad de desarrollar ese tipo de indicadores, capaces de cuantificar los efectos ambientales de la agricultura.

29. El representante de Nueva Zelanda afirmó que el debate sobre la agricultura se centraba en varios beneficios tangibles resultantes de la liberalización del comercio en ese sector. A partir de mediados del decenio de 1980, Nueva Zelanda había reformado sus políticas agrícolas, ya que eran insostenibles. Sin embargo, esa reforma de las políticas había tenido importantes beneficios para el medio ambiente. Por ejemplo, había reducido la aplicación de sistemas de producción intensiva, la utilización de fertilizantes, el consumo energético en la producción, la especialización de la

producción y las prácticas de monocultivo, y creado un paisaje más atractivo en algunas zonas. Asimismo, se había abandonado la explotación agrícola de las tierras marginales y fácilmente erosionables. Un beneficio menos patente para el medio ambiente era que los asesores en materia de políticas, que antes se encargaban de administrar un arsenal de medidas de ayuda a la agricultura, tenían ahora libertad para afrontar los nuevos problemas, incluidos los de política ambiental. El orador observó que en el documento WT/CTE/W/67 se prestaba atención prioritaria a los problemas ambientales que podrían ocasionar los programas de ayuda que animaban artificialmente a los agricultores a incrementar la producción, dando lugar, entre otras cosas, a la degradación del suelo y la utilización excesiva de fertilizantes y plaguicidas. Existían otros efectos que deberían examinarse, en particular las consecuencias negativas para el medio ambiente resultantes de la eliminación de los excedentes de productos agropecuarios originados por tales planes de ayuda. Aunque no deseaba subestimar la importancia de los problemas sociales expuestos en el párrafo 15, esos problemas no deberían utilizarse como excusa para evitar una mayor liberalización del comercio que podría redundar en beneficios sociales. El orador señaló que en otras partes del documento, como por ejemplo en el párrafo 10, se concedía importancia a la evaluación de las reformas desde la perspectiva de la economía en general.

30. Para Nueva Zelanda, la referencia hecha en el párrafo 40 a la cuestión de las zonas de protección verdes y la "belleza natural del paisaje" no constituía un argumento convincente frente a la necesidad de una mayor liberalización del comercio agropecuario. Era posible aplicar políticas ambientales nacionales con esos fines y al mismo tiempo tratar de alcanzar los objetivos de la liberalización del comercio. En realidad, las políticas ambientales podían contribuir indirectamente al desarrollo del comercio, por ejemplo en lo que respecta a los servicios turísticos. La liberalización del comercio no constituía un obstáculo para la adopción de políticas ambientales: no eran aspectos mutuamente excluyentes. Se había mencionado el hecho de que la liberalización del comercio podría tener efectos perjudiciales para el medio ambiente y que, antes de eliminar las distorsiones del comercio, se deberían estudiar esos efectos. En ese contexto, el orador se refirió a la observación de la Argentina de que un primer paso importante era la regularización de los precios. Sin precios correctos, era difícil determinar los efectos ambientales de las políticas distorsionadoras del comercio.

31. El representante de los Estados Unidos afirmó que cabían pocas dudas de que la liberalización del comercio agropecuario podía dar lugar a situaciones beneficiosas para todos, tanto en materia de comercio como de medio ambiente. Uno de los resultados mas importantes que podían surgir de la labor del Comité consistiría en celebrar un debate más informado sobre la relación existente entre esos obstáculos y las mejoras ambientales. En la Ronda Uruguay se habían esgrimido muchos argumentos falsos según los cuales, si se liberalizaba el comercio, se producirían efectos adversos para la agricultura y el medio ambiente. Uno de los problemas puestos de manifiesto por esos argumentos era que, a falta de información adecuada, resultaba fácil llegar a conclusiones erróneas. La finalidad del CCMA era aportar información a ese debate. La distorsión de las señales de mercado había causado problemas ambientales importantes relacionados con la utilización excesiva de fertilizantes, la alteración del valor de la tierra y las prácticas agrícolas antieconómicas. Por esa razón, muchos países que anteriormente habían protegido a sus comunidades agrícolas sentían la necesidad de reformar sus políticas. El orador coincidió con la Argentina en que las subvenciones serían un importante tema de trabajo en futuros debates sobre agricultura, pero que había también otros sectores de distorsión que también merecían atención, como por ejemplo los derechos arancelarios elevados y determinadas prácticas de empresas comerciales estatales. Los Estados Unidos no disientían de las delegaciones que consideraban necesario examinar los potenciales beneficios resultantes para el medio ambiente de la liberalización del comercio agropecuario en general. El CCMA se hallaba en una etapa de investigación; se había adoptado la primera medida respecto a la liberalización del comercio agropecuario y era ya posible determinar sus repercusiones. A ese respecto, los Estados Unidos habían sentido interés por conocer la experiencia nacional de Nueva Zelanda. También serían útiles las experiencias nacionales específicas de los países que habían sugerido que la liberalización del comercio podría acarrear efectos adversos para el medio ambiente. Aunque se

habían expuesto argumentos a favor de los efectos ambientales beneficiosos de los arrozales, preguntó si ello significaba que existían razones para llenar de arrozales paisajes enteros. En las declaraciones formuladas en el Simposio de ONG se había destacado la importancia de velar por la aplicación de políticas complementarias respecto de los posibles efectos adversos de la liberalización. Ello no era motivo para oponerse a la liberalización del comercio; antes bien, como la liberalización estaba teniendo lugar, debían examinarse sus potenciales repercusiones ambientales y adoptarse enfoques de política eficaces.

32. El representante de Suiza afirmó, respecto de la sección sobre agricultura del documento WT/CTE/W/67, que su delegación no estaba completamente de acuerdo en que se hiciese sistemáticamente referencia a las subvenciones como origen del problema. Una subvención que favoreciese métodos de producción contaminantes o la utilización de productos tóxicos debería suprimirse; sin embargo, existían determinadas formas de ayuda interna que podían ser beneficiosas para el medio ambiente. Suiza se refirió a su experiencia nacional en la utilización de fertilizantes químicos. La reciente evaluación de una red de 200 granjas experimentales, llevada a cabo por el Departamento de Agricultura de Suiza, demostró que los agricultores suizos utilizaban ahora menos fertilizantes químicos. El consumo actual de nitratos era ya inferior a los niveles de 1950. Desde que se inició la reforma agrícola en 1996, la cantidad de abonos nitrogenados había descendido en un 15 por ciento, y se preveía que para el año 2002 habría descendido en un 25 por ciento. Esas cifras eran resultado de la comparación plurianual de la agricultura tradicional, la producción integrada y la producción biológica, que había servido de base para establecer los pagos económicos directos. Como resultado de esos pagos, la fruticultura se había convertido en una alternativa a la producción tradicional y la proporción de tierras de barbecho había disminuido considerablemente. Esas cifras ponían de manifiesto que no todas las formas de ayuda interna a la agricultura eran perjudiciales para el medio ambiente. Aunque en el párrafo 35 del documento WT/CTE/W/67 se hacía referencia a los efectos ambientales positivos resultantes de la recuperación de la tierra para actividades de esparcimiento y otros usos no agrícolas, varios estudios habían mostrado que la utilización de la tierra con fines turísticos era menos favorable para la diversidad biológica que determinadas prácticas agrícolas.

33. El representante del Canadá manifestó que en la introducción y en la sección sobre agricultura se hacía referencia a la importancia de que los precios interiores reflejasen los efectos de las externalidades ambientales. Sin embargo, no se habían explicado las repercusiones que, de no ser así, se derivarían para los regímenes comerciales liberales. Tales fallos del mercado contrarrestaban en parte la potencial contribución de la liberalización del comercio a la asignación eficaz de los recursos. La observación era congruente con la postura respecto de los efectos ambientales de la liberalización del comercio agropecuario que el Canadá había adoptado en el grupo de trabajo mixto de la OCDE sobre agricultura y medio ambiente. El Canadá hacía suyas las observaciones de la Argentina y de Australia y se congratulaba de que Nueva Zelanda les hiciese partícipes de su experiencia nacional en la supresión de las subvenciones. El CCMA se beneficiaría de tales intercambios de experiencias. La liberalización del comercio era una condición necesaria, pero no suficiente, para la sostenibilidad ambiental. Aunque en el documento WT/CTE/W/67 se indicaba que "el abandono de tierras podría reducir el valor de ésta, disminuir las zonas de protección verdes y destruir la belleza natural del paisaje", los programas de cesación de cultivos o los destinados a abandonar la explotación agrícola de tierras solían orientarse a tierras ecológicamente vulnerables y marginales en términos de productividad agropecuaria. El Canadá, al igual que Nueva Zelanda, consideraba que el impacto sobre el valor de las tierras de belleza natural era una cuestión económica y cultural que difícilmente podía ser tratada de forma útil por el CCMA. Por ejemplo, no estaba claro de qué modo las zonas de protección verdes disminuirían si se abandonaba la tierra, a menos que ésta se dedicara a otros usos. La preocupación mostrada por los riesgos ambientales de un mayor tráfico de carga debido a la liberalización del comercio podría canalizarse a través de notificaciones relativas a medidas sanitarias y fitosanitarias: entre 1995 y 1997 se habían recibido 365 notificaciones relacionadas con la agricultura en el marco del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. En

cuanto al paso de la producción agrícola variada al monocultivo a medida que los cultivos alimentarios eran sustituidos por cultivos para la exportación, se planteaban cuestiones tanto de medio ambiente como de pobreza y eran necesarios más datos empíricos que reflejasen la relación entre esos aspectos.

34. El representante de Noruega afirmó que en el documento WT/CTE/W/67 se establecía la premisa de que, al no reflejarse los efectos de las actividades perjudiciales para el medio ambiente, se emitían señales que podían inducir a error respecto al aprovechamiento óptimo de los recursos. En el documento no se examinaba hasta qué punto estaban generalizadas esas externalidades en la agricultura, ni en qué medida las políticas agrícolas (por ejemplo, en forma de impuestos o subvenciones) internalizaban los efectos externos y aseguraban una asignación de los recursos más idónea de lo que habría sido en otro caso. Asimismo, podían analizarse más a fondo el alcance de las externalidades y la función de las políticas agrícolas o ambientales en la internalización de esas externalidades. En opinión de Noruega, el documento podría asimismo examinar hasta qué punto los objetivos de liberalización del comercio y de medio ambiente eran mutuamente complementarios si las externalidades se generalizaban y no se internalizaban. La lista de efectos ambientales expuesta en el párrafo 13 debería comprender la degradación del paisaje de interés cultural; la última frase : "se alienta la deforestación y otros usos indebidos de la tierra" debería cambiarse por: "el resultado puede ser la deforestación y otros usos indebidos de la tierra". Respecto al párrafo 14, era importante tener presente que algunas ayudas constituían una compensación o un incentivo para los agricultores a cambio de ocuparse de aspectos ambientales, lo que podía considerarse un pago directo por la producción de externalidades ambientales positivas. En la primera frase del párrafo 15, debería suprimirse la expresión "[e]n algunos países"; asimismo, debería indicarse en ese párrafo que los Ministros de Agricultura de la OCDE habían examinado en marzo de 1998 el cometido multifuncional de la agricultura e indicado que las medidas de política bien orientadas permitirían al sector contribuir a la viabilidad de las zonas rurales y tratar de resolver los problemas de medio ambiente y al mismo tiempo favorecer la utilización eficaz y sostenible de los recursos en la agricultura.

35. En opinión de Noruega, la última frase del párrafo 15: "Otros criterios, como los de carácter social y ambiental, pueden ocupar un lugar importante..." debería modificarse para que dijera "son importantes". En los párrafos 33 y 34 se presentaba de forma excesivamente simplificada la cuestión de los posibles efectos ambientales negativos, tales como pérdida de biodiversidad, deforestación y degradación del suelo, resultantes de la expansión agrícola en regiones en que esa expansión recibía menos ayuda. Las externalidades positivas mencionadas en la nota 38 eran importantes y deberían tratarse con detalle y examinarse en el propio texto. La urbanización resultante de la reducción de la actividad agrícola podría tener efectos perjudiciales para el medio ambiente y merecía más atención. Respecto a los párrafos 39 y 40, la reducción de las tierras de labranza podría tener también otros efectos negativos, tales como la concentración de la población a causa de las pocas oportunidades de empleos alternativos y la pérdida de paisajes de interés cultural, valiosos no sólo como biotopos, sino también por sus cualidades recreativas y panorámicas.

36. El representante de la India manifestó que, como país predominantemente agrícola, la India tenía interés en esa sección. En relación con el párrafo 33 y la nota de pie de página 28 del documento WT/CTE/W/67, era importante tener presente que para un país en desarrollo autosuficiente y exportador cualquier estímulo resultaba positivo; por ello, a reserva de las consideraciones sobre seguridad alimentaria, se debería fomentar la liberalización. Aunque en el párrafo 40 se indicaban algunas repercusiones negativas de la liberalización, precisamente a causa de ellas, como se señalaba en el párrafo 3, era importante el complemento de una política nacional de medio ambiente para el desarrollo sostenible. En cuanto a la diferencia entre cultivos alimentarios y cultivos de exportación establecida en el párrafo 42, era necesario no perder de vista que, para muchos países en desarrollo, los cultivos de exportación no siempre eran cultivos no alimentarios, como por ejemplo en el caso del arroz. En cuanto a las tesis expuestas en el párrafo 43, era necesario estudiarlas

con mayor detenimiento antes de aceptarlas; probablemente, el comercio no aumentaría, si no que se reorientaría a medida que la producción se desplazase a sectores de ventaja comparativa, lo que estaba en consonancia con la conclusión expuesta en el párrafo 33. En cuanto al análisis de las prácticas agrícolas hecho en el párrafo 45, era necesario tener en cuenta la difícil situación de los pequeños y medianos agricultores.

37. El representante del Brasil compartía la opinión de la Argentina, Australia y Nueva Zelandia y pensaba que el CCMA debería profundizar en el análisis de las potenciales situaciones beneficiosas para todos. El Brasil tenía interés en examinar el acceso a los mercados en el sector agropecuario, que representaba el 40 por ciento del PNB del país. Los obstáculos al comercio en ese sector afectaban a las exportaciones agropecuarias brasileñas e impedían el acceso a recursos financieros que podían destinarse al establecimiento de métodos de producción sostenibles. El Brasil animaba a las delegaciones a recurrir a su experiencia nacional para aportar más información al debate. El Brasil desearía contribuir al proceso de identificación de situaciones beneficiosas para todos exponiendo el caso de las plantaciones de soja brasileñas. Dada la biodiversidad existente en el Brasil, la agricultura tenía diferentes repercusiones ambientales que requerían modelos diferentes de producción sostenible. Entre las dificultades para desarrollar esos modelos se encontraba la necesidad de lograr ingresos agrícolas óptimos. En el Brasil, la cuestión de los ingresos agrícolas estaba directamente relacionada con la introducción de sistemas de ordenación ambiental en la agricultura. El mantenimiento o la elevación de niveles óptimos de ingresos agrícolas dependía de un mejor acceso de los productos a los mercados.

38. El caso de las plantaciones de soja constituía un ejemplo significativo de la relación existente entre los ingresos y la utilización de prácticas de cultivo ecológicamente racionales. El Brasil era el segundo mayor productor mundial de soja; un tercio de la producción nacional se destinaba al mercado interno, y los dos tercios restantes se exportaban, lo que representó 3.800 millones de dólares EE.UU. en 1995. Los ingresos producidos por la soja dependían del acceso a los mercados extranjeros. Esos ingresos habían permitido la introducción de técnicas de plantación directa en el cultivo de la soja. Desde 1990 la utilización de la plantación directa como práctica de producción sostenible había permitido destinar aproximadamente 1 millón de hectáreas más cada año al cultivo de soja. Ese sistema había aportado también diversos beneficios para el medio ambiente, tales como la reducción de la erosión del suelo en más de un 90 por ciento y una menor contaminación por productos agroquímicos. Las emisiones de carbono habían disminuido también entre un 40 y un 70 por ciento como resultado de la menor utilización de gasóleo en la labores agrícolas. Asimismo, se había reducido considerablemente la utilización de herbicidas y plaguicidas. El hecho de que la soja generase los niveles más altos de ingresos agrícolas en comparación con los principales productos agropecuarios del Brasil constituía un ejemplo de la forma en que el acceso a los mercados estimulaba una producción sostenible. Los ejemplos prácticos de otras delegaciones podrían resultar útiles para mostrar la relación existente entre el comercio y la introducción de sistemas de ordenación del medio ambiente.

Energía

39. El representante del Brasil afirmó que el documento WT/CTE/W/67 constituía la base para el examen de situaciones beneficiosas para todos. Para profundizar en la labor sobre acceso a los mercados, los Miembros podrían presentar contribuciones propias en que se diera cabida a otros sectores o productos específicos que podrían beneficiarse de la liberalización del comercio y resultar a su vez beneficiosos para el medio ambiente. Según el Brasil, el CCMA debía prestar especial atención al sector energético. Como se indicaba en el documento WT/CTE/W/67, la producción en ese sector no era un fin en sí misma, sino un importante insumo para casi todas las actividades económicas. En el documento se identificaba el petróleo, el carbón, el gas natural y la energía eléctrica como fuentes primarias de energía. Asimismo, se establecía que ese sector estaba aún bastante subvencionado y que algunos impuestos sobre la energía seguían restringiendo el comercio;

la supresión de las subvenciones y la reestructuración de los impuestos para armonizar los precios de la energía con los costos sociales marginales podrían dar como resultado importantes beneficios para el medio ambiente. De acuerdo con esas conclusiones y habida cuenta de los compromisos establecidos en el Protocolo de Kyoto, el Brasil se interesaba por las fuentes de energía renovables, en particular por el combustible de alcohol. Según el párrafo d) del artículo 4 de la Convención sobre el Cambio Climático todas las partes deberían "promover la gestión sostenible, fomentar y apoyar con su cooperación la conservación y el reforzamiento, según proceda, de los sumideros y depósitos de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, inclusive la biomasa, los bosques y los océanos, así como otros ecosistemas terrestres, costeros y marinos". Los artículos 10 y 11 del Protocolo de Kyoto iban más lejos en la aplicación de esos compromisos para "formular, donde corresponda y en la medida de lo posible, unos programas nacionales y, en su caso, regionales para mejorar la calidad de los factores de emisión locales...", y se formulaban y aplicaban programas que guardarían relación, entre otras cosas, con los sectores de la energía, del transporte y la industria, así como con la agricultura, la silvicultura y la eliminación de los desechos. A la vista de esos compromisos, el Brasil proponía que el CCMA examinase posibles situaciones beneficiosas para todos en relación con la energía. Los países en desarrollo podrían beneficiarse del acceso a los mercados, mientras que los países desarrollados podrían tener mejor acceso a fuentes de energía renovables más limpias que redujesen las emisiones antrópicas responsables del aumento del efecto invernadero.

40. El Brasil presentó su experiencia nacional en la utilización de combustible de etanol. En respuesta a la crisis del petróleo de mitad del decenio de 1970, el Gobierno del Brasil, en cooperación con el sector privado, creó en 1975 el Programa Nacional del Alcohol ("PROALCOOL") para producir alcohol a partir de la caña de azúcar y construir motores compatibles con el etanol. A fin de equilibrar mejor el consumo de petróleo del Brasil y su producción de crudo, se llevaron a cabo investigaciones desde finales del decenio de 1960 hasta principios del decenio de 1970 para identificar una fuente de combustible alternativa al petróleo y económicamente viable. El etanol, extraído de la caña de azúcar, se eligió como posible alternativa. Para 1985, tras 10 años de funcionamiento del programa, se habían invertido unos 6.500 millones de dólares EE.UU. en la producción de 50.000 millones de litros de etanol, se habían creado unos 500.000 puestos de trabajo y 2,5 millones de vehículos circulaban con etanol puro, y toda la gasolina despachada en las estaciones de servicio tenía un porcentaje del 20 por ciento de etanol. El Brasil poseía tecnología y equipo capaces de mantener una producción anual de 16.000 millones de litros y potencialmente estaba en condiciones de exportar tecnología, equipos y servicios al respecto. Al reducir drásticamente el nivel de monóxido de carbono desprendido por los vehículos de motor, PROALCOOL contribuía al empeño del Brasil por preservar el medio ambiente. Puesto que el etanol obtenido a partir de la caña de azúcar era un recurso renovable, se evitaba el 15 por ciento de las emisiones totales del Brasil procedentes de combustibles fósiles, es decir, 9,45 millones de toneladas de carbono. Aproximadamente, el 25 por ciento de los automóviles para pasajeros fabricados en el Brasil utilizaban ya etanol. Actualmente, unos cuantos países del mundo, como por ejemplo el Canadá, los Estados Unidos y Sudáfrica, ensayaban asimismo combustibles de alcohol tanto mezclados como puros (en casi un 100 por cien) (por ejemplo en los Estados Unidos, las mezclas de etanol representaban aproximadamente el 12 por ciento del mercado total de gasolina). En algunos otros países, se estaban llevando a cabo proyectos para determinar si era viable la sustitución del gasóleo por etanol.

41. Para el Brasil, la utilización del etanol reportaba diversos beneficios para el medio ambiente, particularmente relacionados con la reducción de gases de efecto invernadero en consonancia con los compromisos de Kyoto, como por ejemplo los siguientes: a) reducción de los niveles de monóxido de carbono (reducción del 25 al 30 por ciento en las emisiones con un 10 por ciento de etanol mezclado con la gasolina; y reducciones que llegaban al 70 por ciento con combustible de etanol); b) reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Aunque en la combustión del etanol se desprendía dióxido de carbono, éste se reciclaba en tejido orgánico durante el crecimiento de las plantas; de hecho, la

utilización de etanol en la gasolina podía incluso dar como resultado una reducción neta de los niveles atmosféricos de dióxido de carbono; c) la utilización de un recurso renovable. El etanol se obtenía a partir de materias primas biológicas renovables, tales como cultivos agrícolas y subproductos forestales. Se podían obtener alcoholes comerciales a partir de la caña de azúcar, del maíz o de otras plantas como recurso para producir etanol; y d) reducción de las emisiones que destruyen el ozono. La utilización de etanol o de gasolina mezclada con etanol daba como resultado una reducción neta de las emisiones destructoras del ozono, tales como el monóxido de carbono y los hidrocarburos. Asimismo, cabía mencionar otros beneficios, como la creación de puestos de trabajo y la retención de las poblaciones rurales. Por otra parte, las emisiones de gas derivadas de la producción de caña de azúcar eran menores que las de otras fuentes de energía.

42. Al igual que las fuentes de energía tradicionales identificadas en el documento WT/CTE/W/67 (petróleo, carbón, gas natural y energía eléctrica), el etanol está sujeto a aranceles elevados. Los principales países desarrollados aplican aranceles que van de 0,17 a 0,33 dólares EE.UU. por litro de alcohol etílico. Algunos países aplican también derechos adicionales a sus aranceles, añadiendo, por ejemplo, 0,1427 dólares a un arancel del 2,8 por ciento. En cuanto a otras distorsiones del comercio, las exportaciones subvencionadas podían llegar en algunos países hasta 39,3 millones de dólares por 450.000 hectolitros de alcohol etílico. La reducción de las subvenciones podría dar por resultado costos más bajos en la producción de alcohol. Era un hecho que el desarrollo de la industria alcoholera se había beneficiado de subvenciones en sus fases iniciales en respuesta al aumento del precio del petróleo durante los decenios de 1970 y 1980. Sin embargo, esas subvenciones se habían eliminado gradualmente. El Brasil reconocía que determinadas subvenciones del sector energético podrían utilizarse para conceder incentivos al desarrollo y utilización de energía renovable o de tecnologías más inocuas para el medio ambiente, como se indicaba en el párrafo 60 del documento WT/CTE/W/67. El Brasil consideraba que la mejora del acceso al mercado para el etanol dependería de los cambios tecnológicos futuros que permitiesen a los motores de los automóviles utilizar cerca del 100 por cien de combustible de etanol. Algunos países mezclaban ya su gasolina con un pequeño porcentaje de etanol, lo que constituía una oportunidad importante para los productores de este alcohol.

43. El Brasil tenía propósito de presentar más información sobre esa cuestión. Existía la posibilidad de aplicar reducciones arancelarias y eliminar las distorsiones del comercio relacionadas con ese producto específico para mejorar las condiciones de acceso al mercado de esa fuente de energía más limpia, aumentar la eficiencia en la asignación de los recursos y obtener beneficios para el medio ambiente. El alcohol constituía un ejemplo concreto de situación beneficiosa para todos, que haría más alcanzable el principal objetivo del CCMA de asegurar que el comercio y el medio ambiente se complementasen mutuamente.

44. El representante de las Comunidades Europeas afirma que en la sección dedicada a la energía en el documento WT/CTE/W/67 se prestaba especial atención a los efectos de las subvenciones y los impuestos relacionados con los combustibles fósiles y a las ventajas que podría tener su reducción para el medio ambiente. Ese aspecto tenía importancia, pero era necesario matizar su valoración. Aunque la supresión de las subvenciones respecto de algunas fuentes de energía, tales como el carbón, podría aportar beneficios automáticos para el medio ambiente, a menudo se necesitaban otras medidas complementarias para fomentar la internalización de las externalidades ambientales en los precios de la energía. La internalización de las externalidades ambientales derivadas de la producción y del consumo de energía era un requisito fundamental, y en el documento no se había concedido suficiente importancia a la función que los impuestos podían desempeñar para lograr ese objetivo. También habría merecido la pena prestar más atención a los efectos ambientales positivos que podrían derivarse de la atenuación de las restricciones del comercio que tenían impacto en tecnologías renovables y ecológicamente idóneas relacionadas con la energía. En el documento no se había estudiado suficientemente la importancia cada vez mayor de los problemas mundiales del medio ambiente, en particular el cambio climático, resultantes de la utilización de combustibles fósiles.

Habría sido útil hacer referencia al Protocolo de Kyoto a la Convención sobre el Cambio Climático, en virtud de cuyo anexo I los países habían asumido compromisos cuantificados de limitación y reducción de las inversiones respecto de seis gases de efecto invernadero. En el anexo I, las Partes habían acordado la reducción progresiva o eliminación gradual de las deficiencias del mercado, los incentivos fiscales, las exenciones tributarias y arancelarias y las subvenciones en todos los sectores emisores de gases de efecto invernadero que fuesen contrarios al objetivo de la Convención sobre el Cambio Climático y la aplicación de instrumentos de mercado (artículo 2.1 a) v) del Protocolo de Kyoto). En el anexo I, las Partes habían acordado asimismo cooperar entre sí para potenciar la eficacia individual y combinada de sus políticas y medidas en ese y otros sectores.

45. El representante de la India apoyó la propuesta de las CE de que el CCMA examinase el Protocolo de Kyoto. Coincidió con lo afirmado en el párrafo 57 del documento WT/CTE/W/67 en el sentido de que la energía tenía repercusiones en todos los aspectos de la actividad económica. La India tenía reservas respecto a la propuesta, mencionada en el párrafo 66, de que era necesario evaluar los importantes beneficios para el medio ambiente que conllevaría la supresión de las subvenciones del sector energético en los países en desarrollo. La India evaluaría el impacto en los costos de producción y el acceso a nuevas tecnologías, especialmente tecnología de la información. Aparte de plantear la cuestión de la supresión de las subvenciones a la energía, mencionada en el párrafo 70, se debería examinar también la transferencia de tecnología ecológicamente idónea como otra forma de promover la utilización de la energía. La India desearía hacer observaciones sobre el sector del carbón a que se hace referencia en el párrafo 73.

46. El representante del Canadá afirma que, tras la adopción del Protocolo de Kyoto, la escala y la naturaleza creciente de las subvenciones al carbón que se mantenían en algunos países eran perturbadoras. Una de las contribuciones importantes del Protocolo de Kyoto podría ser el alcance de su mensaje mundial a favor de las fuentes energéticas con bajas emisiones de carbono. Las subvenciones podían ocultar importantes señales del mercado al respecto. En el documento WT/CTE/W/67 podría haberse examinado también la importancia de desarrollar técnicas poco contaminantes de uso del carbón. El mecanismo para un desarrollo limpio establecido en Kyoto era un instrumento potencialmente útil para la transferencia en el sector privado de tecnologías que facilitasen el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de reducción de emisiones. El Canadá era consciente de la posición de vanguardia del Brasil en el desarrollo de combustibles alternativos con menor contenido de carbono y le expresaba su agradecimiento por compartir sus experiencias y ofrecerse para presentar un documento en que se expusiese esa experiencia con detalle.

47. El representante de Marruecos mencionó el hecho de que la reunión de Kyoto relativa a la Convención sobre el Cambio Climático no figuraba en la sección dedicada a la energía en el documento WT/CTE/W/67, como habían señalado las CE. El Protocolo de Kyoto indicaba a la comunidad internacional la forma de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y el comercio internacional debería atenerse a las disposiciones de ese Acuerdo. Observó que era necesario prestar asistencia técnica a los países en desarrollo en el contexto de actividades realizadas conjunta o bilateralmente.

Pesca

48. El representante del Japón afirmó que la sobreexplotación era uno de los principales problemas del sector pesquero. La conservación de las poblaciones de peces no podría lograrse únicamente reduciendo las subvenciones, ya que la principal causa de la sobreexplotación era la falta de una ordenación sostenible de la pesca; la reducción de las subvenciones no siempre daría lugar a la sostenibilidad de la pesca. Para mejorar la situación, deberían analizarse exhaustivamente todos los factores, y era indispensable la cooperación entre las organizaciones internacionales competentes. La FAO se ocupaba de las cuestiones del exceso de capacidad y, en abril, celebraría una reunión de expertos sobre esa materia. Al examinar las cuestiones de comercio y medio ambiente en el sector de

la pesca convendría que el CCMA contase con la colaboración de la FAO. Algunas subvenciones afectaban positivamente a los ecosistemas marinos, por ejemplo al restablecer los bancos de pesca, favorecer la realización de investigaciones de interés y la aplicación de tecnologías compatibles con el medio ambiente e instruir a los pescadores en la adquisición de métodos ecológicos de pesca.

49. El representante de Nueva Zelandia propuso que, dado el interés existente en la comunidad internacional en general en este tema, como se había puesto de manifiesto en el Simposio de ONG, el documento WT/CTE/W/80 dejase de tener carácter reservado. Añadió que las pesquerías mundiales atravesaban una crisis y que se sobreexplotaban las poblaciones de peces mundiales. Gran parte de ese problema se debía al exceso de capacidad, a causa del cual sobraban pescadores y faltaba pescado. A Nueva Zelandia le preocupaban los efectos comerciales de las subvenciones a la pesca, que contribuían a mantener ese exceso de capacidad. Las subvenciones a la actividad pesquera fomentaban la explotación de los recursos de las pesquerías por encima de niveles económicos normales. La rentabilidad indebidamente aumentada propiciaba el exceso de capacidad y la sobrepesca, particularmente en casos de deficiente ordenación pesquera. Esa situación tenía repercusiones en la oferta de pescado a los consumidores y fabricantes. A su vez las distorsiones de la oferta ejercían presiones a la baja en los precios mundiales del pescado. La baja de los precios limitaba especialmente la capacidad de los países en desarrollo para obtener rentabilidad económica de sus recursos pesqueros. Por otra parte, los países en desarrollo no sólo debían competir con sectores subvencionados, sino también hacer frente a la progresividad arancelaria. Los efectos para el comercio eran graves y debían tenerse presentes al examinar los beneficios ambientales de la supresión de subvenciones a la pesca. Nueva Zelandia hacía suya la observación que se había formulado, y que debía examinarse en relación con otros sectores, según la cual no bastaba con eliminar las medidas distorsionadoras del comercio para obtener automáticamente beneficios para el medio ambiente. Sin embargo, en el pasado decenio, la comunidad internacional había prestado gran atención al desarrollo de normas y políticas para asegurar una mejor conservación y ordenación de los recursos pesqueros. A ese respecto, se habían preparado varios acuerdos, tales como el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorias, así como códigos de conducta. Pero en ningún caso esos acuerdos abordaban el problema de la capacidad excesiva, que se exacerbaba con las subvenciones.

50. Nueva Zelandia acogía con satisfacción las contribuciones de la OCDE y la FAO en la labor que estaban llevando a cabo en ese terreno. En el APEC, el Japón y Nueva Zelandia habían copatrocinado un estudio en el que figuraría una lista de los tipos genéricos de subvenciones a la pesca y los objetivos de política implícitos en ellos y trataría de analizarse su relación con el Acuerdo de la OMC sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. Asimismo, se proponía que los miembros del APEC suprimiesen voluntariamente todas las subvenciones prohibitivas y velasen por que las subvenciones no recurribles se aplicasen de conformidad con las normas de la OMC. Esa propuesta se presentaría a los ministros del APEC en junio de 1998, prueba de que se reconocía la necesidad de acción en ese sector. Nueva Zelandia esperaba que los Miembros adoptasen medidas voluntarias para eliminar las subvenciones a la pesca, ya que si no se adoptaban esas medidas se produciría una presión creciente para recurrir a las disposiciones del Acuerdo sobre Subvenciones y al mecanismo de solución de diferencias. En el documento WT/CTE/W/80 se facilitaba información útil sobre los diversos tipos de subvenciones notificados por los Miembros de la OMC en ese sector. En unas cuantas notificaciones se identificaban objetivos ambientales como parte de la razón de ser de una subvención; por su parte, Nueva Zelandia examinaría esa información. Aunque se había observado que determinadas subvenciones podrían ser beneficiosas para el medio ambiente, era importante tener presentes los efectos secundarios de algunas de ellas. Si una subvención tenía por efecto que los pescadores siguieran faenando en una pesquería insostenible, sería necesario examinar cuidadosamente esa situación. Nueva Zelandia acogía también de buen grado los comentarios relativos a su documento WT/CTE/W/52.

51. El representante de Noruega manifestó que el factor más importante para lograr pesquerías sostenibles era la aplicación de políticas de ordenación de los recursos. Sin embargo, la ordenación de los recursos quedaba fuera del alcance de la OMC. Como se destacaba en el documento WT/CTE/W/67, el comercio de productos pesqueros se veía afectado por medidas tradicionales, tales como obstáculos arancelarios y no arancelarios; en el sector de la pesca existían diversas formas de subvenciones, muchas de las cuales tenían efectos negativos para las pesquerías, al tiempo que otras podían contribuir a reducir la actividad pesquera. La cuestión de si la liberalización del comercio afectaba a los recursos pesqueros y de qué forma permanecía sin respuesta en el documento WT/CTE/W/67. Se deberían estudiar todos los aspectos de las subvenciones a la pesca antes de sacar conclusiones sobre sus efectos, y la labor futura debería servir para establecer una distinción clara entre reservas sobreexplotadas y eficazmente gestionadas. Esa distinción se había hecho en estudios de la OCDE que tendían a sacar la conclusión de que, probablemente, la liberalización del comercio tendría sólo un pequeño impacto en el sector pesquero. La ordenación de los recursos era un factor más importante.

52. El representante de los Estados Unidos afirmó que, aunque los documentos WT/CTE/W/67 y WT/CTE/W/80 enriquecían el debate, convendría seguir profundizando en el análisis hecho por Nueva Zelandia. Estaba claro que, aunque la eliminación de las subvenciones no podía resolver todos los problemas del medio ambiente, el actual nivel de actividad en el sector de la pesca no sería posible sin cuantiosas ayudas. Puesto que las pesquerías del mundo estaban en crisis, se necesitaba todo tipo de contribuciones para mejorar la situación. Los Estados Unidos estaban de acuerdo con el Japón, Noruega y Nueva Zelandia en que sería útil la aportación de otras organizaciones, tales como la FAO, la OCDE y la CDS, por ejemplo mediante informes actualizados de la Secretaría sobre su labor o la contribución directa de las propias organizaciones. En el Simposio de ONG se indicó que el proceso de notificación de la OMC relativo a las subvenciones a la pesca no funcionaba bien. En ese contexto, el orador se mostró partidario de levantar el carácter reservado del documento WT/CTE/W/80.

53. El representante de Australia dijo que los documentos WT/CTE/W/67 y WT/CTE/W/80 ponían de relieve que el enfoque de comercio y medio ambiente era aplicable al sector de la pesca. Este sector se caracterizaba sin duda por ser objeto de importantes distorsiones de política económica que, dados su naturaleza y su tamaño, tenían repercusiones en los mercados internacionales. Asimismo, la actividad pesquera ejercía una influencia directa e importante en el entorno físico, lo que actualmente era motivo de gran preocupación a causa de las numerosas pesquerías sometidas a gran presión y la disminución de las reservas. Los registros conocidos de capturas se situaban por encima de niveles sostenibles y la pesca no declarada contribuía a agravar el problema. Como se indicaba en el documento WT/CTE/W/67, la FAO estimaba que el 60 por ciento de las especies ícticas ordinarias del mundo estaban totalmente explotadas, sobreexplotadas o en proceso de recuperación tras un proceso de agotamiento anterior. Actualmente, la FAO estimaba que era necesaria una reducción del 30 por ciento de la capacidad pesquera mundial para permitir la recuperación de las poblaciones ícticas sobreexplotadas. Esa situación se debía a la distorsión de la estructura de costos del sector pesquero causada por el gran volumen de las subvenciones. El objetivo de algunas subvenciones era mejorar la sostenibilidad ecológica de las actividades pesqueras. En el documento WT/CTE/W/80 se indicaba que esas subvenciones quedaban eclipsadas por las que aumentaban o mantenían el exceso de capacidad pesquera. Aún cuando en determinadas circunstancias podían justificarse, las denominadas subvenciones positivas, orientadas hacia objetivos de protección ambiental, debían diseñarse cuidadosamente para asegurar el logro de esos objetivos. El peligro residía en que los pagos acabasen incorporándose a las corrientes de ingresos de los pescadores en activo y fomentando la pesca.

54. En opinión de Australia, el documento WT/CTE/W/80 era ilustrativo de la diversidad de subvenciones otorgadas por una serie de países a los pescadores. A juzgar por las descripciones de muchas de esas subvenciones, parecía probable que tuviesen repercusiones en la estructura de los

costos y en los niveles de actividad de ese sector en diverso países y, por lo tanto, en el medio marino. En tal caso, era importante que la OMC siguiese reuniendo información sobre la naturaleza y el alcance de las subvenciones en ese sector. Se había señalado la creciente importancia del comercio pesquero para los países en desarrollo, ya que 10 de las 41 economías vulnerables dependientes de un solo producto basaban en el pescado el 40 por ciento de sus exportaciones, como mínimo. Para esos países sería especialmente importante la armonización de las mejoras en las condiciones del mercado y la ordenación ambiental. Los países más pequeños y menos ricos, cuyas posibilidades de dedicar recursos a la ordenación del medio ambiente son menores, tropiezan con especiales dificultades. El desarrollo de la capacidad podía ser necesario para obtener el doble beneficio. El mayor rendimiento resultante de la reforma de los mercados internacionales permitiría también a esos países mejorar su capacidad para gestionar las pesquerías.

55. El representante de las Comunidades Europeas dijo que en el documento WT/CTE/W/67 se examinaban varios elementos que tenían repercusiones para el sector pesquero y las poblaciones de peces. El aspecto esencial de la explotación sostenible de los recursos era la gestión de las pesquerías, no el comercio. En el sector pesquero era particularmente importante que la liberalización del comercio fuese acompañada de una gestión sostenible de los recursos tanto a nivel nacional como internacional. Las pesquerías se ponían como ejemplo de la incapacidad de los mercados para integrar los costos y beneficios ambientales. Las organizaciones pesqueras regionales desempeñaban una función decisiva en la gestión sostenible de las pesquerías. Las subvenciones no eran intrínsecamente buenas o malas para las poblaciones de peces; las subvenciones que corregían las externalidades ambientales no causaban distorsión del comercio, mientras que las aplicadas directamente a la actividad pesquera solían distorsionar la asignación de recursos. Sin embargo, las CE abrigan reservas respecto a la afirmación categórica del documento WT/CTE/W/67 de que "es un hecho ampliamente reconocido que las subvenciones a la pesca contribuyen notablemente ... a los problemas de ordenación de los recursos pesqueros". Aunque en algunas organizaciones se había sugerido que determinadas subvenciones tenían efectos sobre la ordenación de los recursos, con ello no se condenaban todas las formas de subvenciones. Podría haberse hecho referencia a las medidas no arancelarias relacionadas con el tránsito y el acceso a los puertos, que podían tener un impacto significativo en la conservación de los recursos, especialmente cuando se utilizaban para impedir la pesca ilícita. También podría haberse hecho referencia a las medidas comerciales utilizadas contra los países renuentes a cooperar en la ordenación responsable de los recursos pesqueros en altamar.

56. El representante de la Argentina expresó su agradecimiento a Nueva Zelanda y a los Estados Unidos por sus documentos sobre el sector de la pesca, que constituía un ejemplo de situación beneficiosa para todos. Mostró su acuerdo con la observación de Nueva Zelanda sobre el interés de la comunidad ambiental, expresado en el Simposio de ONG, por estudiar situaciones beneficiosas para todos. El CCMA no debería perder la oportunidad de promover los beneficios resultantes para el medio ambiente de una mayor liberalización del comercio. Se admitía que las subvenciones no eran el único factor que dificultaba la ordenación sostenible de las pesquerías. Uno de los principales factores era el acceso libre a los recursos pesqueros, en particular fuera de la zona de 200 millas y respecto a especies altamente migratorias o poblaciones transzonales. Además, muchos países en desarrollo tenían dificultades para negociar acuerdos de acceso equitativo y exigir su cumplimiento respecto de las pesquerías situadas en sus zonas económicas exclusivas, debido a su escasa capacidad de vigilancia y su situación económica. Puesto que los países en desarrollo se veían obligados a obtener beneficios a corto plazo, la explotación sostenible de los recursos era un lujo que muchos no podían permitirse. En ese contexto, las subvenciones a la producción concedidas a las flotas de altura eran particularmente nocivas, al igual que ocurría en el caso examinado de la agricultura. Aunque la capacidad de la OMC para intervenir en la mejora de la ordenación pesquera se limitaba a su esfera de competencia, la reducción de las subvenciones permitiría un aprovechamiento más eficaz de los recursos, que a su vez aliviaría la presión sobre las reservas ícticas. La aplicación de políticas ambientales y sostenibles de ordenación de los recursos tenía que correr parejas con la eliminación de las políticas gubernamentales, por ejemplo en materia de subvenciones, que favorecían el agotamiento

de esos recursos. El orador expresó su apoyo a la propuesta de Nueva Zelanda de levantar el carácter reservado del documento WT/CTE/W/80 y consideró asimismo que resultaría muy útil invitar a otras organizaciones intergubernamentales, como por ejemplo la OCDE y la FAO, a participar en el debate del CCMA.

57. El representante de Corea expresó su agradecimiento a Nueva Zelanda y los Estados Unidos por sus contribuciones al sector de la pesca. Corea compartía con el Japón y Noruega la opinión de que el exceso de capacidad y la sobrepesca habían causado graves problemas a la sostenibilidad de la actividad pesquera. Sin embargo, había otros aspectos que debían tenerse en cuenta, tales como las políticas de ordenación de los recursos y otros obstáculos al comercio. La recopilación relativa a las subvenciones notificadas por Miembros de la OMC, contenida en el documento WT/CTE/W/80, comprendía subvenciones favorables y desfavorables para el medio ambiente. Por ejemplo, se concedían subvenciones al "Programa de reconversión del sector pesquero" para facilitar la diversificación a largo plazo de las comunidades afectadas por la dependencia de la pesca o para proporcionar empleo a trabajadores desplazados por la disminución de la actividad pesquera; y una subvención en forma de pago diferido de impuestos para facilitar la mejora estructural de las pequeñas y medianas empresas. Ciertos países concedían subvenciones para elevar los ingresos de los pescadores sin aumentar el volumen de capturas, mejorando el valor añadido de los productos pesqueros y la calidad, elaboración y conservación del pescado. Existían también subvenciones para el abandono temporal o definitivo de la actividad pesquera y para el desguace de barcos de pesca; y estaban muy generalizadas las subvenciones para la formación profesional. Corea había introducido también subvenciones para la reestructuración del sector pesquero con miras a recolocar a los pescadores en otros sectores. Eran necesarios análisis para determinar el efecto neto de las subvenciones en el medio marino. Asimismo, debía hacer distinción entre las diversas subvenciones y totalizar los efectos netos analizados, tanto positivos como negativos, de las subvenciones relacionadas con la pesca. Corea era partidaria de que la OMC colaborase con otras organizaciones internacionales pertinentes, tales como la FAO y la CDS, para reforzar los conocimientos del CCMA sobre esas cuestiones.

58. El representante del Canadá manifestó que en el documento WT/CTE/W/67 se describía fielmente la situación de las pesquerías mundiales, en particular la amenaza para la sostenibilidad de los recursos pesqueros mundiales resultante de la capacidad excesiva de captura y la sobrepesca. Las subvenciones se identificaban como uno de los principales factores que daban lugar al exceso de capacidad, si bien se indicaba asimismo que determinadas subvenciones podían tener efectos positivos para el medio ambiente al reducir la capacidad de las flotas, permitir la readaptación profesional de los pescadores, acrecentar las poblaciones de peces y propiciar la recompra de buques y de licencias de pesca. Esos eran los tipos de subvenciones que el Canadá apoyaba en parte para reducir la presión ejercida sobre los recursos pesqueros. En el párrafo 98 se indicaba que era difícil determinar por separado los efectos de la eliminación de las restricciones al comercio en ese sector con respecto a otros muchos factores que influían también en él. El Canadá compartía las reservas expresadas con respecto a las subvenciones a la pesca. Sin embargo, también deberían tenerse en cuenta los beneficios resultantes para el medio ambiente de la eliminación de medidas arancelarias y no arancelarias. Los obstáculos que mantenían el nivel de los precios artificialmente elevado aumentarían la competencia importadora en el mercado y ejercerían presiones a la baja sobre los precios. Ello ocasionaría la racionalización del sector nacional, que algunos de sus miembros ineficientes deberían abandonar, reduciéndose así el tamaño de las flotas nacionales. El efecto sobre la capacidad de captura y la sostenibilidad de los recursos sería tan positivo como la eliminación de las subvenciones. Se debería prestar más atención a esos beneficios. Las cifras citadas en el documento WT/CTE/W/80 eran datos estadísticos de la FAO correspondientes a 1992 y relativos a subvenciones; resultarían muy útiles nuevos trabajos de la FAO y otros para actualizar esos datos. El Canadá era partidario de que se levantase el carácter reservado del documento WT/CTE/W/80, dado el interés mostrado por los participantes en el Simposio de ONG.

59. El representante de Tailandia, en nombre de la ASEAN, expresó su deseo de realizar comentarios sobre el documento WT/CTE/W/80 más adelante.

60. El representante de Marruecos afirmó que la ordenación adecuada del medio marino contribuiría a la protección y al desarrollo sostenible de los recursos pesqueros. Según las investigaciones científicas, las poblaciones mundiales de peces estaban disminuyendo a causa de la sobreexplotación y los métodos de pesca utilizados, tales como redes de enmalle y de deriva, particularmente en las zonas económicas exclusivas y en altamar. Se deberían prever medidas de protección y desarrollo de los recursos pesqueros mediante la disminución y eliminación de las subvenciones a la pesca destinadas a reducir el costo de las inversiones de capital en el sector. La eliminación de esas distorsiones, aun cuando no garantizase el aprovechamiento viable de las pesquerías, era un medio para reforzar la sostenibilidad. La progresividad arancelaria constituía un problema para los países en desarrollo y resultaba perjudicial para la diversificación de los productos pesqueros y el acceso a los mercados. Se deberían establecer programas para promover métodos de pesca sostenibles y propiciar los períodos de descanso biológico. En el derecho del mar, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la CITES, el Acuerdo relativo a la promoción y ordenación de la pesca en alta mar, el Acuerdo relativo a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y migratorias y el Código de Conducta de la FAO regulaban esas cuestiones.

61. El observador de la OCDE dijo que se estaba emprendiendo un estudio sobre la cuestión de las transferencias financieras gubernamentales y la forma en que influían en la transición a una actividad pesquera responsable. De momento, la relación entre esas transferencias y el comercio internacional no era tema de análisis. Un gran número de países había mostrado en el Comité de Pesca de la OCDE su interés por estudiar los aspectos comerciales, pero sólo después de haber analizado los efectos en la sostenibilidad de los recursos. El modelo utilizado en el actual estudio de la OCDE para reunir información sobre transferencias financieras tendría flexibilidad suficiente para ser aplicado a otros análisis.

62. La observadora de la FAO manifestó que su Organización estaba llevando a cabo un estudio sobre las subvenciones en el sector pesquero centrado en los países en desarrollo, como complemento del estudio de la OCDE. Según algunos indicios, los niveles mundiales de subvención a la pesca eran inferiores a los 54.000 millones de dólares EE.UU. publicados en 1992. Algunas estimaciones se situaban en torno a los 14.000 millones de dólares. Si se comparaban los países desarrollados y los países en desarrollo, el nivel de las subvenciones en los segundos era muy inferior y más concentrado en algunos de ellos. La oradora indicó que el Japón patrocinaba en abril un grupo de trabajo técnico sobre el exceso de capacidad pesquera, y el Comité de Pesca de la FAO organizaba en junio una reunión sobre comercio pesquero en que se examinaría, entre otras cuestiones, la de comercio y medio ambiente.

63. Respecto al levantamiento del carácter reservado del documento WT/CTE/W/80, la Secretaría afirmó que el hecho de que las ONG hubiesen tenido acceso al documento WT/CTE/W/67 les había permitido hacerse una idea clara de la importante labor del CCMA y de la amplitud con que muchas de las cuestiones que les interesaban se examinaban durante las deliberaciones del Comité. Muchas ONG habían empezado a comprender que la OMC tenía una función que desempeñar, por ejemplo, en la mayor liberalización del comercio en sectores específicos.

64. El Presidente invitó a las delegaciones que, según habían indicado, necesitaban mantener consultas con sus capitales respecto al levantamiento del carácter reservado del documento WT/CTE/W/80, a que le informaran del resultado de sus consultas.

Silvicultura

65. El representante del Canadá presentó el documento WT/CTE/W/81-G/TBT/W/61, en que su delegación expone la experiencia nacional del Canadá en materia de certificación, normas y etiquetado en el sector forestal. Ese documento era fruto de las consultas celebradas en el Canadá no sólo con los departamentos gubernamentales federales interesados, sino también con todos los grupos que habían elaborado los enfoques examinados en el documento. Aunque su publicación había sido responsabilidad del Gobierno del Canadá, sería injusto no reconocer las contribuciones sumamente valiosas realizadas por esos grupos no gubernamentales. El documento había resultado útil al Canadá para mejorar su entendimiento y comprensión de los diversos enfoques, que reforzaban su convicción de que el CCMA podía desempeñar una función importante en la coordinación de las políticas nacionales. Para facilitar el examen más a fondo de ese documento en el Canadá y en otras partes, se había publicado como documento de distribución general; por otra parte, se había publicado con la signatura conjunta CTE-TBT debido a que en él se examinaban cuestiones relativas a normas y etiquetado que quedaban comprendidas en el ámbito de aplicación del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. El Canadá solicitaba que la presente declaración se facilitase al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio para que fuera incluida en sus actas. Por otra parte, el Canadá se congratulaba por el empeño de las CE en incorporar las cuestiones de medio ambiente a la labor general de la OMC, y esperaba con interés el debate más activo de las cuestiones relativas a normas y etiquetado en el Comité de OTC.

66. Los bosques y los productos forestales constituían un sector de vanguardia cuyas cuestiones de comercio y desarrollo sostenible incumbían a los gobiernos, a la rama de producción y a la sociedad civil en general. Y no eran cuestiones teóricas, sino de verdadero impacto ambiental, económico y social. En el debate se había insistido en que las prácticas sostenibles de ordenación de los recursos reforzaban tanto los objetivos ambientales como los económicos. Los bosques del Canadá representaban el 10 por ciento de la superficie forestal mundial, extensión casi doble a la de la UE, y cubrían aproximadamente la mitad del país. Los bosques comercialmente explotables representaban aproximadamente el 50 por ciento de la superficie forestal total del Canadá. El sector de productos forestales era el principal contribuyente neto a la balanza comercial del Canadá, con exportaciones por valor de unos 30.000 millones de dólares EE.UU. en 1996. El empleo directo ascendía aproximadamente a 300.000 puestos de trabajo, de los que gran parte correspondían a zonas rurales. En contraste con muchos países, cuyos bosques pertenecían básicamente a empresas o ciudadanos privados, el 94 por ciento de los bosques del Canadá eran de propiedad gubernamental, sobre todo a nivel provincial.

67. Las políticas forestales del Canadá habían evolucionado al compás de los nuevos planteamientos adoptados respecto a lo que antaño parecían bosques inagotables del país. Así, se había pasado del concepto inicial de los bosques como recurso económico a un enfoque en que interviene la serie completa de valores ambientales, sociales, culturales y económicos. Así pues, la ordenación forestal sostenible excedía de las consideraciones ambientales y constituía la base para el marco normativo del Canadá. El Consejo de Ministros de Silvicultura del Canadá, que agrupaba a los ministros federales y provinciales responsables de los bosques, elaboraba la estrategia nacional de ordenación forestal sostenible. Los reglamentos se establecían principalmente a nivel provincial. La estrategia se elaboraba mediante un amplio proceso consultivo nacional en que participaban los diversos miembros de la sociedad interesados en las cuestiones de ordenación forestal sostenible. En breve se daría a conocer la segunda estrategia nacional, destinada a precisar con mayor claridad el objetivo de la estrategia original de asegurar que el enfoque de ordenación forestal sostenible del Canadá diese cabida a una diversidad de valores, relacionados o no con la explotación maderera, y simultáneamente protegiese la integridad, salud y diversidad de los ecosistemas forestales del Canadá. Asimismo, se preparaban criterios e indicadores nacionales mediante un proceso abierto e integrador de características similares. Los criterios aplicados por el Canadá eran compatibles con el proceso de Montreal. Los indicadores reflejaban las características excepcionales de los bosques canadienses, y

comprendían una larga serie de valores forestales. No existía una definición única internacionalmente aceptada de ordenación forestal sostenible. Sin embargo, tal definición internacional sería útil para mejorar la ordenación forestal, así como para reducir el riesgo de obstáculos al comercio. El Canadá era partidario de que se estableciese un convenio internacional sobre bosques en que se diera cabida a esa definición de ordenación forestal sostenible.

68. En ese marco normativo general de ordenación forestal sostenible, se habían desarrollado varios instrumentos de aplicación voluntaria para dar respuesta al interés de los usuarios por los aspectos de ordenación de recursos y elaboración de productos de la explotación maderera y papelera. Las normas o los sistemas de certificación pertenecían a la fase de ordenación forestal, mientras que los programas de etiquetado solían centrarse más en la fase de producción. En sí, esos instrumentos sólo abarcaban parte del ciclo vital de los productos forestales y debían explicarse en ese contexto. Al examinar esos enfoques, era importante tener presentes algunos aspectos generales, como por ejemplo los siguientes: a) proceso de desarrollo; b) procesos de auditoría; c) referencia a la normativa nacional; d) metodologías; y e) equivalencia. La norma 14001 de la ISO constituía el sistema de ordenación ambiental internacional (EMS) de todos conocido y aplicable tanto en la fase de ordenación de los recursos como en la de producción. Una certificación podía ser "simple" cuando sólo hacía referencia al modo en que se administraba determinado bosque sin que ninguna cadena de custodia se extendiese hasta el consumidor final. En la norma CSA-Z808/9-96: Sistema de certificación de ordenación forestal sostenible, de la Asociación Canadiense de Normas, se adoptaba ese enfoque. Un enfoque alternativo era el adoptado por el Consejo de Administración de Bosques (FSC), consistente en un sistema de certificación basado en una cadena de custodia aplicada al etiquetado de los productos, que se administraban de acuerdo con los principios y criterios del FSC. Los dos principales tipos de etiquetas ecológicas eran las etiquetas descriptivas del tipo III, tales como la hoja de datos de perfiles ambientales, y las etiquetas ecológicas de marca única del tipo I, mencionadas en anteriores debates del CCMA, que utilizaban programas tales como Opción Ambiental.

69. La norma EMS 14001 de la ISO había adoptado un enfoque sistémico con el objetivo de incorporar criterios de política ambiental a la administración general de empresas. En la norma se especificaba el proceso que debía seguir una organización para que su sistema de administración respondiese a criterios ecológicos. La norma 14001 de la ISO se había elaborado mediante el mismo enfoque sistemático que otras normas internacionales, basado en el consenso. Además de los 70 órganos nacionales de normalización, había participado en el proceso de elaboración un gran número de organizaciones de enlace, en particular ONG, lo que reflejaba la mayor influencia potencial en las políticas públicas atribuida a la serie 14000 de la ISO. Un comité asesor canadiense de participación múltiple había formulado la postura del Canadá respecto de la norma de la ISO. En la norma 14001 no se establecían indicadores de eficacia, ni criterios prescriptivos sobre la forma de alcanzar las metas de eficacia. Esos criterios se adoptaban en el marco normativo nacional en que operaban las organizaciones. En general, las empresas preferían ese sistema, ya que aportaba una considerable flexibilidad en cuanto a la forma de cumplir las normas nacionales mediante la aplicación de procesos continuos de mejoramiento. Una empresa maderera podía aplicar la norma 14001 de la ISO en su fábrica de pasta de madera y sus aserraderos. Su política empresarial de medio ambiente podía comprender también un compromiso sobre sus actividades de ordenamiento forestal. La empresa podía optar por aplicar la norma 14001 de la ISO a esas actividades, o la norma más estricta CSA-Z808/9. A nivel internacional, el Grupo de Trabajo 2 de la ISO había preparado un proyecto de documento provisional para facilitar a las organizaciones forestales la aplicación y utilización de la norma 14001 de la ISO. Las grandes empresas solían preferir esa norma como instrumento de gestión para mejorar el comportamiento ecológico o reducir al mínimo la vulnerabilidad ambiental. Las organizaciones no estaban autorizadas para colocar en sus productos la etiqueta "ISO 14001".

70. La Norma CSA relativa al Sistema de Certificación Forestal Sostenible fue elaborada por la Asociación Canadiense de Normas, una de las cuatro organizaciones nacionales de normalización con mandato asignado por el Consejo de Normas del Canadá. La norma se elaboró mediante un proceso de participación múltiple en que intervinieron auditores y científicos, productores, grupos de interés general y organismos oficiales. Esos enfoques integradores eran fundamentales para la credibilidad de las normas de aplicación voluntaria. La norma se basó en el enfoque de sistemas de gestión adoptado en la norma 14001 de la ISO, en particular en el criterio de mejoramiento continuo. Sin embargo, en algunos aspectos esenciales era también una norma de eficacia. Entre esos aspectos de eficacia cabía citar la referencia a los criterios e indicadores canadienses y los requisitos específicos de consulta y aportación públicas. Así pues, era algo más que la norma 14001. Análogamente, en el proceso de auditoría se analizaban tanto los sistemas como los indicadores de eficacia práctica. El coste más importante no correspondía a la certificación por un auditor externo, sino más bien a los gastos indirectos y directos en que incurría la empresa al desarrollar y poner en funcionamiento el sistema de gestión. Según las estimaciones, el proceso de certificación abarcaba aproximadamente 200.000 km², superficie equivalente más o menos al 80 por ciento del Reino Unido. La primera certificación estaba prevista para 1999. Aunque la norma CSA se aplicase a un bosque determinado, no estaba permitido el etiquetado CSA de los productos procedentes de ese bosque. De esa forma, no surgían dificultades relacionadas con la cadena de custodia, especialmente problemáticas respecto de la producción de papel. En general, las empresas eran partidarias de la norma CSA, ya que había sido elaborada por una organización normalizadora nacional; su aceptación general se debía a la mayor flexibilidad de los métodos basados en sistemas de gestión para alcanzar las metas de eficacia.

71. El Consejo de Administración de Bosques había sido creado por una diversidad de ONG, compradores de productos madereros y órganos de certificación. Los productores no habían estado representados de forma significativa en el proceso de desarrollo, cuyo enfoque del ordenamiento forestal se basaba más en criterios de rendimiento -es decir, acciones y omisiones- que en sistemas de gestión. En contraste con los procesos de certificación habituales, los certificadores interpretaban los principios y criterios generales en lugar de certificar el cumplimiento de normas específicas. La elaboración de normas regionales obedecía al propósito, reconocido por el propio FSC, de suprimir lo que, en opinión de muchos, creaba posibles conflictos de intereses entre los certificadores. En el Canadá aún no se remitían certificados forestales al FSC. A nivel mundial, el FSC afirmaba que se había realizado la certificación correspondiente a 80.000 km², una extensión equivalente a la de Austria. El método de cadena de custodia del FSC se adaptaba mejor a la producción de madera que a la de papel, ya que las papeleras solían obtener sus fibras en diversas fuentes. Por ello, el seguimiento de esas fuentes y la separación de fibras certificadas y no certificadas resultaban más problemáticos en el caso de los productores a gran escala. El FSC se basaba más en la demanda que en otros criterios, ya que se habían constituido grupos de compradores que requerían certificados del FSC o equivalentes. Como señalaron varias ONG en el Simposio mencionado, se consideraba que el FSC se basaba en el criterio de certificación de ordenación forestal sostenible más que en otros indicios de gestión adecuada de los bosques.

72. La Hoja de Datos de Perfiles Ambientales (EPDS) fue preparada por la Asociación Canadiense de la Pasta y del Papel para dar respuesta a la preocupación de los consumidores respecto a las características ambientales del ciclo vital de la pasta y del papel. La EPDS, elaborada mediante un proceso de participación múltiple, era un formulario de utilización voluntaria, normalizado y de información por terceros similar en su enfoque al etiquetado nutricional. Dado el carácter de la información en ella especificada, la EPDS estaba destinada a los grandes y tecnificados usuarios industriales que tenían capacidad interna para comparar el comportamiento ecológico de los proveedores. Así pues, no estaba diseñada para el comercio minorista. La EPDS facilitaba a los usuarios información detallada sobre la ordenación forestal, la utilización, eficiencia y procedencia de las fibras, el consumo de energía y agua, los residuos líquidos y sólidos y las emisiones atmosféricas. Esos datos permitían a los usuarios comparar a unos proveedores con otros respecto a las

características ambientales que juzgaban más importantes. Los usuarios, y no terceros, determinaban qué criterios y qué umbrales eran importantes. Además, los principales usuarios de la EPDS serían probablemente empresas que se considerasen a sí mismas en la vanguardia ecológica y buscasen un medio objetivo y creíble de comunicar esa actitud vanguardista. Ese enfoque flexible de la selectividad hacía que las etiquetas ecológicas descriptivas, como por ejemplo la EPDS, resultasen más atractivas para las empresas, ya que no eran prescriptivas y permitían que los usuarios tomarasen efectivamente las decisiones. La EPDS, al facilitar información detallada y verificada por terceros, proporcionaba a las empresas los datos e indicadores que podían servir de base para el mejoramiento continuo. La preparación de la EPDS exigía una estrecha vigilancia de las actividades para obtener los datos; con frecuencia, ese proceso permitía identificar aspectos concretos de las actividades cuyo mejoramiento era posible y económicamente ventajoso.

73. Opción Ambiental era el programa nacional canadiense de etiquetado ecológico. Aunque su aplicación corría a cargo de la empresa privada Terrachoice, la responsabilidad y supervisión de las políticas seguía siendo competencia de Environment Canada. Opción Ambiental colocaba su símbolo en los productos que había calificado como ecológicamente preferibles. Los criterios aplicados por Opción Ambiental se habían establecido a través de un proceso consultivo de participación múltiple. Los criterios de etiquetado se publicaban semestralmente en la Gaceta del Canadá y estaban sujetos a un período previo de 60 días para la formulación de observaciones. Para asegurar su carácter de actualidad se revisaban cada tres años. Las etiquetas ecológicas de marca única estaban destinadas al nivel minorista, donde el consumidor identificaba mejor un distintivo sencillo y reconocible, indicador de que un producto era ecológicamente preferible a otros productos comparables. En contraste con las etiquetas ecológicas descriptivas, que simplemente notificaban los valores de los distintos criterios, las etiquetas ecológicas del tipo I ordenaban los productos dentro de cada criterio, establecían umbrales o acotaciones para cada criterio y aplicaban coeficientes de ponderación a todos los criterios, a fin de identificar del 20 al 30 por ciento de los productos que eran ecológicamente preferibles en conjunto. Los usuarios juzgaban, sobre la base de esa evaluación por un tercero, la idoneidad ecológica general del producto, en lugar de realizar esa evaluación por sí mismos. En contraste con la mayor parte de los demás programas de etiquetado ecológico, Opción Ambiental utilizaba datos experimentales equivalentes para los métodos de prueba especificados en sus directrices relativas a productos. Ese sistema se había aplicado en el caso de proveedores extranjeros cuyas prescripciones reglamentarias eran distintas de las canadienses, pero cuyo producto se consideraba ecológicamente preferible a los productos canadienses. Opción Ambiental se basaba en las disposiciones de procedimiento y sustantivas del Código de Buena Conducta anexo al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. Su criterio de equivalencia excedía de las actuales disposiciones de ese Código.

74. Como ejemplo de etiquetado ecológico privado podría servir el papel para fotocopias Xerox utilizado en la OMC. Xerox, al igual que la mayoría de las grandes multinacionales, tiene una política de medio ambiente y capacidad interna para evaluar las características ecológicas de sus proveedores. Las políticas ambientales privadas se inspiraban tanto en los objetivos empresariales de imagen comercial positiva y mejora del comportamiento ecológico como en la política ambiental pública y general de la región en que la empresa era proveedora. Por ello, Xerox Europa colocaba en su papel para fotocopadoras una etiqueta alusiva al blanqueado realizado íntegramente sin utilización de cloro. El nivel de AOX (halógenos de compuestos orgánicos absorbibles) equivalía a 0; la pasta se obtenía únicamente a partir de bosques cultivados (es decir, no mediante la tala de bosques de edad madura); y el producto y su embalaje eran íntegramente reciclables. Environment Canada había examinado y rechazado las normas relativas al nivel de AOX, dada la existencia de otras medidas consideradas más pertinentes, y debido a que la ordenación forestal sostenible se aplicaba también a zonas que comprendían árboles de edad madura. Esa etiqueta privada favorecía las prescripciones reglamentarias y prácticas de producción locales, con un verdadero impacto en el comercio.

75. La experiencia del Canadá en los métodos expuestos permitía plantear las siguientes consideraciones y cuestiones de política, de interés para todos. Para disipar los recelos de tipo comercial eran fundamentales dos aspectos de procedimiento. En primer lugar, un proceso de desarrollo abierto y transparente aseguraba a todos los participantes que los resultados reflejarían un equilibrio de intereses. Las aportaciones de una multiplicidad de participantes facilitaban el logro de un consenso nacional. En general, los sistemas de normas nacionales constituían un método regular para lograr el consenso de todos los participantes. La publicación de los programas de trabajo y de los plazos para la formulación de observaciones aportaban la transparencia necesaria para que las partes interesadas, tanto nacionales como extranjeras, presentasen sus comentarios. En segundo lugar, los procesos de auditoría fiables e imparciales eran indispensables en cualquier método. Ello exigía que las normas fuesen claras, precisas y coherentes en su aplicación hasta donde fuera posible, y que la función auditora fuese distinta de los servicios de consultoría u otros servicios administrativos.

76. En primer lugar, en relación con los aspectos sustantivos, todos los métodos requerían la adhesión al marco normativo nacional. En el Canadá, ese marco comprendía normas federales y provinciales. En segundo lugar, puesto que los métodos basados en el ciclo vital se encontraban aún en una fase relativamente temprana, existían posibilidades de convergencia respecto a la metodología básica. Los criterios e indicadores canadienses constituían la base de un marco común de certificación, ya que eran fruto del consenso nacional y facilitaban orientación en la utilización de los criterios e indicadores de importancia para la ordenación forestal. Con respecto al etiquetado ecológico, existía la posibilidad de aplicar criterios comunes a las etiquetas de los tipos I y III, y de utilizar un conjunto de datos comunes para establecer los criterios de selectividad. Esa convergencia de criterios podía reforzar la credibilidad de ambos métodos de etiquetado, ya que el tipo I estaba destinado a los usuarios minoristas y el tipo III a los usuarios industriales. La certificación podía convertirse también en un criterio en los programas de etiquetado ecológico. Sin embargo, las fuerzas del mercado deberían desempeñar su cometido en la determinación del nivel de diversidad y de complementariedad e integración de cada instrumento. En tercer lugar, como todos esos enfoques se referían básicamente a métodos de elaboración y producción, más que a las características finales de los productos, la equivalencia entre enfoques y sistemas era especialmente importante. Con respecto a la ordenación forestal sostenible, los compradores que establecían requisitos deberían, en principio, aceptar la existencia de diferentes normas y criterios nacionales de ordenación forestal sostenible. Análogamente, era necesario que los programas de etiquetado ecológico del tipo I tuviesen en cuenta los diferentes marcos normativos que influían en los métodos de elaboración o de producción. Los problemas comerciales se reducirían si todos los enfoques tuviesen en cuenta las condiciones locales de ordenamiento forestal y las prescripciones reglamentarias en materia de producción vigentes en los países productores.

77. Los esfuerzos desplegados por los gobiernos, la rama de producción y otros miembros de la sociedad civil indicaban hasta qué punto se reconocía que esas cuestiones tenían efectos inmediatos y a largo plazo. La preocupación por los aspectos comerciales se ponía de manifiesto en el ejemplo siguiente. Al combinarse la eliminación de la progresividad arancelaria aplicada a los productos del papel importados entre los Estados Unidos y el Canadá con los cambios estructurales introducidos en la rama de producción, el resultado ha sido un espectacular crecimiento en términos absolutos y relativos de otras exportaciones del sector papelero, en comparación con las exportaciones de pasta papelera y de papel prensa. Aunque cada mercado era diferente y los factores estructurales desempeñaban funciones distintas, el Canadá trató de conseguir y obtuvo la aplicación del régimen "cero por cero" a los productos del papel, en la previsión de que los productores canadienses pudiesen competir en otras exportaciones, además de las de pasta papelera y papel prensa. Dado el impacto que la certificación, las normas y las etiquetas podían tener en el acceso a los mercados, preocupaba realmente que los requisitos relativos a algunos de esos instrumentos pudiesen obstaculizar el acceso negociado en mercados de excepcional importancia. Era importante señalar que no se trataba de una cuestión de ordenamiento forestal sostenible o prácticas ecológicas adecuadas. Esos eran valores compartidos que el Canadá se había comprometido a respetar, de acuerdo con sus objetivos generales

de desarrollo sostenible. La cuestión, en el contexto de política comercial, consistía en asegurar que los distintos métodos no colocasen en desventaja a los procedimientos canadienses o internacionales destinados a resolver importantes y legítimas cuestiones de ordenamiento de los recursos y de elaboración y producción. Aunque la forma en que las cuestiones de comercio y medio ambiente se planteaban en el sector de los productos forestales podía ser excepcional, era probable que las cuestiones relativas a normas y métodos de etiquetado tuviesen paralelismo en otros sectores. La contribución de Colombia sobre su sector de floricultura podía servir de ejemplo ilustrativo. Las conclusiones de política que el Canadá había extraído de su experiencia forestal parecían ser de carácter horizontal. El Canadá esperaba que otros Miembros pudiesen compartir igualmente su experiencia nacional en la solución de esas cuestiones y de otras semejantes para profundizar en el conocimiento de las repercusiones comerciales de los diversos métodos e instrumentos.

78. El representante de las Comunidades Europeas afirmó que la sección sobre silvicultura podía haberse titulado acertadamente "Sector de la silvicultura", para que comprendiese sin lugar a dudas las industrias de explotación forestal y de transformación posterior. En la sección podrían haberse incluido ejemplos más específicos para reforzar los argumentos generales expuestos. La deforestación tenía poca relación directa con el comercio internacional y más con la demanda creciente de madera, el régimen de propiedad de tierra, la expansión de la agricultura de subsistencia y la demanda de leña. Sin embargo, era importante reconocer el efecto directo e iniciador de la explotación forestal, aún cuando fuese selectiva, ya que podría ser fundamental para activar otros agentes causales, especialmente cuando se concentraba localmente. Aunque las cifras globales relativas al porcentaje de madera rolliza procedente de países en desarrollo que era objeto de comercio podían ser bajas, esas estadísticas ocultaban la situación de determinados países cuyo comercio de productos madereros podía ser económicamente importante y los efectos subsiguientes de la explotación forestal con fines comerciales.

79. El representante de las CE afirmó que en el Simposio de ONG se habían hecho muchas referencias a la importancia de una correcta fijación del precio de los recursos. En el caso de la madera, la premisa en que se basaba el documento WT/CTE/W/67, según la cual "en las economías de mercado que funcionen satisfactoriamente, los precios acusan la escasez relativa de los recursos y las preferencias de los consumidores", no siempre era aplicable. En el documento no se establecían distinciones entre los valores nacionales de la madera en pie establecidos por los gobiernos, con frecuencia en relación con recursos forestales naturales o seminaturales, y los costos crecientes resultantes para los propietarios de bosques privados. Los mecanismos de fijación de precios no podían acusar la escasez de madera o explicar utilidades no madereras, como por ejemplo la función de almacenamiento del carbono. El largo período transcurrido entre la producción y la tala de árboles maderables significaba que el período de producción maderera podía rebasar las perspectivas cronológicas de los propietarios privados o incluso de algunos gobiernos. Como resultado, algunos países habían establecido regímenes de explotación forestal obligatoria para impedir el desmonte de las tierras y su explotación más rentable a corto plazo. Gran parte de los beneficios de los bosques no tenían que ver con la explotación maderera, sino con el bien público y, en algunos casos, con intereses mundiales, tales como la regulación del clima o el mantenimiento de la biodiversidad. Era importante tener en cuenta que los precios de los recursos forestales a veces no reflejaban su aprovechamiento óptimo, ya que algunos de los beneficios obtenidos no revertían a los propietarios privados, a la generación actual o ni siquiera al país en que se ubicaban esos recursos forestales. Tales beneficios eran difíciles de cuantificar en términos de mercado. Al examinar la función de las subvenciones forestales, se debían distinguir diversas fases de la cadena de producción y transformación de la madera. Las subvenciones relativas a productos "más próximos al mercado", tales como los del sector del mueble, podían ser más distorsionadoras que las destinadas a prácticas forestales relacionadas con la producción maderera y que podían concederse de 50 a 100 años antes de que se comercializase la madera. También era necesario establecer una distinción respecto a las subvenciones concedidas por razones de esparcimiento social o ambientales, que podían tener únicamente efectos de distorsión

limitados o localizados, y sin embargo estar justificadas por los beneficios no comerciales que comportaban.

80. Según las CE, en el documento no se había concretado la referencia a las crestas arancelarias y era difícil saber a qué países aludía. La mención de las reducciones de los derechos arancelarios no era congruente con las afirmaciones acerca de la progresividad arancelaria hechas en otras partes del documento, particularmente en lo que se refiere a las CE, donde los derechos aplicados al papel se estaban eliminando en un plazo de 10 años, mientras que los aplicados a los productos madereros se mantenían con tipos más bajos que los anteriores a la Ronda Uruguay. Aunque el informe de la FAO sobre el comercio de productos forestales, citado en el documento, se basaba aún en estimaciones (poco rigurosas), el análisis no hacía distinción entre los incrementos del comercio debidos a la liberalización y los determinados por otros factores, tales como el aumento de la riqueza, la alfabetización, la libertad de prensa, las normas de higiene y la industrialización, especialmente la informatización. Habría sido útil examinar el efecto de las restricciones aplicadas a la importación de tecnologías ambientales, que podrían contribuir a reducir el consumo de energía y la contaminación de las actividades industriales basadas en los bosques.

81. En opinión de las CE, aunque la certificación de la explotación sostenible de los bosques y el etiquetado de los productos forestales eran medidas complementarias de la ordenación forestal, los sistemas de ese tipo no siempre creaban incertidumbre o costos adicionales a los exportadores ni constituían obstáculos al comercio. Los principios que rigen los sistemas de certificación acordados por el Grupo de Trabajo intergubernamental sobre bosques (IPF) se habían diseñado para asegurar que eso no ocurriese. Los principios del IPF preconizaban el acceso libre, la no discriminación, la credibilidad, la adopción de prácticas que no indujesen a error, la eficacia en función de los costos, la intervención de todas las partes interesadas, la ordenación forestal sostenible y la transparencia. Era importante examinar cómo y en qué condiciones la certificación y el etiquetado podrían contribuir a subsanar los fallos del mercado en materia de silvicultura, por ejemplo cuando la madera producida de modo sostenible competiría con madera explotada a partir de los recursos naturales sin tener en cuenta la tasa natural de regeneración. Las directrices del IPF constituían una referencia útil. También habría sido adecuado examinar las condiciones requeridas para lograr que el comercio y el medio ambiente se complementasen mutuamente y subrayar la contribución que los AMUMA podrían hacer a ese fin.

82. El representante de Nueva Zelanda expresó su agradecimiento al Canadá por aportar su experiencia nacional en el sector forestal. Como exportador importante de productos forestales, Nueva Zelanda se había enfrentado a una serie de dificultades en el comercio de esos productos semejante a la expuesta por el Canadá. Era importante insistir en la necesidad de normas y planes de medio ambiente, similares a los descritos en el documento del Canadá como voluntarios, transparentes y basados en el mercado. La intervención de todas las partes interesadas en la elaboración de esos instrumentos era fundamental. Varias empresas forestales de Nueva Zelanda se esforzaban por dar cumplimiento a las normas de la serie 14000 de la ISO; hasta la fecha, habían sido objeto de certificación dos de ellas. El representante destacó la referencia hecha en el párrafo 51 del documento WT/CTE/W/81 a la reciente formación de grupos de compradores que aplicaban la política de comprar sólo determinados productos certificados. El documento sobre etiquetado ecológico presentado por Colombia ponía de manifiesto inquietudes similares. A Nueva Zelanda le preocupaba que esos grupos pudiesen distorsionar los mercados e influir negativa e injustamente en el acceso de algunos países exportadores. Existían diversos instrumentos para subsanar los problemas en ese sector, como por ejemplo la equivalencia, cuestión que se estudiaría más a fondo en el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio como parte del programa de trabajo relativo al examen trienal del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. Sería útil examinar cuestiones tales como las planteadas por el Canadá en el contexto de la armonización de las etiquetas ecológicas de los tipos I y III. Nueva Zelanda desearía conocer la experiencia de otros que hubiesen tropezado con dificultades semejantes en materia de etiquetado ecológico.

83. El representante de Suiza expresó su agradecimiento al Canadá por su contribución, que permitiría comprender mejor los problemas del sector forestal. El análisis realizado en el documento WT/CTE/W/67 era deficiente en la sección de silvicultura. El efecto de medidas tales como las subvenciones o la certificación de los productos forestales era tan complejo que resultaba difícil formular conclusiones. La afirmación del párrafo 123 de que el incremento neto de los ingresos per cápita conllevaría beneficios ambientales no se había desarrollado. Esa propuesta sólo era válida si los ingresos adicionales se invertían en ordenación forestal, lo que sólo ocurriría si se formulaban políticas de ordenación forestal sostenible y se proporcionaban los medios financieros necesarios para asegurar su aplicación. El efecto directo de la eliminación de las distorsiones del comercio en la calidad del medio ambiente era limitado, en particular cuando se aplicaban ya derechos arancelarios bajos.

84. El representante del Japón afirmó que la liberalización del comercio en el sector forestal podía dar lugar a la degradación del medio ambiente si los bosques no se administraban de forma adecuada. En el documento WT/CTE/W/67 se argumentaba que, si las externalidades adversas para la producción y consumo se integraban adecuadamente en el proceso decisorio, los objetivos comerciales y ambientales se apoyarían mutuamente. Sin embargo, en muchos casos, las externalidades no se habían tenido en cuenta al formular las políticas, lo que mostraba que la política simplificada de suprimir las subvenciones y otras de las denominadas "medidas distorsionadoras del comercio" podían tener efectos negativos para el medio ambiente. Los mecanismos del mercado y de los precios no siempre contribuían a la preservación del medio ambiente. La figura de la página 59 era demasiado optimista; en el supuesto se indicaba que el nivel de extracción de madera era inferior al nivel sostenible, al tiempo que la curva correspondiente se desplazaba en respuesta a un aumento de la demanda. En el documento WT/CTE/W/67 se indicaba que un incremento en la producción de madera aumentaba los ingresos que, a su vez, daban lugar a la conservación, por lo que la liberalización del comercio era necesaria; ese análisis no era necesariamente acertado. Estaban surgiendo conflictos, incluso entre países desarrollados y en desarrollo, respecto a la extracción de madera de los bosques naturales. Existían muchos casos en que no cabía esperar que al aumentar la extracción de madera se tuviese en cuenta la escasez de recursos forestales. El CCMA debería prestar más atención a ese aspecto de los bosques naturales. Aunque en los párrafos 113 y 114 se indicaba que la eliminación de la progresividad arancelaria podría contribuir al mejoramiento del medio ambiente, aún cuando se aplicasen técnicas avanzadas de transformación en los países exportadores, la extracción excesiva de madera en respuesta a la demanda del mercado podía dar lugar a la sobreexplotación si no existía una política de ordenación forestal sostenible. No existían pruebas empíricas de la relación entre la eliminación de la progresividad arancelaria y la conservación de los bosques.

85. Las importaciones de madera representaban en el Japón hasta un 80 por ciento del consumo nacional total de ese producto. El comercio maderero había suscitado duras críticas de muchos ambientalistas. Los bosques desempeñaban una importante función en el medio ambiente de cada país y región en cuanto a la conservación de la biodiversidad, los recursos de tierra y agua y el paisaje, particularmente en los países cuyas zonas forestales representasen un alto porcentaje de la superficie total. Asimismo, se había de tener en cuenta el medio ambiente de los países importadores, no sólo de los países exportadores. En el documento WT/CTE/W/67 se citaban el informe de la OCDE preparado por Barbier y un libro de Gillis y Repetto, pero no se incluían los argumentos contenidos en ellos sobre la baja tasa de recuperación de la rama de producción de tableros contrachapados, sector protegido por restricciones a la exportación, en los países exportadores de madera tropical. El resultado era un aprovechamiento insuficiente de la madera tropical. Tampoco figuraban en el documento WT/CTE/W/67 las referencias hechas en esos estudios a los efectos ambientales adversos de las restricciones a la exportación. En el párrafo 114 se daba a entender que la rama de producción era ineficaz en los países importadores y se justificaban los controles de las exportaciones, lo que contradecía a Barbier y Repetto. En cuanto a la propuesta incluida en el párrafo 119, los contingentes estaban ya prohibidos por la OMC. En el párrafo 127 se hacía referencia a la cuestión de la goma de

formaldehído, que los fabricantes de tableros de contrachapado utilizaban menos a causa de sus efectos perjudiciales para la salud humana. La cuestión del formaldehído no guardaba relación alguna con los reglamentos de importación. El Japón presentaría comentarios por escrito con las revisiones que proponía. El orador se refirió a los procesos internacionales para definir criterios e indicadores de ordenación forestal sostenible, tales como el proceso de Montreal y el emprendido en la OIMT. Los criterios e indicadores serían distintos en cada país, a fin de reflejar las diferentes condiciones ambientales y sociales. Esas diferencias debían ser lo más pequeñas posible; esto era importante desde el punto de vista comercial. La aplicación de los criterios e indicadores debía ser transparente, y el CCMA debía colaborar en ella.

86. El representante de Australia señaló que en la sección sobre silvicultura del documento WT/CTE/W/67 se hacía referencia a la importancia de la extracción de leña para la silvicultura en su conjunto. En su sección sobre la energía, el documento hacía a su vez referencia a esa cuestión y a las posibles repercusiones que la reforma de las distorsiones del mercado energético tendría en la extracción de leña. Ello ponía de manifiesto los numerosos vínculos intersectoriales existentes, que a su vez remitían a los vínculos generales existentes entre los factores económicos y los ambientales. Cuatro tipos principales de políticas merecían ser examinadas en relación con el sector forestal. La primera de ellas era la progresividad arancelaria. Aunque, merced a los compromisos arancelarios contraídos en la Ronda Uruguay, se estaba reduciendo significativamente la diferencia entre los derechos arancelarios aplicados a la madera en bruto y los relativos a productos de madera elaborados, existían aún importantes niveles de progresividad arancelaria en relación con algunos productos de madera y muebles. Este hecho era importante desde un punto de vista ambiental, ya que la progresividad arancelaria podía reducir los ingresos comerciales de los países dependientes de las exportaciones forestales y limitar su capacidad para diversificar la producción. En el documento del Canadá se habían indicado los efectos de la eliminación de la progresividad arancelaria entre el Canadá y los Estados Unidos y los cambios industriales que esa eliminación había permitido introducir en la elaboración de pasta papelera, con los consiguientes beneficios económicos y ambientales. Un segundo conjunto de políticas eran las restricciones a la exportación, que podían tener como objetivo resolver problemas de conservación forestal o incentivar a la industria transformadora nacional. Una cuestión importante consistía en determinar hasta qué punto tales medidas comerciales eran eficaces para favorecer la obtención de buenos resultados ambientales. El tercer grupo de intervenciones se refería a la imposición de derechos y cargas de tala a la extracción de madera. El nivel de imposición de esos derechos no sólo podía afectar a la competitividad comercial de los diferentes proveedores de madera, sino también a la capacidad de los gobiernos para financiar regímenes adecuados de ordenación de los recursos. Unos derechos insuficientes podían también fomentar la extracción de madera en exceso, al no reflejar el verdadero valor ambiental de los recursos forestales. Un cuarto conjunto de políticas y medidas consistía en las iniciativas destinadas a influir en los mercados de consumo y la demanda, en particular mediante planes de etiquetado ecológico o prescripciones en materia de contenido reciclado. Aunque la intención era encauzar el poder adquisitivo del consumidor hacia la promoción de mejores resultados ambientales, se planteaban problemas respecto a la eficacia y las repercusiones comerciales de esas medidas y a la posibilidad de diseñarlas de forma que se tuviesen suficientemente en cuenta las diferentes circunstancias de cada país.

87. A juicio de Australia, se habían planteado varios problemas importantes relativos a los efectos ambientales y comerciales de los cuatro conjuntos de intervenciones. Los mercados de productos forestales y madereros eran, sin duda, objeto de distorsiones importantes y, al parecer, había un amplio margen de mejora en su funcionamiento. Un objetivo primordial del CCMA debía consistir en identificar medidas de reforma multilaterales respecto de cuestiones tales como la progresividad arancelaria o las crestas arancelarias subsistentes, lo que propiciaría un marco internacional más favorable para lograr resultados forestales más sostenibles. Sin duda, se necesitarían nuevas reformas normativas, así como políticas nacionales de medio ambiente bien orientadas, para avanzar en la adopción de prácticas forestales más sostenibles. En una reunión futura, Australia comentaría el

documento del Canadá, que era útil para mejorar el entendimiento de los sistemas de certificación y etiquetado. Australia esperaba que otros aportarían igualmente sus experiencias nacionales, en particular los detalles de programas y prácticas relacionados con los cambios en el acceso a los mercados y los efectos resultantes para el medio ambiente.

88. El representante de Malasia, en nombre de la ASEAN, manifestó que en el documento WT/CTE/W/67 se exponían las diversas restricciones y distorsiones del comercio existentes en el sector forestal. La progresividad arancelaria continuada y las crestas arancelarias aplicadas a los productos forestales en algunos países importadores actuaban como factor disuasorio para los países productores, en particular para los países en desarrollo, en su empeño por orientar su actividad hacia productos forestales de mayor valor añadido, y podían tener efectos negativos para la conservación y ordenación forestales. La silvicultura desempeñaba una función múltiple en el progreso económico de los países en desarrollo. La ASEAN consideraba necesaria la existencia de mecanismos de control de las exportaciones en ese sector que contribuyesen a reducir las presiones de explotación forestal. La certificación debería vincularse a la transferencia de tecnología, en particular en sectores tales como los de investigación y desarrollo y de fomento de oportunidades para el estudio de la economía ambiental y la ordenación forestal. Asimismo, había de examinarse el conjunto cada vez mayor de métodos de certificación forestal.

89. La ASEAN expresó su agradecimiento al Canadá por su contribución nacional. Dada la importancia atribuida a la conservación de los bosques en los debates del CCMA, los Miembros debían poner cuidado para no exagerar los beneficios ambientales de la liberalización del comercio. En ausencia de una definición internacionalmente aceptada de ordenación forestal sostenible, los esfuerzos por asegurar que los productos forestales procedían únicamente de bosques explotados de forma sostenible podían dar lugar a efectos negativos para el acceso a los mercados. También podían dar como resultado un mayor empleo de sustitutos, tales como plásticos y aluminio, cuya producción, utilización y reutilización, y eliminación tenían también repercusiones para el medio ambiente. La ASEAN se mostró preocupada por la reciente iniciativa del Gobierno de los Países Bajos de etiquetar los productos forestales. Aunque la normativa pertinente era aplicable a todos los tipos de productos madereros, la ASEAN consideraba que no carecía de efectos para el comercio. A ese respecto, la ASEAN agradecería una aclaración de las CE.

90. El representante de los Estados Unidos valoró positivamente la exposición por el Canadá de su experiencia nacional como forma de colaborar lo más oportunamente posible en la labor del CCMA. La deforestación, ya fuese fomentada por la supresión de subvenciones o por las actividades del comercio internacional, contribuía, aunque indirectamente, al cambio climático. Con independencia de que los efectos de las subvenciones observados en el comercio fuesen mínimos, como se indicaba en el documento WT/CTE/W/67, cualquier contribución al cambio climático debía considerarse importante. En los párrafos 74 y 123 no se había insistido suficientemente en la importancia del aumento de la deforestación; no era cierto que los efectos comerciales directos o indirectos de la supresión de las subvenciones, pese a todo necesaria, fuesen tan insignificantes como se sugería.

91. El representante de la India afirmó que, en su país, el sector forestal se caracterizaba generalmente por el consumo de leña efectuado por gran parte de la población, especialmente la que vivía por debajo del umbral de pobreza. La India mostró su acuerdo respecto de la afirmación contenida en el párrafo 123 del documento WT/CTE/W/67 de que la deforestación tenía poco que ver con el comercio internacional y que las organizaciones internacionales competentes se ocupasen del asunto. Puesto que existía poca relación entre la deforestación y el comercio, cualquier propuesta de que el CCMA formulase criterios relativos a la ordenación forestal sostenible no debería examinarse en la OMC, sino en otros marcos internacionales pertinentes. Agradeció al Canadá su contribución, que ponía de relieve la experiencia nacional de ese país en materia de silvicultura y resultaba instructiva para el CCMA. En cuanto a la nota de pie de página 1 del documento, la India no

compartía la interpretación del Canadá de que el etiquetado ecológico basado en PMP no relacionados con productos pertenecía al ámbito de aplicación del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. La India tenía interés por la descripción del desarrollo de los programas de certificación aplicados por el Canadá al sector forestal sobre la base de criterios ambientales, y desearía conocer más sobre la forma en que las etiquetas ecológicas del tipo I se adaptaban a la evolución experimentada por la fase de producción en función de los cambios tecnológicos que se habían producido en menos de tres años. Preguntó de qué forma se tenían en cuenta las observaciones recibidas en relación con los criterios propuestos, y si se facilitaban explicaciones a los autores de los comentarios no tenidos en cuenta.

92. El representante de Egipto agradeció al Canadá su contribución. Como había indicado la India, la cuestión de la aplicabilidad del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, mencionada en la nota de pie de página 1 del documento del Canadá, era problemática. Egipto no compartía la opinión de que el etiquetado no relacionado con los productos estuviese amparado por ese Acuerdo. Las razones para pensar así eran la falta de referencias explícitas al etiquetado ecológico; la incompatibilidad de las definiciones de ese Acuerdo relativas a reglamentos técnicos y normas con la mayoría de los programas de etiquetado ecológico; y el hecho de que el Acuerdo no era aplicable a los PMP no relacionados con productos.

93. El representante del Ecuador afirmó que la deforestación era resultado de la pobreza y se basaba en el hecho de que los bosques no se valoraban debidamente. El precio de la madera tropical en bruto era notablemente inferior al de los productos de madera tropical elaborados. El comercio podía constituir un medio para resolver los problemas de la deforestación, aunque no era causa de ella.

94. El representante del Canadá manifestó que, aunque el mensaje del gráfico que figuraba en la página 67 del documento WT/CTE/W/67 era correcto, los principios económicos de ordenación forestal en él expresados estaban excesivamente simplificados.

95. El observador de la FAO observó que existían variaciones en la interpretación de las cuestiones forestales, en particular respecto a la relación entre comercio y medio ambiente. La FAO estaba trabajando en sectores conexos y se congratulaba por la oportunidad de cooperar con la OMC cuando fuese necesario.

Metales no ferrosos

96. La representante del Canadá afirmó que el documento WT/CTE/W/67 era útil en su exposición relativa al sector de metales no ferrosos, y destacó los beneficios para el medio ambiente derivados de la existencia de un terreno neutral en ese sector en lo que se refiere a la eliminación de subvenciones y medidas arancelarias y no arancelarias. El reciclado de metales no ferrosos conllevaba beneficios económicos y ambientales, incluido el comercio de material reciclable. Muchos países, especialmente países en desarrollo, necesitarían cantidades cada vez mayores de productos metálicos no ferrosos para desarrollar una infraestructura que favoreciese la modernización. Los materiales reciclados podían desempeñar una importante función en la disponibilidad de esos productos a precios razonables. Por ello, las medidas comerciales, tanto nacionales como multilaterales, que distorsionasen el comercio de materiales reciclables tendrían efectos económicos negativos e impedirían el desarrollo de la industria de reciclado, lo que podría tener importantes repercusiones negativas para el medio ambiente.

Textiles y vestido

97. El representante de la India manifestó que en el párrafo 174 del documento WT/CTE/W/67 se identificaban correctamente las restricciones cuantitativas mantenidas en virtud del AMF como una importante distorsión del comercio en ese sector, de gran impacto en las exportaciones de los países en desarrollo. Para los países en desarrollo, que dependían de las exportaciones de artículos textiles y prendas de vestir, tales distorsiones tenían efectos directos en su empeño por beneficiarse de la liberalización del comercio y dedicar más recursos al desarrollo, y daban lugar a problemas ambientales propiciados por los niveles de vida más bajos. Las restricciones a la adquisición de tecnología ecológicamente idónea, debidas a las limitaciones impuestas a la transferencia de tecnología por la falta de recursos y las medidas de protección, contribuían a agravar el problema. Los requisitos ambientales, como por ejemplo la aplicación de etiquetas a las importaciones de productos textiles y de vestido procedentes de países en desarrollo, constituían otro obstáculo al comercio, al que la India desearía referirse en relación con el punto 3 b). Como se indicaba en los párrafos 175 y 176, la eliminación gradual de la aplicación del AMF planteaba nuevos problemas, ya que la supresión de restricciones cuantitativas se había limitado a unas cuantas partidas, y la mayor parte de esas restricciones no se suprimirían hasta el final del período de transición. Los beneficios ambientales derivados de la eliminación gradual de la aplicación del AMF, mencionados en el párrafo 179, no se producirían hasta el año 2005, como pronto. Los países en desarrollo tenían que esperar hasta entonces para beneficiarse de la mejora del bienestar general a que se hacía referencia en los párrafos 180 y 181. En cuanto a los párrafos 182 y 184, el comercio de los textiles y del vestido no se limitaba a las fibras de algodón; el análisis podía extenderse a la utilización de otras fibras, incluidas las artificiales. En un debate tan amplio, al determinar las repercusiones ambientales había que tener en cuenta tanto la producción como la eliminación final de los productos textiles y de vestido. Al igual que en otros sectores, en los debates debería examinarse también el efecto de cualquier acción propuesta en relación con que el medio ambiente tendría para las pequeñas y medianas empresas de países en desarrollo, especialmente en lo relativo a la transferencia de tecnología ecológicamente idónea en condiciones comercialmente viables.

98. El representante de las Comunidades Europeas dijo que el documento WT/CTE/W/67 constituía una base para el debate sobre los textiles y el vestido. El documento se refería principalmente al algodón; la inclusión de fibras sintéticas y lana habría dado por resultado una cobertura más amplia y equilibrada. En el análisis parecía subestimarse la proporción del comercio mundial de textiles correspondiente a los países en desarrollo, ya que se medía el comercio por su valor y no por su volumen, que revestía interés desde una perspectiva de medio ambiente. Dado que el teñido y el acabado químico de los productos eran los factores específicos más importantes del sector por sus repercusiones para el medio ambiente, el documento podría haber prestado más atención a ese aspecto. La liberalización del sector no se había plasmado aún en una mayor utilización de tecnologías beneficiosas para el medio ambiente en los países en desarrollo, elemento que debía examinarse más a fondo.

99. El representante de los Estados Unidos afirmó que el sector de los textiles y del vestido podía ser causa de tensiones ambientales. Ello no era razón para sugerir que la liberalización no debía llevarse a cabo, pero permitía a los responsables de las políticas argumentar que, puesto que la liberalización estaba teniendo lugar, podía ser necesario adoptar medidas complementarias para asegurar que el medio ambiente no sufriese las consecuencias. Los Estados Unidos no entendían la sugerencia del párrafo 183 de que la eliminación gradual de la aplicación del AMF daría lugar a una producción basada en la ventaja comparativa y no en las restricciones comerciales. Sin duda, el cese gradual de la aplicación del AMF daría como resultado la eliminación de una importante categoría de restricciones, pero como se indicaba en el párrafo 177, los derechos arancelarios continuarían siendo relativamente elevados, sobre todo en los países en desarrollo, que se estaban convirtiendo en mercados cada vez más importantes de productos textiles y de vestido. Esta cuestión afectaba

especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Hubiera sido útil que en el documento se examinasen medidas no arancelarias, tales como las licencias y prohibiciones de importación.

100. El representante de Egipto pidió a la Secretaría que facilitase información sobre los porcentajes representados por las fibras naturales, como el algodón, y las fibras sintéticas en la producción mundial total de productos textiles y de vestido. Era muy importante no sacar esa cuestión fuera de sus proporciones al prestar únicamente atención a los efectos ambientales resultantes de los métodos aplicados a la producción de algodón. Egipto dependía sobremedida de la producción de algodón como producto de exportación. Sin asistencia y cooperación técnicas que apoyasen sus políticas para reorientarse hacia una tecnología favorable al medio ambiente, la supresión de las subvenciones sería perjudicial para ese sector de la economía de Egipto. El orador hizo referencia al párrafo 6 del documento WT/CTE/W/67 y al Informe del CCMA de 1996 en relación con el amplio acuerdo sobre la estrecha vinculación entre pobreza y degradación del medio ambiente.

101. El representante de Indonesia, en nombre de la ASEAN, destacó la importancia de la relación existente entre el comercio de textiles y vestido y el medio ambiente. Los datos aportados en el documento WT/CTE/W/67 atestiguaban la importancia de los textiles y el vestido para los países en desarrollo, puesta de manifiesto por la participación creciente del sector en la producción manufacturera nacional total. Mostró su acuerdo con la tesis del párrafo 170 de que, durante muchos años, ese sector había sufrido la profunda influencia de numerosas distorsiones del comercio. La eliminación de los elevados derechos arancelarios permitiría a los países en desarrollo obtener el capital necesario para asignar recursos a las actividades más eficaces y a la tecnología más idónea para el medio ambiente. La mayor parte de los productores textiles de países en desarrollo eran pequeñas y medianas empresas y, sin el capital generado por el aumento de las exportaciones, tendrían dificultades para cumplir las normas sobre medio ambiente. En el párrafo 179 se reflejaba la necesidad de reducir por etapas la aplicación del AMF, que era una forma de eliminar las distorsiones del comercio en ese sector y asegurar los beneficios ambientales. La ASEAN coincidía con ese criterio, ya que la eliminación de las distorsiones del comercio daría lugar a la reestructuración industrial y las nuevas inversiones permitirían introducir procesos y maquinaria de producción más inocuos para el medio ambiente. Señaló la importancia de la transferencia de tecnología ecológicamente idónea a los países en desarrollo. La ASEAN consideraba que las restricciones del comercio limitaban la capacidad de esos países para fabricar productos textiles y de vestido inocuos para el medio ambiente.

102. El representante de Hong Kong, China compartía las opiniones de la India, Egipto y la ASEAN, en particular sobre la posibilidad de crear situaciones beneficiosas para todos en el sector de los textiles. A tal efecto, era necesario resolver la cuestión de las crestas arancelarias en ese sector. En el párrafo 177 del documento WT/CTE/W/67 se hacía referencia a los elevados derechos arancelarios mantenidos por los países importadores de productos textiles y de vestido, que eran tres veces superiores a los aplicados a otros productos industriales. Si hubiese ocasión de examinar la cuestión de los derechos arancelarios industriales en negociaciones de amplia base, se deberían examinar los derechos arancelarios aplicados por los Miembros importadores. En el caso de los textiles, existía una doble restricción del comercio, ya que el sector se hallaba también sujeto a restricciones cuantitativas. Existían crestas arancelarias en los países importadores que eran superiores a las mantenidas por determinados países exportadores. En las páginas 54 a 57 se mencionaba una serie de restricciones comerciales impuestas al comercio y a la inversión en el sector de los textiles y del vestido. Sin embargo, no se mencionaba la aplicación por los gobiernos de determinadas medidas comerciales que eran menos visibles que los contingentes, los derechos arancelarios o las subvenciones, pero que tenían también efectos adversos en las inversiones. Esas medidas podían acarrear cambios en las normas de origen que añadían nuevos obstáculos al comercio en ese sector. Todo ello tenía efecto en las corrientes comerciales y creaba incertidumbre en los exportadores, lo que influía negativamente en las inversiones. La cuestión de las inversiones era

importante, ya que no se observaba que la liberalización del comercio de los textiles fuera seguida por la utilización de tecnologías más idóneas para el medio ambiente.

103. El representante de Hong Kong, China preguntó hasta qué punto se había logrado la liberalización del comercio de los textiles desde 1995. Al existir elementos de incertidumbre comercial que podían entrañar riesgo para las inversiones, la oportunidad de invertir en la tecnología más avanzada en el sector de los textiles no se había aprovechado. En el párrafo 167 del documento WT/CTE/W/67 se señalaban los importantes cambios estructurales experimentados por el sector durante más de tres decenios. Estaba justificada, sobre todo en los países importadores, una función gubernamental activa que facilitase el ajuste industrial continuo y la adopción de tecnologías más idóneas para el medio ambiente en ese sector, no sólo para velar por la salud económica de la rama de producción, sino también para mejorar la calidad ambiental. Algunos Miembros importadores habían mostrado poco entusiasmo en llevar adelante la cuestión del ajuste, aunque se hubiese planteado con frecuencia.

104. El representante del Pakistán manifestó que en los párrafos 172 y 173 del documento WT/CTE/W/67 se daba a entender que los contingentes aplicados en virtud del AMF podían haber tenido un efecto beneficioso. Aunque las restricciones cuantitativas aplicadas a los textiles no habían afectado a todos los países en la misma medida, incluso una lista parcial comprendería los costos siguientes: limitación de las exportaciones competitivas, transferencia de recursos a líneas de producción menos eficientes, desincentivación y distorsión de las inversiones, y rentas contingentarias. Las publicaciones sobre el comercio de textiles estaban repletas de ejemplos de los costos cuantificados de los contingentes para los importadores y los exportadores. El representante afirmó que, según las estimaciones, los costos sociales netos de la aplicación del AMF para los países importadores se situaban entre 2.400 y 14.800 millones de dólares EE.UU., mientras que los ingresos de las exportaciones perdidos por los países exportadores se situaban entre 5.800 y 6.000 millones de dólares al año. Las restricciones cuantitativas aplicadas a los textiles habían dado lugar a una asignación ineficiente de los recursos y pérdidas de bienestar social tanto en los países importadores como en los exportadores.

Cuero

105. El representante del Brasil indicó que la sección del documento WT/CTE/W/67 relativa al cuero se había presentado de forma satisfactoria. La liberalización del comercio en ese sector podía redundar en beneficios ambientales para todos los países, en particular para el Brasil. Aparte de las cuestiones planteadas en el documento WT/CTE/W/67, la liberalización del comercio podía permitir la difusión de tecnologías más limpias a lo largo de las diferentes etapas de la fabricación del cuero en los países exportadores. Asimismo, podía propiciar la innovación en las tecnologías de última etapa para el tratamiento de los residuos industriales. El aumento de los recursos económicos y financieros resultantes de la liberalización podía proporcionar a su vez fondos para su inversión en el medio ambiente. Al mismo tiempo, el crecimiento de las empresas contribuyentes podía permitir a los gobiernos una mejor asignación de los recursos. Como se indicaba en la sección sobre servicios ambientales, el mercado de bienes y servicios relacionados con el medio ambiente estaba creciendo en los países en desarrollo. El sector privado del cuero del Brasil observaba que la ONUDI y el PNUMA habían establecido un centro nacional de producción menos contaminante en Porto Alegre (Brasil) que favorecería el desarrollo del sector brasileño del cuero, en particular de las pequeñas y medianas empresas.

106. El representante de la India afirmó que este sector debería analizarse más a fondo, sin perder de vista la necesidad de examinar las repercusiones de las medidas no arancelarias en los países en desarrollo, mencionadas en el párrafo 195 del documento WT/CTE/W/67. Tomó nota de los efectos resultantes para el medio ambiente de la liberalización del comercio en el sector del cuero, incluidos los mayores costos para los productores de los países en desarrollo, especialmente pequeñas y

medianas empresas, a que se hacía referencia en el párrafo 200. Una cuestión conexas era la facilitación sin trabas de la transferencia a las pequeñas y medianas empresas de tecnología ecológicamente idónea que les permitiese reducir el impacto de la producción en el medio ambiente.

Servicios relacionados con el medio ambiente

107. El representante de las Comunidades Europeas afirmó que su delegación había prestado atención a la relación entre comercio y medio ambiente, y en particular al logro de beneficios ambientales, aspectos en gran medida reflejados en el documento WT/CTE/W/67/Add.1. El interés por las cuestiones ambientales, cada vez más importantes en las relaciones internacionales, era uno de los elementos fundamentales para medir los nuevos progresos y aciertos económicos, no sólo en la OMC, sino también en relación con cualquier iniciativa internacional o nacional. El CCMA debía estudiar la forma de lograr resultados concretos y creíbles al respecto. Había motivos para examinar la forma en que el sector había respondido al desafío de la reglamentación, a las oportunidades de mercado basadas en el hecho de que lo ecológicamente racional podía ser económicamente racional a largo plazo. El sector se estaba mostrando creativo en el desarrollo de nuevos productos, tecnologías y servicios beneficiosos para el medio ambiente. Esa renovación no sólo estaba teniendo lugar en Europa, sino también en otras partes. Según un breve estudio del sector europeo, la respuesta a los problemas ambientales pasaba por el desarrollo de nuevos productos, acompañado por la creación de nuevos conjuntos de productos y servicios, que favoreciesen la ejecución de proyectos para la preservación o el mejoramiento de la calidad ambiental. Así pues, estaba justificado un enfoque común para definir mejor lo que constituía la rama de actividad ecológica, resultante de la combinación de numerosos elementos: productos, tecnología, conocimientos técnicos y recursos humanos nuevos. A ese respecto, el documento WT/CTE/W/67/Add.1 significaba un primer paso. Era necesario proseguir el debate sobre el establecimiento de posibles normas en ese sector. La jurisprudencia reciente podía constituir la base para revisar el artículo XX; en cuanto al artículo XIV del AGCS, las CE se reservaban su postura en espera de proceder a su examen.

108. En opinión de las CE, el análisis preliminar del documento WT/CTE/W/67/Add.1 mostraba qué aspectos podían mejorarse. Resultaría útil el estudio analítico de los beneficios ambientales, centrado en los factores que influían en la demanda de servicios relacionados con el medio ambiente. Los beneficios potenciales resultantes para el medio ambiente de la eliminación de restricciones y distorsiones del comercio en ese sector (por ejemplo, la mayor disponibilidad de servicios ambientales o la reducción de los precios debida a la mayor competencia entre proveedores nacionales y extranjeros) no se habían detallado con claridad. Asimismo, debería definirse con más precisión el concepto de servicios relacionados con el medio ambiente, tomándose como base la lista de códigos y definiciones de la Clasificación Central de Productos presentada por algunos Miembros en el marco del AGCS, así como la labor de otros foros. La continuación del trabajo analítico para identificar restricciones y distorsiones del comercio no requería como condición previa una clasificación más precisa. Sería necesario identificar las relaciones existentes entre los bienes y servicios relacionados con el medio ambiente y la forma en que se suministraban. Asimismo, también convendría analizar el ámbito de aplicación de la Clasificación para comprobar si la lista vigente reflejaba suficientemente la realidad económica y las innovaciones tecnológicas actuales.

109. El representante del Canadá acogió favorablemente el documento WT/CTE/W/67/Add.1, en que se resumía la labor emprendida en diversos foros sobre el sector de bienes y servicios relacionados con el medio ambiente. Esos bienes y servicios estaban estrechamente relacionados entre sí. El Canadá preconizaba activamente la liberalización del comercio de ese sector en el marco del APEC. Respecto a la labor en la OMC, el Canadá procuraba, siempre que era posible, mantener conversaciones sobre la aplicación de los principios de comercio y medio ambiente a situaciones concretas. En ese sentido, el Canadá tenía interés en la prosecución en la OMC de los debates sobre la liberalización del comercio de bienes y servicios relacionados con el medio ambiente.

110. El representante de los Estados Unidos manifestó que el documento WT/CTE/W/67/Add.1 confirmaba la importancia del sector de bienes y servicios relacionados con el medio ambiente y la relación existente entre la labor desempeñada en ese sector y la constatación de aspectos complementarios en el medio ambiente y el comercio. Cabía señalar que, en el Simposio mencionado, las ONG habían considerado que la OMC podía realizar una contribución importante en ese sector, cuya definición, por otra parte, estaba evolucionando en el APEC y en la OCDE. El orador esperaba que el CCMA continuase prestando atención a ese sector y que se lograsen resultados concretos.

111. El representante de Noruega afirmó que había motivos para creer que un acceso más fácil a bienes, servicios y tecnologías ecológicamente idóneos y más baratos facilitaría a su vez la aplicación de políticas ambientales en todos los países.

112. Los representantes del Japón, de Indonesia, en nombre de la Asean, y de la India manifestaron que realizarían comentarios sobre el documento WT/CTE/W/67/Add.1 más adelante.

113. El observador de la UNCTAD manifestó que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo organizaría para los días 20 a 22 de julio la reunión de un grupo de expertos en fortalecimiento de la capacidad de los países en desarrollo para promover su sector de servicios relacionados con el medio ambiente. La nota documental que prepararía la secretaría de la UNCTAD para esa reunión se centraría en los aspectos de comercio y desarrollo, en particular en los factores originados por la demanda de servicios relacionados con el medio ambiente en los países desarrollados y en desarrollo; los compromisos y normas en materia de contratación pública contraídos en virtud del AGCS; las oportunidades de exportación de los países en desarrollo; los obstáculos al comercio reales o potenciales; y el desarrollo de capacidades.

114. El observador de la OCDE manifestó que la secretaría de su Organización había cedido, para la preparación del documento WT/CTE/W/67/Add.1, la futura publicación sobre el sector del medio ambiente redactada por su grupo de trabajo conjunto con Eurostat. Ese era un sector dinámico en que actualmente se estaba llevando a cabo una intensa labor. La formulación de políticas de medio ambiente había progresado considerablemente en los últimos años, y era importante subrayar que el sector de bienes y servicios relacionados con el medio ambiente no sólo comprendía bienes y servicios de las etapas finales, sino también tecnologías y procesos menos contaminantes. Un especialista en la materia había comentado que la rama de actividad relacionada con el medio ambiente era menos un sector que un conglomerado de proveedores de muchos tipos de bienes, servicios y tecnologías que normalmente se integraban en procesos de producción y que a menudo era difícil separar. A ese respecto, el orador destacó el párrafo 13, donde se mencionaba que la lista de clasificaciones de la OCDE tenía como objetivo permitir la introducción de cambios estructurales futuros, tales como el paso de técnicas y procesos de etapa final a otros menos contaminantes. En cuanto a las observaciones hechas por las CE en relación con la Clasificación Central de Productos, que había servido de base para las negociaciones relativas al AGCS, afirmó que la Clasificación se estaba revisando para tener en cuenta las innovaciones más recientes. En cuanto a la lista del párrafo 20 en que se establecía que los servicios relacionados con el medio ambiente comprendían otros sectores tales como la electrotecnia, la construcción y las actividades de investigación y desarrollo, el orador añadiría los servicios de consultoría.

Comentarios generales al punto 6

115. El representante de Suiza manifestó que el efecto que podía ocasionar en el medio ambiente la eliminación de restricciones del comercio era una cuestión compleja, debido en parte a la ausencia de técnicas integrales de evaluación ambiental, pero también a los numerosos factores que habían de tenerse en cuenta. La complejidad del tema se reflejaba en el documento WT/CTE/W/67. En él no se examinaba si la liberalización del comercio ejercía o no más presión sobre los gobiernos nacionales

para que hiciesen menos estrictas sus normas ambientales si deseaban mantener la competitividad de sus ramas de producción. Por ejemplo, el diagrama del anexo mostraba de qué forma instrumentos de política diferentes podían incrementar los beneficios resultantes para el medio ambiente. Al final del párrafo, se afirmaba que se podría establecer un impuesto para hacer que el precio subiera de PE a PL con objeto de internalizar los costos externos, siendo PL el precio del nivel forestal sostenible. Sin embargo, lo que no se tenía en cuenta era que un impuesto de ese tipo tendía a reducir la competitividad del productor a quien se le aplicaba.

116. A juicio de Suiza, el documento WT/CTE/W/67 podía haber constituido la base para examinar la forma de mejorar el sistema de comercio multilateral con miras a potenciar los beneficios ambientales positivos (y limitar los negativos) asociados a la liberalización del comercio. Se enumeraban todos los posibles e hipotéticos beneficios ambientales, y se ponía poco empeño en evaluar su importancia relativa. En el párrafo 8, se reconocía que "la eliminación de las restricciones y distorsiones del comercio pocas veces representa exactamente una mejora inequívoca de la calidad ambiental". Sin embargo, ese hecho prácticamente se dejaba de lado en el resto del documento. En realidad, el resto del documento se basaba en el supuesto de que la liberalización del comercio mejoraba inequívocamente la calidad ambiental, lo que no constituía un enfoque equilibrado. Los efectos ambientales negativos se trataban de forma marginal, aun cuando su importancia relativa pudiera ser crucial (por ejemplo, respecto al párrafo 43, relativo al transporte, la OCDE había llegado a la conclusión de que el 30 por ciento de las emisiones de CO₂ se debían a esa actividad). Suiza consideraba importante disponer de la descripción completa de los efectos causados por la eliminación de las distorsiones y restricciones del comercio, aún cuando en el punto 6 sólo se mencionaban los beneficios resultantes para el medio ambiente de la supresión de tales medidas. Sin embargo, era indudable que el mandato permitía a Suiza plantear cualquier cuestión pertinente relacionada con el programa de trabajo.

117. Análogamente, se daba por supuesto que los efectos del crecimiento de los ingresos eran sumamente positivos (párrafos 11 y 37); ese supuesto no estaba suficientemente fundamentado. Los estudios mencionados en la nota de pie de página 5 no permitían sacar conclusiones categóricas. La cuestión de si el crecimiento económico traía consigo beneficios ambientales netos permanecía abierta, y Suiza se preguntaba dónde y en qué supuestos habría podido obtenerse un resultado inequívoco, como se sugería en el párrafo 11. En ese contexto, se había cometido un desafortunado error dactilográfico en la primera frase de la nota de pie de página 5, donde en lugar de "una relación inversa" debería leerse "una relación en forma de U invertida". La OCDE había constatado la existencia de una sólida correlación positiva entre las emisiones de CO₂ y los ingresos.

118. En opinión de Suiza, la utilización de la expresión "subvenciones" en el documento resultaba problemática, ya que se consideraba que sus efectos eran sistemáticamente negativos y distorsionadores. Por ejemplo, en el párrafo 70 se afirmaba que "[l]as subvenciones a la energía, por el hecho de provocar una distorsión en los precios, exacerban los problemas ambientales", y en el párrafo 101 se establecía que "[l]a eliminación de las subvenciones [...] representa un paso necesario hacia la eliminación del instrumento económico más extendido que impide el logro de una ordenación sostenible de la pesca". Suiza estaba de acuerdo en que se eliminaran las subvenciones que propiciaban la utilización de métodos de producción perjudiciales para el medio ambiente o el consumo de sustancias contaminantes. Sin embargo, el documento no reconocía que existían también subvenciones correctoras o de "Pigovian", destinadas a mejorar la asignación de recursos y aumentar la eficacia. En el documento se daba a entender que, en principio, todas las subvenciones deberían eliminarse. Suiza recordó que los Miembros de la OMC nunca habían llegado a tal conclusión. Por el contrario, habían reconocido el hecho de que, si se cumplían determinadas condiciones, los impuestos y las subvenciones eran instrumentos de política legítimos. Era preciso subrayar que las subvenciones "no específicas" en el sentido del Acuerdo sobre Subvenciones de la OMC no debían considerarse distorsionadoras. En el documento no se reconocía que las subvenciones, en general, y los pagos directos de ingresos a los agricultores, en particular, podían condicionarse —y en algunos casos así se

hacia- a criterios ambientales. Suiza había formulado esa observación respecto del sector agropecuario.

119. En el párrafo 66 se afirmaba que "[g]eneralmente se estima que la eliminación de las subvenciones y la reestructuración de los impuestos con el fin de aproximar los precios de la energía a los gastos sociales marginales podrían tener como resultado significativos beneficios para el medio ambiente". Según Suiza, los precios de la energía deberían guardar correlación con los gastos sociales a fin de reducir al mínimo los efectos negativos para el medio ambiente. Ello significaba que los precios no sólo debían reflejar la producción marginal de energía sino también los costos ambientales. No convenía manifestar "impresiones" no fundamentadas en el documento, especialmente si se tenía en cuenta el hecho de que "es preciso actuar con cautela antes de formular conclusiones sobre los efectos ambientales de la reforma de la política energética" (párrafo 70). La sección relativa a la energía era más equilibrada que el resto del documento. En la sección sobre silvicultura se afirmaba que "la deforestación tiene poco que ver con el comercio internacional" (párrafo 123). ¿Cómo explicaba la Secretaría la diferencia fundamental entre agricultura y silvicultura respecto a su relación con el comercio internacional? ¿Por qué recomendaba la Secretaría "políticas internas de ordenación de los recursos con el fin de proteger los recursos forestales y elevar el valor de sus productos" (párrafo 126), pero no recomendaba simultáneamente "políticas internas de ordenación de los recursos con el fin de proteger los recursos agropecuarios y elevar el valor de sus productos"? Suiza manifestó que la eliminación de las restricciones y distorsiones del comercio no se plasmaría automáticamente en beneficios para el medio ambiente. La eliminación de tales medidas tendría únicamente efectos ambientales positivos si se aplicaban ya políticas nacionales adecuadas de medio ambiente.

120. El representante de Cuba, en nombre de Bolivia, Cuba, El Salvador, Honduras y la República Dominicana manifestó que el *Programa 21* ponía de manifiesto que el logro del desarrollo sostenible pasaba por la solución de los problemas ambientales en su conjunto. Puesto que las responsabilidades ambientales tenían carácter mundial, los esfuerzos para afrontarlas habrían de compartirse de conformidad con el nivel de desarrollo de cada país. El proceso de desarrollo no cobraría impulso si la economía mundial carecía de la flexibilidad y del dinamismo resultantes de la liberalización del comercio. Éste debería ser multilateral y abierto, así como equitativo, seguro, no discriminatorio y previsible. Aunque los países en desarrollo acababan de adoptar normas más exigentes de protección ambiental, nunca deberían ser tratados con el mismo criterio que los países en desarrollo. Los modelos de producción y consumo surgidos en los países industrializados figuraban entre las principales causas de degradación del medio ambiente. Por ello, la liberalización del comercio resultaría beneficiosa para los países en desarrollo en la medida en que se produjese en un clima en que: el deterioro de las relaciones comerciales desapareciese; los países respetasen las obligaciones contraídas en Río y cumpliesen su compromiso de dedicar el 0,7 por ciento del PIB a la AOD; y los países en desarrollo tuviesen acceso a la tecnología. No se debía marginar a los países en desarrollo tratando de establecer normas ambientales comunes en contextos nacionales diferentes. El establecimiento de medidas comerciales unilaterales, restrictivas y extraterritoriales debería ser sustituido por la cooperación multilateral. Los instrumentos tales como el etiquetado ecológico y la normativa de empaquetado no deberían utilizarse como obstáculos técnicos al comercio. Asimismo, era necesario asegurar la transparencia para desarrollar la capacidad nacional respecto a esas cuestiones. El orador pidió que la documentación del CCMA se distribuyese en todos los idiomas oficiales de la OMC con antelación a las reuniones.

121. La representante de México hizo suya la declaración de Cuba en nombre de varios países de América Latina y se refirió a los progresos realizados en el debate. La tarea principal del CCMA con respecto a la segunda parte del punto 6 debería ser la identificación de situaciones beneficiosas para todos. El mandato de la OMC consistía en facilitar el comercio de acuerdo con los principios de no discriminación, transparencia y previsibilidad. La eliminación de restricciones y distorsiones del comercio, tales como las subvenciones, sería beneficiosa para la actividad comercial y constituía un paso necesario para lograr un sistema multilateral de comercio equilibrado y equitativo para todos los

países. El análisis realizado en el documento WT/CTE/W/67, así como las experiencias sectoriales nacionales de los Miembros, parecían indicar que la eliminación de las restricciones y distorsiones del comercio podrían redundar también en beneficios complementarios para el medio ambiente. Como se indicó en el Informe del CCMA de 1996, los problemas ambientales requerían soluciones ambientales. Ante todo, la aplicación de políticas ambientales y de ordenación de los recursos que fuesen eficaces y adecuadas a nivel nacional constituía un requisito previo para dar solución a los problemas del medio ambiente. En ningún caso deberían aplicarse políticas comerciales en sustitución de políticas ambientales bien diseñadas y adecuadas para resolver los problemas del medio ambiente o las cuestiones relacionadas con la conservación o el ordenamiento de los recursos.

122. En opinión de México, se trataba de un tema complejo cuyo examen requería tiempo. El intercambio de opiniones desde una perspectiva sectorial constituía una base útil para el debate relativo al punto 6, y se debía tener presente que la lista de sectores analizados era ilustrativa, no exhaustiva. Al examinar ejemplos sectoriales, el CCMA no debería adoptar una perspectiva estrictamente sectorial de las cuestiones de comercio y medio ambiente. La oradora coincidía con las CE en que cualquier conclusión resultante del análisis habría de aplicarse horizontalmente, no sólo con carácter sectorial. México concedía importancia a la naturaleza horizontal de las normas que regían el comercio para asegurar a todos los países la capacidad de participación. En lo relativo a las subvenciones, la agricultura era el único sector al que, desafortunadamente, se había dado trato especial en la OMC. Ese sector habría de revisarse en el contexto de su carácter específico en la OMC y requeriría un análisis más a fondo.

123. El representante de la India manifestó que el análisis sectorial realizado en el documento WT/CTE/W/67 era útil para examinar la segunda parte del punto 6. En cuanto a la primera parte de ese punto, el orador propuso que el debate prosiguiese dentro de las líneas generales del texto oficioso de la India (de fecha 20 de junio de 1996) con objeto de establecer los medios para salvaguardar y potenciar el acceso de los países en desarrollo a los mercados. El examen integrado del punto 6 ayudaría al CCMA a enfocar su mandato desde la perspectiva correcta. La India compartía el criterio expresado por Cuba, en nombre de varios Miembros de la OMC, especialmente respecto de la necesidad de un enfoque diferenciado para los países en desarrollo, sin perder de vista los objetivos de desarrollo sostenible. En el párrafo 3 del documento WT/CTE/W/67 se indicaba acertadamente que la liberalización del comercio no era la causa principal de degradación del medio ambiente, ni los instrumentos de comercio la mejor política para resolver los problemas del medio ambiente. En cuanto a los beneficios indirectos de la eliminación de restricciones y distorsiones del comercio, era importante tener presente que, si esas restricciones se orientaban hacia opciones de política conducentes a la liberalización del comercio, aún cabía esperar que se produjesen situaciones beneficiosas para todos. En el párrafo 4 se había examinado la asignación inadecuada de los recursos y se había afirmado que la distorsión de los precios podía enmascarar la abundancia de recursos ambientales infrautilizados. Se debería profundizar en esa cuestión para examinar si el aprovechamiento de los recursos era óptimo, en particular cuando se trataba de países en desarrollo. La disponibilidad de determinadas fibras, como por ejemplo el yute, y la explotación de otros recursos de los países en desarrollo podía considerarse sectores en que era posible que la eliminación de restricciones del comercio contribuyese al logro del desarrollo sostenible.

124. La India señaló que, en el párrafo 6, se había subrayado la relación existente entre la pobreza y la degradación del medio ambiente. Así pues, debían examinarse medidas para mitigar la pobreza en los países en desarrollo de acuerdo con las recomendaciones del Informe del CCMA de 1996, contenidas en los párrafos 173, 196 y 199 del documento WT/CTE/1, y con el texto oficioso de la India sobre ese tema. Con ello, se planteaba la cuestión del pronto y pleno cumplimiento de los compromisos contraídos en la Ronda Uruguay, a que se hacía referencia en el párrafo 7 del documento WT/CTE/W/67. En el párrafo 8, se afirmaba que la eliminación de restricciones y distorsiones del comercio no siempre era en sí misma una garantía de mejoramiento de la calidad del medio ambiente. Aunque ello era cierto, en los debates del CCMA era preciso establecer una

distinción entre los aspectos de calidad del medio ambiente que podían abordarse a través del sistema multilateral de comercio (como por ejemplo, la liberalización del comercio) y los que no era posible enfocar de esa forma (por ejemplo, las diferentes capacidades de absorción), a efectos de sacar conclusiones sobre cada sector en el documento. El párrafo 9 parecía restar importancia al valor del comercio de bienes y servicios relacionados con el medio ambiente. En el párrafo 11 se indicaba que ese comercio sobrepasaba los 250.000 millones de dólares EE.UU. Para los países en desarrollo podía resultar muy ventajoso en términos de acceso a los mercados que ese comercio se orientase hacia la producción en esos países de bienes y servicios ecológicamente racionales. En el mismo contexto, y en lo que respecta a las ganancias de bienestar resultantes de la liberalización del comercio a que se hacía referencia en el párrafo 10, la situación podía trasladarse al nivel mundial para optimizar la producción; lo que se necesitaba era una política coherente a nivel mundial para aprovechar al máximo los beneficios. Si la sociedad civil se preocupaba por la degradación del medio ambiente y los productores interesados se mostraban favorables a las restricciones del comercio, esa confluencia de valores políticos podía facilitar la tarea de impulsar el desarrollo sostenible.

125. El representante del Brasil expresó su satisfacción por el hecho de que el CCMA dejase de lado la retórica para analizar casos concretos de situaciones beneficiosas para todos. El documento WT/CTE/W/67 constituía un buen punto de partida para entablar un debate sobre el fondo de las cuestiones. Para seguir progresando era preciso que los Miembros contribuyesen con sus experiencias nacionales, no sólo respecto de los problemas concretos, sino también de las posibles soluciones a esos problemas. Las intervenciones del Brasil en relación con ese grupo obedecían a su empeño por aportar su contribución en los sectores de la agricultura, del cuero y de la energía. En el sector agrícola, el caso de la soja constituía un ejemplo de situación beneficiosa para todos. Los casos del etanol, en el sector energético, y del cuero representaban dos aspectos más específicos en los que existían posibilidades de obtener resultados beneficiosos para todos. En el futuro, el Brasil realizaría comentarios sobre otros sectores en relación con el punto 6.

126. El representante de Turquía manifestó que, en relación con el punto 6, el acceso a los mercados y la liberalización del comercio se habían enfocado desde una perspectiva basada en el medio ambiente, que era uno de los aspectos esenciales de la labor del CCMA. Por ello, y a causa de las dificultades que presentaba, ese aspecto tenía particular interés para Turquía. El CCMA había realizado importantes progresos en la búsqueda de fórmulas que permitiesen a la OMC favorecer la complementariedad mutua de los sectores comercial y ambiental mediante la liberalización del comercio y el desarrollo económico. Se habían identificado los problemas generales y se había adoptado un enfoque sectorial para analizar las dificultades y posibilidades asociadas a esos problemas. El documento WT/CTE/W/67 proporcionaba amplitud y profundidad al análisis; los sectores abarcados eran importantes y Turquía realizaría comentarios sobre ellos más adelante. Existía una relación positiva entre la eliminación de las restricciones del comercio y la mejora del medio ambiente. La expansión del comercio mediante la liberalización reducía la pobreza y fomentaba el aprovechamiento eficaz de los recursos naturales. La liberalización de los mercados daba lugar a una mayor disponibilidad de bienes y servicios ecológicamente inocuos y proporcionaba recursos tecnológicos y financieros para tratar de resolver los problemas del medio ambiente. Sin embargo, la liberalización del comercio no garantizaba la protección ambiental, y las medidas comerciales no eran el mejor instrumento para tratar de resolver esos problemas. Para que los objetivos de comercio y medio ambiente fuesen mutuamente complementarios, la liberalización del comercio debería acompañarse de políticas ambientales adecuadas. No se había prestado suficiente atención al transporte de energía y su relación con el medio ambiente, sobre el que ejercía importantes efectos negativos. Los beneficios resultantes para el medio ambiente de la eliminación de restricciones del comercio variaban, con toda probabilidad, entre un país y otro. Por ello, un análisis integral destinado a hallar situaciones beneficiosas para todos debería evitar las generalizaciones y reflejar los casos excepcionales. A ese respecto, los sectores examinados en el documento WT/CTE/W/67 podían desglosarse en subsectores y analizarse desde diferentes puntos de vista para

captar los diversos efectos ambientales de la liberalización del comercio. Asimismo, merecía la pena examinar la posibilidad de incluir nuevos sectores en la evaluación.

127. El representante de Noruega manifestó que el documento WT/CTE/W/67 podía aportar elementos útiles para posibles negociaciones futuras sobre el acceso a los mercados. El representante recomendó que el documento se revisase posteriormente sobre la base de los comentarios de las delegaciones. Añadió que era indispensable que otros órganos de la OMC, aparte del CCMA, tuviesen en cuenta los aspectos relacionados con el medio ambiente siempre que procediese, como por ejemplo en la labor en curso en diversos órganos y en las negociaciones futuras de la Organización. La sección introductoria del documento contenía afirmaciones generales sobre la relación existente entre la liberalización del comercio y los beneficios resultantes para el medio ambiente. Lo que no estaba claramente definido en el documento era su propia finalidad. El objetivo general de Noruega era lograr que las políticas ambientales y comerciales fuesen mutuamente complementarias. Una forma de hacerlo consistiría en identificar las denominadas situaciones beneficiosas para todos en que la liberalización del comercio pudiese proporcionar un doble dividendo de beneficios ambientales y económicos. Al emprender ese complejo proceso analítico, habrían de examinarse varios sectores y situaciones. Algunos sectores se clasificarían como beneficiosos para todos, al tiempo que otros podrían considerarse simultáneamente beneficiosos y perjudiciales, ya que la eliminación de determinadas restricciones o distorsiones del comercio tendrían efectos netos negativos para el medio ambiente. Ambas categorías deberían reflejarse en el documento, que habría de prestar atención por igual a los efectos ambientales negativos y positivos resultantes de la mayor liberalización del comercio, examinada en el análisis sectorial, con objeto de identificar beneficios netos para el medio ambiente. Ello era necesario para asegurar un análisis objetivo. Así pues, Noruega prefería que en el título del documento figurase la expresión "beneficios netos resultantes para el medio ambiente". Noruega insistía en que los subtítulos y el texto, especialmente la introducción, se modificasen para reflejar tanto los efectos ambientales positivos como los negativos.

128. Según Noruega, en varias partes de la introducción se indicaba que la liberalización del comercio se plasmaría automáticamente en beneficios para el medio ambiente (párrafos 2 y 6). Sin embargo, era probable que se produjesen tanto situaciones beneficiosas para todos como otras simultáneamente beneficiosas y perjudiciales, en función del sector y de las circunstancias. Los resultados del análisis de los diversos sectores y situaciones servirían para determinar si una situación beneficiosa para todos era posible o no. Por otra parte, no estaba claro si los párrafos 9 a 11 contenían conclusiones basadas en el análisis sectorial o indicadores tomados como referencia para realizar el análisis. Sería acertado establecer una distinción más clara entre la introducción y las conclusiones basadas en el análisis sectorial. Si bien la introducción tenía como objetivo preparar el terreno para el examen sectorial, las conclusiones (por sectores en la medida en que variaban sustancialmente entre un sector y otro) deberían resumir objetivamente los resultados sectoriales más importantes. Asimismo, los beneficios ambientales expuestos en el párrafo 10 tal vez requerían alguna aclaración adicional. Por ejemplo, no resultaba evidente cómo y en qué medida "las mejoras introducidas en las capacidades institucionales, normativas o de seguimiento y aplicación de los organismos ambientales" estaban vinculadas a la reforma de las políticas comerciales. El resto del párrafo 10 no aclaraba el sentido de su primera frase; y el contenido de ese párrafo no se reflejaba en las conclusiones del párrafo 12. Por otra parte, podía prestarse más atención a las repercusiones del transporte en el medio ambiente. Como una proporción sustancial de las emisiones de SO_x, NO_x y CO₂ estaban relacionadas con el transporte, el documento debería tratar de proporcionar una indicación aproximada del grado en que la liberalización del comercio incrementaría esas emisiones. Debido a las variaciones sectoriales, esa cuestión podría examinarse por sectores cuando fuese necesario, pero debería mencionarse también en la introducción (en un párrafo independiente) y, posiblemente, en las conclusiones.

129. El representante de las Comunidades Europeas destacó los esfuerzos desplegados en la preparación del documento WT/CTE/W/67 para tener en cuenta las opiniones de los Miembros. Ese documento era una contribución informativa a la labor del CCMA, aunque las CE, al igual que otros,

no estaban de acuerdo con cada uno de sus puntos ni con todas sus conclusiones. En conjunto, el documento representaba una equilibrada descripción general de los beneficios resultantes para el medio ambiente de la eliminación de las restricciones y distorsiones del comercio y constituía una fuente de referencia útil. Las CE se felicitaban por la mayor disponibilidad de ese documento tras el levantamiento de su carácter reservado. En el documento WT/CTE/W/67 se indicaba, haciéndose referencia al informe del CCMA de 1996, que la liberalización del comercio en general podía reportar beneficios para el medio ambiente y el desarrollo al facilitar una asignación y una utilización más eficientes de los recursos. El documento se concentraba, sobre la base del mandato del CCMA, en los beneficios resultantes para el medio ambiente de la eliminación de las restricciones del comercio, aunque en él se identificaban también las consecuencias adversas de algunos aspectos de la liberalización del comercio y se indicaba que a veces podía ser necesario adoptar medidas complementarias. Una objeción importante consistía en que la liberalización del comercio, aunque resultase indispensable para lograr un desarrollo sostenible, fuese condición previa para ello. En realidad, el desarrollo sostenible tenía que basarse ante todo en prácticas de gestión sostenibles; para alcanzar los beneficios plenos de la liberalización del comercio en los ámbitos nacional, regional y mundial era necesario en primer lugar aplicar políticas ambientales adecuadas a nivel nacional.

130. Las CE estaban de acuerdo con la orientación dada a la introducción y con la tesis de que la eliminación de las restricciones del comercio pocas veces representaba exactamente una mejora inequívoca de la calidad ambiental *per se*; podía haber efectos positivos, pero no eran automáticos. La relación entre ambos aspectos era compleja, como lo era la medición de cualquier posible beneficio resultante para el medio ambiente de la liberalización. Las CE estaban de acuerdo con la observación general de que la eliminación de las restricciones y distorsiones del comercio mejoraba el funcionamiento global de los mercados, y que en particular un sistema de comercio más abierto y liberal aumentaba las oportunidades de difundir productos, servicios y tecnologías ecológicamente idóneos. Las CE compartían también la afirmación de que las externalidades adversas asociadas a la producción y al consumo habían de integrarse en el proceso decisorio para que los beneficios descritos se convirtiesen en realidad. Asimismo, era preciso que esas externalidades se reflejasen en el precio de los bienes y servicios. En respuesta a la pregunta de la ASEAN, afirmó que en el Parlamento holandés se estaba tramitando una iniciativa sobre el etiquetado de la madera; antes de que culminasen los procedimientos en el Parlamento holandés, esa propuesta se presentaría a la Comisión para comprobar su compatibilidad con la legislación de las CE, en particular con las obligaciones internacionales.

131. El representante del Japón manifestó que era necesario un análisis más exhaustivo en que se tuviesen en cuenta los efectos ambientales positivos y negativos de la liberalización del comercio. También deberían reflejarse otros elementos, tales como las funciones múltiples y las externalidades asociadas, por ejemplo, a las actividades agropecuarias, en particular la biodiversidad, el paisaje y la prevención de inundaciones y de la erosión del suelo. Ese enfoque era fundamental para lograr una relación óptima entre el acceso a los mercados y el medio ambiente. El grado y la naturaleza del efecto de las medidas comerciales en el medio ambiente variaría en función de las condiciones naturales, como por ejemplo el clima, el suelo y los métodos de producción, así como de otras condiciones económicas y sociales de cada país o región. Como había señalado Suiza, la eliminación de las restricciones y distorsiones del comercio no se plasmaría de forma automática en beneficios para el medio ambiente. Aunque el título del documento WT/CTE/W/67 era "beneficios resultantes para el medio ambiente de la eliminación de las restricciones y distorsiones del comercio", el hecho de tener en cuenta únicamente los beneficios y omitir los aspectos negativos no daría como resultado situaciones beneficiosas para todos. El Japón apoyaba la propuesta de Noruega de revisar el documento.

132. El representante de la Argentina expresó su acuerdo con quienes consideraban que la liberalización del comercio no garantizaba una mayor protección ambiental, en particular si el precio de las mercancías objeto de comercio no reflejaba la totalidad de los costes de producción. Para

promover una relación de complementariedad entre las políticas de protección ambiental y el sistema multilateral de comercio, antes de introducir nuevas restricciones comerciales debían eliminarse las que impedían que los verdaderos costos de producción se reflejasen en el precio real de las mercancías comerciadas. Los precios determinaban las decisiones adoptadas por los inversores, los productores y los consumidores; las distorsiones de los precios alteraban el mensaje enviado a los agentes económicos, que tenía un claro efecto sobre el medio ambiente, en particular tratándose de los precios de los productos básicos. Existían tres razones para ello: a) los productos básicos constituían el fundamento del proceso de producción, por lo que cualquier cambio en sus precios tenía un efecto en cadena sobre el resto del proceso; b) los productos básicos tenían una estructura de los costos mucho más simple que la de las mercancías producidas mediante un mayor nivel de transformación, lo que significaba que una valoración incorrecta del recurso natural explotado (tierra, poblaciones ícticas, bosques, aire o agua) tendría un efecto mucho más notable que si se tratase de productos con una estructura de costos más compleja; y c) los productos básicos eran en general fungibles, de forma que cualquier distorsión de los precios se transmitiría fácilmente al sistema internacional de fijación de precios.

133. Por consiguiente, a juicio de la Argentina, cualquier cambio en los precios podía distorsionar el mensaje enviado. La relativa escasez de cualquiera de los factores asociados a la producción (por ejemplo, recursos naturales, tales como la tierra o el agua) quedaba eclipsada, lo que hacía difícil establecer la capacidad del sistema para sostener una producción determinada durante un período de tiempo (conocida como producción sostenible). En consecuencia, cabía preguntar cuáles de las vigentes restricciones y distorsiones del comercio podían alterar los precios y, por lo tanto, habían de eliminarse en beneficio del medio ambiente. Como se reconoció en el Principio 16 de la Declaración de Río, para estar en condiciones de aplicar una política de producción sostenible, los precios de los productos deberían reflejar tanto los costos privados de producción como las externalidades ambientales causadas durante su producción, distribución, consumo y eliminación. Las políticas aplicadas por algunos países de la OCDE que subvencionaban la producción y las exportaciones hacían bajar artificialmente los precios internacionales hasta el punto de que ni siquiera reflejaban el costo privado de producción, e impedían cualquier posibilidad de aplicar políticas de medio ambiente favorables a la incorporación de las externalidades ambientales. En resumen, las políticas de subvenciones que afectaban a la producción de mercancías básicas podían dar lugar a dos tipos de efectos negativos para el medio ambiente: a) efectos locales, mediante la generalización de las prácticas de sobreexplotación y b) efectos mundiales, al obligar a los productores que no se beneficiaban de esas prácticas gubernamentales de ayuda a aceptar precios internacionales distorsionados, que los ponían ante una difícil alternativa: o sobreexplotar sus propios recursos para aumentar su producción inmediata o abandonar el mercado.

134. El representante de Australia se mostró complacido por el levantamiento del carácter reservado del documento WT/CTE/W/67, que había ayudado mucho a comprender los problemas en el Simposio de ONG. En el documento se ordenaba una gran cantidad de información existente sobre políticas y tendencias económicas relacionadas con el comercio y sobre políticas y condiciones de medio ambiente, y se analizaban los vínculos entre ellas. Sus conclusiones sobre la claridad de esos vínculos variaban, como era de esperar, en función de cada sector y de las complejidades asociadas. Pero en el documento se destacaban diversos sectores, basados en los recursos naturales, en los que, según la opinión de numerosos expertos, la reforma de las políticas económicas y ambientales podía reportar beneficios generales de desarrollo y ecológicos, tanto a nivel nacional como internacional. El debate de ese punto en el Comité había girado en torno a varios factores que eran importantes para determinar la forma de maximizar el nivel de certidumbre sobre los resultados ambientales de la reforma del comercio, tales como la atención y eficacia en la formulación de las políticas, la mejora en la vigilancia y evaluación de los factores ambientales, y la necesidad general de políticas de medio ambiente y conexas para internalizar los costos ambientales. Desarrollar la capacidad de los gobiernos nacionales para abordar esos problemas sería fundamental. Aunque en general había acuerdo al respecto, no debía olvidarse que ya se estaban realizando notables esfuerzos a nivel

internacional y nacional, debido al reconocimiento de la absoluta importancia de aplicar políticas en esos sectores para la ordenación global del medio ambiente.

135. Australia había prestado especial atención a la agricultura y la pesca, que habían sido objeto de un análisis empírico a fondo en virtud del cual se confirmaba que la reforma podía aportar importantes beneficios ambientales y económicos. Por ello, había razones para continuar prestando atención a esos sectores y a otros basados en los recursos naturales en los que tenían lugar las mayores distorsiones del mercado y respecto de los cuales existían las mayores posibilidades de que la identificación por el CCMA de determinadas reformas de las políticas comerciales proporcionase un dividendo doble. Australia aseguró, para tranquilidad de algunas delegaciones, que no deseaba comprometer los beneficios sociales y ambientales positivos propiciados por la agricultura. Sin embargo, esos beneficios habían de alcanzarse de la forma más eficaz, específica y transparente posible, sin las enormes distorsiones económicas y ambientales que se experimentaban actualmente. Esa cuestión de la eficiencia de las políticas, a que habían hecho alusión los Estados Unidos, era un aspecto fundamental que había que examinar. El documento WT/CTE/W/67 había sido injustamente criticado en varias ocasiones. En referencia a su análisis de la relación existente entre la reforma del comercio y los beneficios resultantes para el medio ambiente, en particular en el caso de la agricultura, se habían utilizado las palabras "automático" y "automatismo". Esas críticas eran injustas, ya que el documento WT/CTE/W/67 constituía un análisis claro y oportuno de las complejidades de ese sector y de la importancia de la interacción existente entre las políticas económica, comercial y de medio ambiente en general. Asimismo, había resultado útil al inspirar un enfoque sectorial del punto 6, lo que había facilitado un debate fructífero y centrado.

136. El representante del Pakistán afirmó que el CCMA debía identificar situaciones beneficiosas para todos. A nivel general, existía una situación beneficiosa para todos creada por la relación positiva existente entre la liberalización del comercio y el aumento de los ingresos per cápita. Esa relación lineal no podía mantenerse en todos los casos si no se complementaba con otras medidas, en particular medidas de protección ambiental y positivas, como por ejemplo la transferencia de tecnología y de recursos financieros. La validez general de esa relación era innegable. Se debería poner más empeño en identificar situaciones específicas beneficiosas para todos, tales como las expuestas por los Miembros, y determinar en qué medida esas situaciones permitían extraer principios generales para los debates de conjunto sobre comercio y medio ambiente. Con ello se evitaría la repetición de opiniones.

137. El representante de Nueva Zelandia dijo que el debate sectorial propiciado por el documento WT/CTE/W/67 había sido útil. Hizo suyas las observaciones de Australia sobre algunas de las críticas inmerecidas de que había sido objeto el documento. El planteamiento de Nueva Zelandia consistía en identificar los aspectos complementarios de la liberalización del comercio y los beneficios resultantes para el medio ambiente; el debate había puesto de manifiesto que esos aspectos eran numerosos. Algunas de las intervenciones en que se había expresado preocupación por las supuestas consecuencias adversas para el medio ambiente resultantes de la liberalización del comercio, por ejemplo en el sector agropecuario, parecían sugerir que, al aplicarse varias de las principales políticas comerciales causantes de distorsión, como por ejemplo las subvenciones a la exportación, el objetivo había sido lograr un beneficio para el medio ambiente. El orador ponía en tela de juicio esa sugerencia. Las reservas expresadas acerca de la liberalización del comercio en algunos sectores no parecían referirse a los efectos adversos para el medio ambiente como tales, sino más sencillamente, a la noción de reforma o cambio. La OMC no debería mostrarse renuente ante la reforma y debería examinar la posibilidad de introducir cambios, en particular tras la identificación de elementos de complementariedad entre la reforma y los beneficios para el medio ambiente. El Brasil, el Canadá y el Pakistán se habían mostrado partidarios de continuar trabajando de forma práctica en ese sector sobre la base de las experiencias nacionales expuestas al CCMA, a fin de estudiar sectores concretos para determinar la estrecha relación existente entre la liberalización del comercio y los beneficios resultantes para el medio ambiente. Aunque opinaba que el documento WT/CTE/W/67

había propiciado un debate fructífero, se trataba sólo del comienzo y correspondía a las delegaciones seguir aportando sus experiencias nacionales. Nueva Zelandia prestaría su colaboración a ese proceso en varios sectores, tales como la pesca y la agricultura.

138. El representante del Canadá manifestó que los debates sectorial y general relativos al punto 6 habían sido más provechosos que los anteriores, lo que reflejaba su estructura más centrada, basada en el documento WT/CTE/W/67. En términos generales, el documento había sido injustamente criticado. El CCMA debía tener presente que el documento WT/CTE/W/67 era un documento de trabajo destinado a estimular los debates. El Canadá preferiría que hubiese más exposiciones o contribuciones relativas a experiencias nacionales concretas para profundizar en el análisis hecho en el documento, en lugar de revisarlo. Las delegaciones habían de aceptar el desafío de aportar sus experiencias nacionales. El Canadá esperaba que, siempre que se abordase el punto 6, el debate pudiese estructurarse de la misma forma. El enfoque sectorial era un instrumento que permitía a los Miembros comprender más a fondo las cuestiones. Como se había puesto de manifiesto en el Simposio de ONG, la sociedad civil cada vez comprendía mejor que el grupo de puntos relativos al acceso a los mercados podía proporcionar beneficios más inmediatos en materia de medio ambiente y desarrollo que el otro grupo de puntos, aunque ambos eran igualmente importantes.

139. El representante de los Estados Unidos afirmó que el debate debía ser equilibrado; el CCMA no debía emprender análisis excesivamente simplistas de las cuestiones. Aunque la complementariedad de las políticas comerciales y ambientales era necesaria, no debía utilizarse como razón para no liberalizar el comercio. Puesto que se habían identificado sectores en que era particularmente importante aplicar políticas complementarias, sería importante ayudar a los gobiernos a identificar esas políticas, en lugar de buscar razones contrarias a la liberalización. El representante mostró su acuerdo con la observación de Nueva Zelandia de que los Miembros debían combatir cualquier tendencia hacia un proteccionismo disfrazado de ecología o a buscar nuevas razones para justificar viejos obstáculos al comercio. Era importante examinar la contribución excepcional que la OMC podía realizar en materia de comercio y medio ambiente. La vocación de la OMC había consistido en tratar de mejorar la eficiencia de los mercados, lo que era complementario de los esfuerzos desplegados en materia de medio ambiente para tratar de establecer precios correctos. De ahí la importancia que muchos Miembros concedían a las subvenciones, especialmente a las que perturbaban las señales del mercado. Puesto que la OMC era una organización dirigida por sus Miembros, había llegado el momento de que esos Miembros emprendiesen un análisis más a fondo; no era tarea de la Secretaría resolver las discrepancias que los Miembros no podían solucionar por sí mismos. Resultaba particularmente útil que varios países, como por ejemplo el Canadá, el Brasil y Colombia, hubiesen aportado sus experiencias nacionales para impulsar ese proceso.

140. La representante de México manifestó que era necesario examinar el enfoque de los debates relativos al punto 6 y la función de la documentación de la Secretaría. Asimismo, era necesario identificar situaciones beneficiosas para todos en que la liberalización del comercio pudiese reportar beneficios para el medio ambiente; ese era el mandato del CCMA. Y esa sería la contribución positiva que el CCMA podría realizar en relación con ese punto. El documento WT/CTE/W/67 constituía la base para los debates. México no deseaba que ese documento se revisase, ya que no era un documento negociado. La oradora propuso que en el próximo debate relativo al punto 6, la documentación de la Secretaría y las contribuciones nacionales se incluyesen en la primera parte del punto, a saber, el efecto de las medidas ambientales en el acceso a los mercados, especialmente en lo relativo a los países en desarrollo.

141. El representante de Corea afirmó que estaba claro que no existía consenso sobre los efectos resultantes para el medio ambiente de la liberalización del comercio agropecuario, por lo que no sería posible realizar generalizaciones apresuradas. Corea no consideraba necesario volver a exponer su postura sobre esa cuestión. No cabía pasar por alto que la liberalización del comercio tenía efectos positivos y negativos. Un análisis que se basase únicamente en una perspectiva económica, sin tener

en cuenta las situaciones específicas y las necesidades especiales de desarrollo y sociales de los países, no podía culminar en una conclusión razonable.

142. El representante de Malasia, en nombre de la ASEAN, se adhirió a la recomendación de que los debates continuasen sobre la base de las experiencias nacionales, con miras a identificar situaciones beneficiosas para todos; este objetivo podía impulsar las deliberaciones. En cuanto a la declaración del Canadá, la ASEAN insistía en que se debía conceder igual importancia a todos los puntos del programa de trabajo, con arreglo al mandato de los Ministros.

Punto 2 La relación entre las políticas ambientales relacionadas con el comercio y las medidas ambientales que tengan efectos comerciales significativos, y las disposiciones del sistema multilateral de comercio

143. El representante de las Comunidades Europeas informó al CCMA de que las CE habían encargado recientemente un estudio sobre el análisis de los efectos ambientales de las medidas y los acuerdos comerciales, que se finalizaría en 1998. El objetivo del estudio era desarrollar una metodología de opciones para aplicar las directrices de la OCDE relativas al análisis de los efectos ambientales de las medidas y acuerdos comerciales en las CE. Como parte de ese estudio, se llevaría a cabo una encuesta relativa a las experiencias en otros países y a nivel internacional; los consultores que estaban realizando el estudio se pondrían en contacto con la Secretaría y con algunos Miembros de la OMC para recabar información, y las CE agradecerían la asistencia que los Miembros pudiesen prestarles. Las CE mantendrían a los Miembros informados sobre los progresos de esa iniciativa.

144. El representante de los Estados Unidos manifestó que el debate sobre las cuestiones del acceso a los mercados había puesto de relieve la función que podrían desempeñar los análisis de los efectos ambientales para asegurar la complementariedad de las políticas de comercio y medio ambiente. Los Estados Unidos se felicitaban por la declaración de las CE y esperaban que, cuando su proceso de análisis se hubiese ultimado, las CE examinarían la posibilidad de presentar su experiencia. Para los Estados Unidos había sido alentadora la acogida dispensada a su exposición sobre los análisis de los efectos ambientales, y esperaba que otros que hubiesen llevado a cabo análisis semejantes los diesen a conocer en el CCMA.

Punto 3 b) La relación entre las disposiciones del sistema multilateral de comercio y las prescripciones aplicadas con fines ambientales a los productos, con inclusión de normas y reglamentos técnicos y prescripciones en materia de envase y embalaje, etiquetado y reciclado

145. El representante de Colombia presentó el documento de su delegación sobre el sector floricultor colombiano y el etiquetado ecológico y su impacto en el acceso a los mercados (WT/CET/W/76-G/TBT/W/60). Colombia es el segundo mayor exportador de flores después de los Países Bajos, con una cuota del mercado mundial del 10 por ciento, aproximadamente. Al preparar ese estudio, se observó que el sector privado colombiano tenía gran interés en elaborar instrumentos para vincular eficazmente las disposiciones sobre medio ambiente y comercio. Las directrices para elaborar esos instrumentos se habían basado en los principios de transparencia, equivalencia y reconocimiento mutuo. La preocupación por la gestión, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos utilizados en los programas de producción del sector floricultor había dado lugar a una iniciativa de gestión sostenible, el programa FLORVERDE, cuyo objetivo era el mejoramiento continuo y gradual de la producción en el sector. Mediante un sistema de registro, el programa trataba de identificar el 20 por ciento de las empresas con mejor comportamiento ambiental. Ese comportamiento se utilizaría como meta que las demás empresas deberían alcanzar en el curso de los tres años siguientes. Cada tres años se realizaría una evaluación del sistema para establecer nuevos niveles de comportamiento. Igualmente, se habían llevado a cabo estudios de casos sobre la forma de alcanzar la ecoeficiencia. Otros objetivos del programa eran fomentar el establecimiento de

sistemas de gestión ambiental en las empresas de floricultura, del tipo previsto en la norma 14001 de la ISO, mejorar el acceso a los mercados y aumentar la productividad. Cuando se adoptaba un sistema de gestión que racionalizaba el aprovechamiento de los recursos, por ejemplo mediante un menor consumo de energía y agua y una mayor producción floral, se protegía el medio ambiente al tiempo que se reducían los costos de producción y se mejoraba la productividad. Ese era un ejemplo claro de situación beneficiosa para todos.

146. A pesar de esa labor de protección del medio ambiente, el sector floricultor de Colombia se había enfrentado a dificultades de acceso a los mercados en determinados países, debido al hecho de que organizaciones privadas habían lanzado una campaña de desprestigio de la floricultura colombiana sobre la base de casos aislados e injustificados. A su vez, esas organizaciones proponían la aplicación de planes de etiquetado ecológico en condiciones inaceptables para los exportadores colombianos; la propuesta de etiquetado ecológico era discriminatoria, ya que sólo se aplicaba a determinados países, y su costo elevado, al destinarse los ingresos recaudados al funcionamiento del programa de etiquetado en el país importador. Esa era una medida coercitiva, y el sector privado colombiano había mostrado su disconformidad con la propuesta de etiquetado ecológico, lo que había hecho que se intensificaran las campañas contra las flores colombianas. La lista de comprobación propuesta en el marco del programa de etiquetado ecológico utilizaba un lenguaje confuso, era arbitraria y estaba controlada por expertos extranjeros. En suma, la proliferación de etiquetas ecológicas hacía imposible cumplir los requisitos de las diferentes listas de comprobación requeridas por la organización de cada país.

147. A partir de esa experiencia, Colombia consideraba importante que el CCMA adoptase una postura clara al respecto a fin de evitar la proliferación de etiquetas ecológicas privadas no sujetas a normas o mecanismos de control comunes para asegurar que no creaban distorsiones del comercio y del mercado o inducían a error a los consumidores. Era esencial garantizar la transparencia en la elaboración y aplicación de las etiquetas ecológicas y velar por que éstas no tuviesen carácter discriminatorio y por que las partes interesadas pudiesen participar en su elaboración. A ese respecto, los programas de etiquetado ecológico deberían estar sujetos a las disposiciones del Código de Buena Conducta anexo al Acuerdo sobre OTC. La OMC debería estudiar y desarrollar criterios de reconocimiento mutuo y equivalencia en materia de etiquetado ecológico. Su aplicación podría resolver algunos de los problemas planteados en el documento de Colombia. El etiquetado ecológico podría tener importantes repercusiones en el acceso a los mercados, como han puesto de manifiesto las experiencias de Colombia en el sector de la floricultura y del Canadá en el sector forestal.

148. El representante de Egipto afirmó que, como se indicaba en el documento WT/CTE/W/79, los estudios relativos al etiquetado ecológico mostraban cada vez más indicios de que los países en desarrollo se veían seriamente afectados por las prescripciones en materia de medio ambiente, incluido el etiquetado ecológico. En algunos casos, esas prescripciones representaban entre un 5 y un 20 por ciento de costos adicionales en relación con los productos exportados, lo que constituía una carga para los exportadores de países en desarrollo, en particular para las pequeñas y medianas empresas. En un taller del CCI sobre etiquetado ecológico y otras prescripciones en materia de calidad ambiental aplicables a las exportaciones de productos textiles y de vestido de países en desarrollo se llegó a la conclusión de que algunos de los problemas con que tropezaban esos países obedecían a la multiplicidad de planes de etiquetado ecológico existentes en los países desarrollados y a los diferentes criterios aplicados en ellos. Asimismo, se consideró que algunos programas carecían de credibilidad y establecían sus normas de forma precipitada. Las etiquetas ecológicas eran más un instrumento de comercio y comercialización que de protección del medio ambiente. Egipto expuso algunas recomendaciones para dar solución a ese problema: a) permitir que los países en desarrollo participasen en el establecimiento de criterios y normas para asegurar que sus intereses se tenían en cuenta; b) proporcionar a los países en desarrollo la asistencia técnica necesaria para mejorar su comportamiento ecológico; y c) reforzar la armonización y el reconocimiento mutuo de los planes de etiquetado ecológico, y asegurar simultáneamente que las normas de un país no se imponen a otro a

cambio del reconocimiento. Egipto opinaba que en el documento WT/CTE/W/79 podrían haberse incluido conclusiones y recomendaciones de la OMC en esa materia, para dar impulso a la labor del CCMA. Por otra parte, el título del documento WT/CTE/W/79 podría modificarse para hacer referencia a los efectos en el acceso a los mercados, en particular en los países en desarrollo, e incorporar fórmulas que permitiesen a esos países resolver los problemas de etiquetado ecológico.

149. El representante del Ecuador expresó su coincidencia con muchas de las conclusiones expuestas en el documento de Colombia y destacó determinadas iniciativas de etiquetado ecológico que habían tenido también consecuencias para las exportaciones del Ecuador. La floricultura era uno de los ámbitos más dinámicos en la economía del Ecuador y el sector exportador que más había crecido en los últimos años. El incremento de las exportaciones de flores se debía a la eficacia de ese sector y a su capacidad para adaptarse a las condiciones de acceso a los mercados de los países importadores. En efecto, el sector floricultor ecuatoriano se había adaptado a los costos crecientes y las condiciones locales diferentes del etiquetado ecológico en los países importadores. Las exportaciones ecuatorianas tenían que superar nuevos obstáculos al comercio similares a los expuestos en el documento de Colombia. El Ecuador compartía la preocupación de Colombia por la falta de vigilancia de las normas internacionales. Asimismo, se mostró también preocupado por la proliferación de sistemas privados de etiquetado ecológico que escapaban al control de las instituciones nacionales y se oponían a los objetivos de la OMC. El orador apoyó la recomendación de Colombia de que se examinase la relación existente entre la labor del CCMA en materia de etiquetado ecológico y el Código de Buena Conducta del Acuerdo sobre OTC, y se mostró favorable a la exposición de casos como el de Colombia, basados en experiencias nacionales.

150. El representante del Brasil manifestó que la contribución nacional de Colombia constituía un ejemplo del efecto que tenía la proliferación de etiquetas ecológicas en la actividad comercial del sector floricultor colombiano. El Brasil reiteraba que era necesario aplicar el párrafo 185 del Informe del CCMA de 1996 para asegurar que los programas nacionales de etiquetado ecológico no resultasen discriminatorios y se basasen en el consenso. El Brasil expresó su agradecimiento al Canadá por su intervención y su documento de alto nivel técnico, quizás los primeros de su clase que representaban en la OMC una contribución sustancial a los debates en relación con el sector forestal. De modo similar, el Brasil desearía exponer su experiencia nacional en programas de etiquetado ecológico en los sectores del cuero y de la silvicultura. La Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT) era el órgano de normalización que se encargaba de desarrollar el Programa Brasileño de Etiquetado Ecológico. Aparte de ser miembro fundador de la ISO y de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI), la ABNT participaba también en mecanismos regionales tales como la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) y el Comité de Normalización del MERCOSUR. Desde 1995, el Comité Técnico sobre Certificación Ambiental de la ABNT trabajaba en la elaboración de criterios aplicables a los productos de cuero y de calzado. Participaban en el Comité Técnico representantes de la rama de producción, del Gobierno, de los institutos de investigación y de las ONG. Cuando había consenso en el Comité respecto de los criterios de certificación, éstos se sometían a consulta pública de acuerdo con las directrices de la norma 14024 de la ISO (Declaraciones y etiquetas ecológicas -Etiquetado ecológico del tipo I- Principios y procedimientos); la Guía ISO/IEC 59 (Código de prácticas de normalización adecuadas); y el Código de Buena Conducta para la Elaboración, Adopción y Aplicación de Normas, de la OMC. El proceso de consulta pública aseguraba que las partes interesadas en el programa de etiquetado ecológico aplicable al cuero y al calzado tenían ocasión de aportar elementos respecto a los criterios propuestos. La participación aseguraba también que el Comité Técnico tendría en cuenta la idoneidad de cada comentario para su incorporación al documento. El hecho de que todas las partes interesadas interviniesen preservaba la credibilidad del proceso.

151. El sector forestal, apoyado por instituciones de investigación tecnológica, había empezado a desarrollar un programa de etiquetado, denominado CERFLOR, para verificar y certificar el origen de las materias primas brasileñas de origen forestal. Con objeto de estructurar el CERFLOR de acuerdo

con las normas internacionales de etiquetado, se había creado en 1997 un Comité Técnico sobre Etiquetado de Productos Forestales en que participaban ONG, gobiernos, instituciones de investigación y el sector comercial e industrial. El programa se basaba en las directrices de la norma 14020 de la ISO/FDIS (Etiquetas y declaraciones ambientales –Principios generales). El Comité Técnico basaba también su labor en el Informe técnico sobre silvicultura ISO/TC 207/WG2. El CERFLOR era el complemento para la posible certificación de un sistema de ordenación ambiental basada en la norma 14001 de la ISO, que tenía ya en cuenta aspectos de comportamiento ambiental. Asimismo, el CERFLOR se basaba en cinco principios que se aplicaban a los bosques naturales y de plantación: a) conservación de la diversidad biológica; b) sostenibilidad de los recursos forestales renovables y racionalidad de su aprovechamiento a corto, medio y largo plazo; c) protección del agua, del suelo y del aire; d) desarrollo ambiental, económico y social de la región en que tenían lugar las actividades forestales; y e) aplicación de la ley. Esos principios tenían en cuenta los diferentes tipos de bosques a nivel regional y local. Cabía observar que el CERFLOR y el etiquetado del cuero y del calzado eran programas voluntarios destinados a fomentar la sensibilidad del consumidor brasileño y asegurar la competitividad de los productos forestales y de cuero y calzado brasileños en el mercado internacional.

152. El representante de las Comunidades Europeas manifestó que los puntos del grupo relativo al acceso a los mercados no debían abordarse desde una perspectiva estrecha en esa materia. No convenía examinar el impacto de los programas de etiquetado ecológico en el acceso a los mercados sin tener en cuenta la función que esos programas podían desempeñar en la promoción de prácticas sostenibles de consumo y producción. Esa función se reconocía en el *Programa 21* y el Informe del CCMA de 1996. El representante expresó su agradecimiento al Canadá, a Colombia y al Brasil por sus contribuciones, y afirmó que era importante tener en cuenta que el etiquetado ecológico era sólo uno entre muchos instrumentos de política ambiental. Como habían indicado las CE en su texto oficioso sobre etiquetado ecológico (23 de julio de 1996), sería difícil imaginar una alternativa menos restrictiva del comercio. Los programas de etiquetado ecológico eran voluntarios y se basaban en la decisión de los consumidores como mecanismo de mercado. Las trabas puestas a la aplicación de programas de etiquetado ecológico podían constituir un incentivo para utilizar otros instrumentos con múltiples repercusiones en el acceso a los mercados. No obstante, las CE reconocían la necesidad de velar por una mayor transparencia en la gestión y el funcionamiento de esos programas para asegurar que no se aplicasen de forma discriminatoria. El orador señaló que el CCMA no había examinado eficazmente los efectos de los programas no gubernamentales, tales como los presentados en el documento de Colombia, e informó al Comité de que las CE habían emprendido nuevas iniciativas para hacer más transparente su programa de etiquetado ecológico. En el sitio web de la CE se ofrecía información sobre ese programa.

153. El representante de la India afirmó que el documento WT/CTE/W/79 ponía de manifiesto que la preocupación por el efecto restrictivo de las prescripciones de etiquetado en el acceso de los países en desarrollo a los mercados estaba justificada, según los estudios emprendidos por las organizaciones intergubernamentales pertinentes. Las cuestiones generales que se planteaban para su examen por el CCMA eran las siguientes: a) la forma en que los criterios de etiquetado ecológico tenían en cuenta las condiciones de los distintos países en desarrollo, como se indicaba en los estudios de la CESPAP, del CCI, de la UNCTAD, y de la OCDE, según los párrafos 10, 16, 22 y 31, respectivamente, del documento WT/CTE/W/79; b) los efectos adversos para las pequeñas y medianas empresas de países en desarrollo, especialmente el efecto de las etiquetas ecológicas en sus oportunidades de acceso a los mercados, como se indicaba en los estudios de la CESPAP, según los párrafos 10 y 12, y de la UNCTAD, según el párrafo 26; c) el aumento de los costos resultante para los exportadores de países en desarrollo del cumplimiento de las normas sobre etiquetado ecológico, como se indicaba en los estudios de la CESPAP, según el párrafo 12, y del CCI, según el párrafo 20; y d) la necesidad de mayor transparencia y de una participación más efectiva y representativa de los exportadores de los países en desarrollo, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, como se indicaba en los estudios del CCI, según el párrafo 18, de la UNCTAD, según el párrafo 22, de la ONUDI, según el

párrafo 29, y de la OCDE, según el párrafo 31. El CCMA debía ofrecer a los Miembros la oportunidad de debatir esas cuestiones. En cuanto a la experiencia y las preocupaciones de Colombia respecto de las restricciones de acceso a los mercados causadas por los programas privados de etiquetado ecológico, el representante afirmó que con ello se ponía de relieve el efecto proteccionista de las etiquetas ecológicas en las exportaciones de los países en desarrollo. Aunque aparentemente se habían establecido con fines ambientales, esos programas de etiquetado ecológico eran en realidad medios para restringir el comercio.

154. El representante del Pakistán dijo que las reservas de su delegación respecto de las normas ambientales obedecían a su preocupación por los motivos que subyacían bajo esas normas y la medida en que determinaban al consumidor a adquirir productos inocuos para el medio ambiente. Los indicios al respecto eran dispares. El estudio de la OCDE contenía la evaluación más optimista, según la cual el etiquetado ecológico sólo había sido moderadamente eficaz, con algunas salvedades. Otra preocupación consistía en determinar si esos programas tenían repercusiones importantes en el mercado. Según uno u otro estudio, los datos eran también dispares. La CESPAP destacaba que, sobre todo en la región asiática, los efectos en el mercado habían sido importantes. El Pakistán no tenía claro hasta qué punto el etiquetado ecológico favorecía el logro de los objetivos ambientales. Los datos disponibles indicaban que los programas de ese tipo tenían efectos negativos en el acceso a los mercados, como ponía de manifiesto el documento de Colombia, debido a la proliferación de programas individuales que imponían costos a los exportadores de los países en desarrollo, especialmente a las pequeñas y medianas empresas. En efecto, esas empresas no disponían de conocimientos técnicos suficientes para adaptarse a tales programas. Uno de los principales problemas era que esos programas requerían la observancia de criterios inadecuados, principalmente debido a que no todos los países interesados podían participar en su formulación. La aplicación de esos programas sin representación en su elaboración daba lugar a diversos problemas. Si había participación efectiva de los países en desarrollo, suficiente transferencia de tecnología y líneas de crédito para sus productores, esos países podían examinar la posibilidad de adherirse a tales programas.

155. El representante de Corea expresó su agradecimiento a Colombia por presentar un estudio específico sobre su sector de floricultura. En el documento de Colombia se mostraba una situación beneficiosa para todos que permitía lograr tanto una mejor protección del medio ambiente como una mayor productividad; también ponía de manifiesto algunas dificultades propias del programa privado de etiquetado ecológico, y sus repercusiones potencialmente negativas en el acceso a los mercados. Los resultados de los recientes estudios llevados a cabo por una organización internacional sobre los efectos del etiquetado ecológico para el comercio, expuestos en el documento WT/CTE/W/79, reforzaban el temor de Corea a que los efectos de mercado fuesen reales y negativos. Aunque la mayor parte de los programas de etiquetado ecológico eran voluntarios, podían causar efectos discriminatorios en el comercio, como ponían de manifiesto los estudios llevados a cabo por la CESPAP y la UNCTAD. Según el estudio de la CESPAP, las grandes empresas habían notificado costos de reajuste del 8 al 10 por ciento, que en el caso de las pequeñas y medianas empresas se situaban entre el 15 y el 20 por ciento. El efecto del etiquetado ecológico en la competitividad y su función de posible obstáculo al comercio e instrumento de discriminación contra los productos extranjeros eran manifiestos. Los principales medios para reducir al mínimo los efectos negativos del etiquetado ecológico en el comercio eran la transparencia, la equivalencia y el reconocimiento mutuo. Para asegurar la transparencia en el desarrollo y la gestión de los programas de etiquetado ecológico debía garantizarse la participación de todas las partes interesadas en las consultas y en el proceso decisorio. Sin embargo, a los exportadores de los países en desarrollo, que a menudo carecían de información y capital, podía resultarles sumamente difícil participar en esos procesos en pie de igualdad. La existencia de múltiples programas y de criterios constantemente cambiantes agravaba el problema. Para los exportadores de los países en desarrollo, en particular para las pequeñas y medianas empresas, tenía importancia una aplicación más flexible de la equivalencia y del reconocimiento mutuo. Durante el Simposio de ONG celebrado en 1996, muchos participantes

habían mostrado su desacuerdo con los procedimientos de la ISO y expresado sus dudas respecto de la transparencia de sus consultas y decisiones y de la representación de todas las partes interesadas; muchas empresas de países en desarrollo, especialmente las pequeñas y medianas, no habían participado en los procedimientos de la ISO. Aunque el documento WT/CTE/W/79 no contenía recomendaciones sobre la forma de subsanar esos efectos en el comercio, se deberían estudiar fórmulas prácticas para resolver tales problemas.

156. El representante de Hong Kong, China expresó su agradecimiento a Colombia por su exposición. Hong Kong, China estaba examinando su experiencia nacional en programas de etiquetado ecológico. Un tema común característico de los estudios sobre etiquetado ecológico y empaquetado era la necesidad de asegurar la transparencia. El orador estaba interesado en aprender más sobre el principio de responsabilidad ampliada de los productores, descrito en el documento WT/CTE/W/75 como una estrategia emergente utilizada en los países de la OCDE para promover la integración de los factores ambientales asociados al ciclo vital de los productos. Ese principio se había aplicado ya al empaquetado ecológico a través de diferentes instrumentos, tales como los sistemas de pago y reembolso de depósitos y el impuesto a los productos. Sin embargo, la información actual se limitaba a su probable efecto en el acceso a los mercados y en el comercio y la competencia. Se preveía que el taller de la OCDE que tendría lugar en Helsinki en mayo arrojaría luz sobre esa cuestión; la Secretaría podría comunicar los resultados de ese taller. Si existían repercusiones importantes en el acceso a los mercados, se podría examinar si esas medidas se habían incluido en el sistema de notificación de la OMC y en la base de datos ambientales (EDB).

157. El representante de Hong Kong, China se mostró de acuerdo en que los programas de etiquetado ecológico podían establecer distinciones entre los productos al otorgar preferencia a determinadas marcas dentro de la misma categoría de productos merced a su efecto relativo en el medio ambiente. Ese hecho no parecería discriminatorio mientras se aplicasen uniformemente los mismos criterios a productos similares, al margen de su origen. Los programas en que se incorporasen criterios relacionados con la producción deberían ser objeto de especial atención, ya que podían resultar discriminatorios para las importaciones si reflejaban exclusivamente las preferencias ambientales del país importador. El proceso de selección y adopción de criterios, si no se basaba en elementos científicos y objetivos, podía utilizarse como instrumento proteccionista. La utilización de criterios relacionados con la producción a ese respecto era especialmente problemática. Sin embargo, para ser eficaces, todos los programas de etiquetado ecológico, incluidos los que se basaban sólo en las características de los productos, tenían que ejercer un efecto tangible en las cualidades comerciales del producto correspondiente, con lo que algunos comerciantes se verían forzosamente en desventaja. La transparencia y la participación en la adopción de criterios y la equivalencia del reconocimiento mutuo eran importantes para mitigar los efectos adversos en el comercio. Sin embargo, no existían garantías de que con ello se lograra una solución completa. Según el estudio de la OCDE, hasta la fecha no se había encontrado prueba alguna de cambios en las corrientes comerciales determinados por la utilización del etiquetado ecológico en los países de esa Organización. En el estudio de la ONUDI se indicaba que varias pequeñas y medianas empresas no tenían conocimiento de efectos adversos del etiquetado ecológico en el acceso a los mercados. Por tanto, era perfectamente razonable esperar que la conciencia ambiental siguiera aumentando, con lo que esos efectos podían hacerse más patentes. El representante indicó que existía el riesgo de que, si las etiquetas ecológicas se utilizaban como medida proteccionista, los distintos países aplicasen esos programas con carácter recíproco. Se mostró partidario de seguir trabajando en esa materia, en particular sobre las alternativas al etiquetado ecológico y la transferencia de tecnología.

158. El representante de Malasia, en nombre de la ASEAN, agradeció a Colombia su contribución. La ASEAN afirmó que la ausencia de una definición internacionalmente acordada de ordenación forestal sostenible podía dar lugar a que se utilizasen los programas de etiquetado ecológico como instrumento de discriminación comercial. El documento WT/CTE/W/79 ponía de manifiesto ese problema y aclaraba los efectos negativos para los países en desarrollo en varios sectores, tomando

como base las conclusiones de diversos estudios. Ello mostraba con claridad que el etiquetado ecológico tendía a ser utilizado como instrumento más comercial que ambiental, aspecto puesto de relieve en el documento de Colombia. A pesar de los esfuerzos desplegados por Colombia en la aplicación de programas ecológicamente eficaces, era evidente que esos esfuerzos no habían servido para alcanzar el objetivo al que, en principio, se destinaban. Con ello se demostraba que los problemas relacionados con la introducción y la aplicación unilateral del etiquetado ecológico, en particular por órganos privados, seguían sin resolver; las prescripciones en materia de etiquetado ecológico habían cerrado a Colombia oportunidades de acceso a los mercados. Era preciso seguir examinando esa cuestión. El representante expresó su agradecimiento a las CE por sus aclaraciones acerca de la iniciativa de etiquetado ecológico propuesta en el sector forestal y pidió que se mantuviese a la ASEAN al corriente de las innovaciones que se produjesen en ese terreno, ya fuese en el CCMA o en cualquier otro foro adecuado de la OMC.

159. El representante del Canadá manifestó que el debate había puesto de relieve que el etiquetado ecológico constituía un verdadero problema para muchos Miembros, en particular para los que exportaban productos básicos. No se trataba de un problema entre países desarrollados y países en desarrollo. El etiquetado ecológico era motivo de preocupación para el Canadá y había afectado a un importante sector de su economía. El orador hizo referencia al párrafo 15 del documento WT/CTE/W/79, que indicaba que en países de la CESPAP se habían establecido algunos sistemas de etiquetado ecológico. Sería interesante que esos países pudiesen comunicar sus experiencias, ya fuese respecto de los programas diseñados para el mercado nacional como de los aplicados a los mercados de exportación. Como había descrito en su exposición sobre los bosques, el Canadá había desarrollado algunos programas, tales como el relativo a la EPDS, orientados preferentemente a los mercados de exportación, pero que podían aplicarse también en el contexto nacional y ofrecían una orientación más interna como alternativa ambiental. El párrafo 34 ponía de relieve cómo el etiquetado ecológico podía pasar de ser instrumento de los minoristas a serlo de los canales de distribución. Como se establecía en el documento sobre la experiencia nacional del Canadá en su programa de etiquetado ecológico, el resultado podía ser que esos programas tuviesen un mayor efecto en el mercado. Las experiencias descritas en los documentos del Canadá y de Colombia indicaban que la vinculación de los canales de distribución y el efecto que los grupos podían ejercer en los modelos de compra de los canales de distribución eran cada vez más importantes. Ese era un aspecto que debería examinarse. En relación con el documento WT/CTE/W/79, el orador manifestó que correspondía a las delegaciones extraer conclusiones basadas en los diversos enfoques y experiencias relativos a esas cuestiones.

160. El representante del Canadá agradeció a Colombia su contribución sobre el sector de la floricultura. En cuanto al comentario de las CE sobre la necesidad de un debate equilibrado, estaba claro, a la luz de las experiencias nacionales presentadas por el Canadá, Colombia y el Brasil, que la cuestión no era la mejora del medio ambiente. Los programas nacionales estaban diseñados para alcanzar ese objetivo. Existía un aspecto de equilibrio en el debate, ya que todos los ejemplos mencionados se referían a la forma en que los Miembros habían tratado de desarrollar fórmulas nacionales para mejorar las prácticas sostenibles de producción; el programa FLORVERDE era un ejemplo concreto de la forma en que Colombia trataba de mejorar la producción económica y ecológica. La cuestión era cómo abordar los programas de etiquetado ecológico y su potencial para dispensar trato discriminatorio a enfoques igualmente válidos para mejorar el comportamiento ambiental. En ese contexto, las conclusiones de Colombia eran similares a las que estaba examinando el Canadá. El representante afirmó que los Miembros deberían prestar especial atención a las consideraciones de política expuestas en los párrafos 43 a 54, más que a la nota de pie de página 1, cuyo examen carecía ya de oportunidad. Agradeció a Colombia el levantamiento del carácter reservado de su documento y su publicación como documento conjunto del Comité de OTC; era útil que el documento pasase a dominio público, ya que trataba sobre programas privados. Asimismo, era importante transmitir el mensaje político de que el CCMA se interesaba por esa cuestión.

161. En cuanto a las preguntas de la India sobre la forma de introducir en un plazo de tres años las innovaciones requeridas en los programas de etiquetado ecológico del tipo I, el representante del Canadá manifestó que la principal crítica del sector era que esos programas no resultaban suficientemente flexibles o rápidos en comparación con los del tipo III. Si la empresa no cumplía actualmente los criterios, las innovaciones tecnológicas introducidas en un plazo de tres años le permitirían obtener la etiqueta. En cuanto a la forma en que se tenían en cuenta las observaciones, afirmó que al final del proceso de examen había ocasión de exponer las razones por la que se habían tenido en cuenta los comentarios y la forma en que se había hecho. De acuerdo con el párrafo 185 del Informe del CCMA de 1996, el representante expresó su agradecimiento a Nueva Zelanda (G/TBT/CS/N/86) y al Japón (G/TBT/CS/N/73) por haber ajustado sus programas de etiquetado ecológico al Código de Buena Conducta del Acuerdo sobre OTC.

162. El representante de los Estados Unidos afirmó que el etiquetado ecológico era un instrumento válido para lograr metas de medio ambiente y facilitar información al consumidor. Sería injustificable que la OMC tratase de impedir que se proporcionase información a los consumidores. Aunque los Estados Unidos tenían experiencia en la aplicación de programas concretos que habían planteado problemas, ello no restaba valor al etiquetado ecológico en la formulación de políticas de medio ambiente. A juzgar por la experiencia de los Estados Unidos, no existían motivos para considerar probable que los programas de etiquetado del sector privado planteasen más problemas que los programas patrocinados por los gobiernos.

Punto 4 Las disposiciones del sistema multilateral de comercio con respecto a la transcendencia de las medidas comerciales utilizadas con fines ambientales y las medidas y prescripciones ambientales que tienen efectos comerciales significativos

163. El representante de Hong Kong, China dijo que el documento WT/CTE/W/77 constituía una oportuna visión general de las notificaciones relacionadas con el medio ambiente presentadas en 1997. El considerable número de notificaciones al respecto y la amplia diversidad de las obligaciones de notificación contraídas en el marco de la OMC ponían de manifiesto la importancia de la base de datos ambientales (BDA) como referencia. La metodología de búsqueda utilizada en la recopilación del documento WT/CTE/W/77 era acertada, dadas las limitaciones de recursos. Los Miembros deberían contribuir a ese ejercicio facilitando a la Secretaría datos relativos a la inclusión o exclusión de notificaciones específicas, así como comentarios sobre la selección de las palabras de búsqueda. El representante apoyaba la propuesta contenida en el párrafo 7 b) del documento WT/CTE/W/78 de que se realizasen exámenes antes del examen general anual. El suministro de la BDA en soporte electrónico debería permitir la utilización más amplia posible de la base de datos. Una opción práctica en términos de accesibilidad y comodidad era la incorporación de la BDA al Servicio de Difusión de Documentos (SDD). El orador preguntó por las repercusiones de un hipervínculo en los costos. La BDA sería incluso más útil si pudiese actualizarse con mayor frecuencia.

164. El representante de las Comunidades Europeas manifestó que las propuestas contenidas en el documento WT/CTE/W/78 eran congruentes con la recomendación formulada en el Informe del CCMA de 1996. La BDA debería actualizarse anualmente, como se había decidido para 1997 en el documento WT/CTE/W/77.

165. El representante del Japón apoyó las propuestas contenidas en el documento WT/CTE/W/78 y manifestó que, puesto todas las medidas sanitarias y fitosanitarias se referían a la protección de la salud humana, la sanidad animal y la preservación de los vegetales, considerarlas a todas ellas como relacionadas con el medio ambiente podría inducir a error. Esa era la cuestión que el Japón se había planteado respecto a las medidas que debían considerarse relacionadas con el medio ambiente. El Japón pidió a la Secretaría que aclarase los criterios utilizados para seleccionar las notificaciones

relacionadas con el medio ambiente presentadas en el marco del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.

166. El representante de la India tenía interés en examinar si existían lagunas en términos absolutos en materia de transparencia, como se indicaba en el párrafo 3 del documento WT/CTE/W/77. La India apoyaba las propuestas contenidas en el documento WT/CTE/W/78. El orador propuso que en las modificaciones que se introdujesen en el glosario de palabras de búsqueda se tuviese en cuenta la expresión "tecnología ambiental".

167. El representante de Malasia, en nombre de la ASEAN, expresó su apoyo a las propuestas contenidas en el documento WT/CTE/W/78.

168. La representante de México manifestó que su delegación no tenía nada que objetar a las propuestas contenidas en el documento WT/CTE/W/78. México compartía la preocupación del Japón respecto a los criterios utilizados para definir las medidas relacionadas con el medio ambiente, cuestión que debería estudiarse más a fondo en el CCMA.

169. El representante del Brasil consideraba que, en la fase actual, el desarrollo de una BDA debería centrarse en las opciones más viables. La utilización de palabras clave era un criterio adecuado para localizar la mayor parte de las notificaciones relacionadas con el medio ambiente. El glosario de palabras de búsqueda habría de ampliarse para dar cabida a nuevas notificaciones relacionadas con el medio ambiente. El Brasil se mostró dispuesto a dar instrucciones a la Secretaría sobre la forma de llevar a cabo un examen provisional de la idoneidad de las palabras de búsqueda utilizadas en la recopilación de la BDA. En cuanto a la difusión de la BDA, el Brasil no tendría nada que objetar a la creación de un hipervínculo de Internet para su inclusión en la BDA. Por muy ventajosa que fuese esa posibilidad, podía resultar costosa. En suma, el Brasil apoyaba las propuestas de llevar a cabo un examen general de todas las notificaciones relacionadas con el medio ambiente, como el ultimado para 1997 en el documento WT/CTE/W/77, a fin de actualizar continuamente la BDA.

170. El representante de los Estados Unidos dijo que de nada valdría que el CCMA tratase de adoptar la definición de medida relacionada con el medio ambiente. La BDA sólo podría funcionar si se concedía a la Secretaría flexibilidad suficiente para aplicar su criterio y se reconocía sin ambages que no existía consenso sobre lo que constituía una medida relacionada con el medio ambiente. El glosario de palabras de búsqueda debería actualizarse de forma continua. Por ejemplo, existía un desfase entre las notificaciones relacionadas con la pesca mencionadas en los documentos WT/CTE/W/80 y WT/CTE/W/77. Por otra parte, convendría que la BDA estuviese disponible en un formato que se pudiese presentar inmediatamente al público, ya que las notificaciones que contenía no eran documentos de carácter reservado. El representante propuso que se levantara el carácter reservado del documento WT/CTE/W/77, como primer fruto de un proceso acordado en la Conferencia Ministerial de 1996, en particular con miras a la próxima Conferencia Ministerial.

171. El representante de la Secretaría manifestó que, para determinar el costo de la difusión electrónica de la BDA, se necesitaría establecer un hipervínculo en detalle. Los criterios utilizados en la recopilación de la BDA se establecían en el párrafo 4 del documento WT/CTE/W/78; ese glosario de palabras de búsqueda se modificaría de forma continua en función de las sugerencias de las delegaciones.

172. El Presidente dijo que celebraría consultas sobre la propuesta de levantar el carácter reservado del documento WT/CTE/W/77.

173. El CCMA adoptó las propuestas relativas a la base de datos ambientales formuladas en el párrafo 7 del documento WT/CTE/W/78 para dar cumplimiento a las recomendaciones contenidas en el párrafo 192 del Informe (1996) del Comité a la Conferencia Ministerial de Singapur (WT/CTE/1).

Otros puntos

174. El representante de la India pidió que se distribuyese como documento de trabajo del CCMA la declaración hecha por su delegación en respuesta a algunas de las observaciones formuladas en relación con el documento de la India WT/CTE/W/66, sobre la cuestión del acceso a los mercados y la transferencia de tecnología ecológicamente racional. Como habían mencionado las CE en referencia al etiquetado ecológico, la India consideraba que no era necesario adoptar un enfoque estrecho respecto al grupo de puntos relativo al acceso a los mercados.

175. El CCMA expresó su reconocimiento al Sr. Scott Vaughan por la importante contribución a los trabajos sobre comercio y medio ambiente realizada en su calidad de Miembro de la Secretaría de la OMC.

ANEXO

COMITÉ DE COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE

Programa de trabajo y calendario de reuniones para 1998

1. Como se acordó en el Informe del Comité de Comercio y Medio Ambiente de 1997 (WT/CTE/2), el CCMA seguirá ampliando y profundizando el análisis de todos los puntos de su programa de trabajo basado en el enfoque de grupos de puntos relativos a los temas de acceso a los mercados y relación entre los programas multilaterales de medio ambiente y comercio. Se concederá tiempo a los Miembros, si así lo desean, para volver a analizar los puntos ya examinados en reuniones anteriores.

2. En la reunión de los días 19 y 20 de marzo, el CCMA examinará los puntos relacionados con el tema del acceso a los mercados, a saber:

- Punto 2: la relación entre las políticas ambientales relacionadas con el comercio y las medidas ambientales que tengan efectos comerciales significativos, y las disposiciones del sistema multilateral de comercio;
- Punto 3: la relación entre las disposiciones multilateral de comercio y:
 - a) las cargas e impuestos aplicados con fines ambientales;
 - b) las prescripciones aplicadas con fines ambientales a los productos, con inclusión de normas y reglamentos técnicos y prescripciones en materia de envase y embalaje, etiquetado y reciclado;
- Punto 4: las disposiciones del sistema multilateral de comercio con respecto a la transcendencia de las medidas comerciales utilizadas con fines ambientales y las medidas y prescripciones ambientales que tienen efectos comerciales significativos; y
- Punto 6: el efecto de las medidas ambientales en el acceso a los mercados, especialmente en lo relativo a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, y los beneficios resultantes para el medio ambiente de la eliminación de las restricciones y distorsiones del comercio.

3. En una reunión que se celebrará los días 23 y 24 de julio, el CCMA examinará los puntos relativos a la relación entre el programa multilateral de medio ambiente y el programa multilateral de comercio, a saber:

Sesión informativa con determinadas Secretarías de Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Ambiente;

- Punto 1: la relación entre las disposiciones del sistema multilateral de comercio y las medidas comerciales adoptadas con fines medioambientales, con inclusión de las adoptadas en aplicación de acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente;
- Punto 5: la relación entre los mecanismos de solución de diferencias del sistema multilateral de comercio y los previstos en los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente;
- Punto 7: la cuestión de la exportación de mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen; y
- Punto 8: las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

4. Los días 26 a 28 de octubre, los debates del CCMA comprenderán:

Puntos del grupo relativo al acceso a los mercados (puntos 2, 3, 4 y 6);

Puntos del grupo relativo a los vínculos existentes entre los programas multilaterales de medio ambiente y de comercio (puntos 1, 5, 7, y 8);

Punto 9: el programa de trabajo previsto en la decisión sobre el comercio de servicios y el medio ambiente;

Punto 10: la información a los órganos competentes sobre las disposiciones apropiadas que han de adoptarse en lo que respecta las relaciones con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a las que se hace referencia en el artículo V del Acuerdo por el que se establece la OMC; e

Informe del CCMA al Consejo General a finales de 1998.
